

Semillas

Julio 2013

CONTENIDO
LIBRE
DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL

ISSN 0122-0985 Colombia



DIÁLOGO

CAMPO CIUDAD



51/52



Editorial

En Colombia se estima que el 18% de los ciudadanos, cerca de 8.1 millones, padecen algún tipo de hambre y el 41% de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria y en el país mueren por desnutrición cinco mil niños al año. En muchos países del Sur que tienen una situación crítica de inseguridad alimentaria similar, se debe al perverso modelo de desarrollo de acumulación de la riqueza y de control de los medios productivos y del sistema alimentario por un puñado de conglomerados económicos, que le han arrebatado a los agricultores locales y a los consumidores el poder de decidir que se produce y que se consume.

En los últimos cincuenta años especialmente en los países del sur, se ha presentado un drástico cambio en los patrones de asentamiento campo-ciudad; el consumo mundial y la población se ha concentrado en grandes centros urbanos. Para el caso de Colombia, pasamos en la década del sesenta de ser una sociedad mayoritariamente campesina, a una población 70% urbana. La demanda desenfrenada de alimentos y de recursos naturales, ha generado una enorme huella ecológica de las ciudades; puesto que los ciudadanos han olvidado en gran medida que las necesidades básicas para la vida, como el agua, los alimentos y buena parte de la fuerza de trabajo no se producen, ni provienen de las ciudades, y que la demanda de estos recursos, generan un fuerte impacto ambiental y socioeconómico especialmente en las zonas rurales periurbanas de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, entre otras; que finalmente se transfieren a toda la sociedad y no son asumidos responsablemente por las políticas gubernamentales y tampoco por las entidades y grupos económicos que son responsables de estos modelos de desarrollo.

En el proceso de interrelación campo ciudad se ha agudizado los múltiples conflictos sociales, culturales y económicos, donde el concepto de lo rural fue asociado al subdesarrollo o atraso, y el crecimiento de lo urbano al concepto de modernidad. Se ha invisibilizado el territorio rural, en toda su complejidad, simplemente se lo asimila como proveedor de “recursos naturales” y de suelo urbanizable. Las ciudades no solo han succionado bienes naturales de las regiones como el agua, la energía eléctrica, el petróleo y los alimentos, sino que han ido apropiándose del territorio, para urbanizarlo, con el consiguiente deterioro social, ambiental y la pérdida de identidad cultural.

El análisis de las huellas geográficas a escala local se refiere al anclaje espacial de los flujos materiales entre el campo y la ciudad. Las vinculaciones y flujos entre las ciudades y los espacios rurales, pueden ser regionales, nacionales o internacionales. Estos conflictos y la huella ecológica territorial se evidencian fuertemente en una ciudad como Bogotá, en donde la ciudad tiene una complejidad regional, puesto que se alimenta de un sistema muy diverso de agro ecosistemas campesinos e indígenas de las regiones y departamentos aledaños, que es lo que ha permitido que exista una disponibilidad alimentaria plena. Predomina en gran parte de la región de la Sabana, una visión desarrollista que pretende el crecimiento económico y el fortalecimiento de los fiscos municipales a partir de una urbanización desaforada o de la instalación de complejos industriales y agroindustriales. A Bogotá entran diariamente 14 mil toneladas de comida, de todos los pisos térmicos y diversidades, de las cuales siete mil se quedan en la ciudad.

El Distrito Capital integra un mercado interno altísimo, que como región es prácticamente el 45% de la economía colombiana; pero hoy se pretende desvertebrar este mercado interno. La ciudad consume entre el 80% y el 100% de productos como: papa, hortalizas, frijol, panela y frutas, que producen los campesinos de la región cercana, y buena parte del plátano que llega de Arauca y Armenia, el tomate de la Costa y la papa de Ipiales. El 55% del total de alimentos que ingresan a Corabastos en Bogotá es de origen campesino, producidos en pequeñas y medianas propiedades. El gobierno nacional pretende vender a Corabastos y las plazas de mercado; y se está acabando con los sistemas populares de comercialización de alimentos, para entregarle el control total del sistema alimentario a la economía formalizada global; entonces los campesinos que aún producen alimentos quedarán en manos de las grandes superficies.

La correlación entre campo y ciudad se está desvertebrando. Si el campo fue tradicionalmente generador de alimentos para las ciudades, ahora los supermercados surten a la población de un alto componente de productos industriales que permean las tendencias de consumo de los alimentos. Las ciudades serían impensables sin el aporte de los campesinos. Si la economía campesina se acaba, la alimentación de las ciudades sufrirá drásticas consecuencias.



La urbanización desbordada y desordenada de Bogotá y sus alrededores, han ido arrasando a su paso los humedales y han sepultado bajo el cemento y el pavimento los afluentes del río, con los críticos impactos ambientales y sociales que se presentan a lo largo de la cuenca del río Bogotá, que se evidencian en las inundaciones, que se presentan especialmente en las épocas de lluvias. Adicionalmente el modelo de uso de la tierra en las zonas aledañas al Distrito Capital presenta fuertes impactos ambientales y sociales, en donde en el Norte y el Noroccidente se desarrolla la agroindustria de flores, con fuertes impactos en los acuíferos, en la disponibilidad de agua y los efectos ambientales del uso de pesticidas y agroquímicos y también un acelerado proceso de urbanización de estratos altos; mientras que en las áreas rurales del sur predominan minifundios de economías familiares, en laderas y en zonas de subpáramo.

El todo el país fracasaron los Planes Departamentales de Agua, que quiso implementar el gobierno nacional, por la falta de perspectiva territorial y la nula participación de los directamente afectados e involucrados con la problemática del agua. Frente a una política de aguas construida para favorecer la inversión privada y el control transnacional de los territorios, las organizaciones comunitarias han contrapuesto modelos comunitarios de manejo del agua en las zonas rurales y en algunos centros urbanos, que ha funcionado en Colombia desde hace más de cincuenta años. Por tanto, la defensa y cuidado del territorio es condición necesaria para la gestión del agua, no solamente para garantizar el cuidado de las fuentes de agua y el consumo de la población rural, y también de las poblaciones urbanas.

Luego de más de medio siglo de guerras y conflictos armados en Colombia, las grandes ciudades han sido las receptoras de la mayor parte de la población desplazada, que llega principalmente a las zonas más marginadas y a los cinturones de miseria. Se estima que en los últimos 20 años han sido desplazadas más de cuatro millones de personas del campo hacia las ciudades, con los ya conocidos impactos en los centros urbanos y en toda la sociedad.

Por otro lado, la minería plantea un escenario en disputa en los territorios rurales y urbanos. El 59% del territorio continental del país está solicitado en concesión para títulos mineros. La minería se ha constituido en otra forma de violencia, y otra forma de desarrollo que expulsa el campesinado colombiano hacia las ciudades y la minería en los centros urbanos y zonas aledaña impacta fuertemente los paisajes, los ciclos hidrológicos y la disputa por el territorio de las poblaciones marginadas y por las zonas para producir seguridad y soberanía alimentaria. Es decir a la vulnerabilidad ambiental se añade la alimentaria y la descomposición del tejido social.

En medio de la especulación de los precios de alimentos en el mundo y del colapso del sector agropecuario en el país, se inicia la implementación de los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Colombia con los países industrializados; es así como las importaciones masivas de alimentos subsidiados en el Norte, ya empiezan a mostrar los efectos desastrosos que generan sobre la de la producción nacional de alimentos y sobre la viabilidad de la economía campesina. Las ciudades empiezan a estar inundadas de arroz, maíz, frijoles y productos lácteos importados y no estamos mirando los efectos que tendrá sobre la soberanía y autonomía alimentaria nacional.

Situaciones similares de conflictos ambientales y sociales se presentan en otras ciudades de Colombia, como Medellín y Cali, puesto que históricamente han desconocido el papel de los ecosistemas aledaños y de las comunidades rurales, en la sostenibilidad de la ciudad. También en ciudades intermedias como Montería es evidente los problemas ambientales y socioeconómicos generados por el mal manejo ambiental de las ciénagas y los humedales en las zonas periurbanas y de zonas con potencial agrícola.

En este número de la revista, presentamos algunos aportes conceptuales sobre el diálogo campo - ciudad, que muestra la interrelación de dependencia, los conflictos ambientales y socioeconómicos generados por los modelos de desarrollo que se implementan en el país. También queremos resaltar algunas experiencias locales de construcción de alternativas sostenibles en el campo y en las ciudades, que incluyen propuestas como: los mercados campesinos en Bogotá, la producción de alimentos y semillas en la zona rural y urbana de Bogotá, el festival de expresiones rurales y urbanas en Santander, la producción y comercialización agroecológica en Medellín, los procesos de autogestión y formación en las laderas de Cali, entre otros; que nos muestran que es posible crear relaciones de solidaridad y complementariedad entre el campo y la ciudad, de tal forma que nos permitan construir sociedades rurales y urbanas incluyentes y sostenibles.



La alimentación como derecho¹

Juan Carlos Morales González²

Las Naciones Unidas, a través de su organismo especializado para la alimentación y la agricultura (FAO), declaró el 2013 como el año internacional de la quinua. La decisión no es casual, responde con toda claridad a un diagnóstico claro: en todo el mundo, grandes contingentes humanos padecen cada día de hambre. Producto de esta realidad, o de las prácticas alimenticias impuestas por los grandes grupos económicos, se padece desnutrición, de la que se desprenden graves problemas de salud.

El hambre no es casual ni “castigo divino”, es el reflejo de una realidad marcada por inmensas desigualdades que campean por doquier: mientras unos pocos poseen mucho, la inmensa mayoría no posee ni lo necesario para vivir. Pero también es el patético reflejo de la concentración de la tierra, robada, negada –o insuficiente– a las manos, y para las manos, de quienes la trabajan. A la vez es el reflejo de la escasez de agua que caracteriza –y se amplía– a extensas regiones del mundo, haciendo improductiva la tierra. El cambio climático, cada día más evidente, agrava esta realidad.

De esta manera, el sistema de las Naciones Unidas al tomar esta decisión, aunque con paños de agua tibia, quiere llamar la atención al conjunto de la humanidad sobre una situación que exige medidas inmediatas y urgentes, para las cuales repara en un alimento integral, pero también en el sistema social (indígena y campesino) que ha garantizado su protección, uso, transformación, consumo y difusión, sistema basado en lo fundamental en la solidaridad. Sin duda, en ésta descansa



buena parte de los secretos para superar las dolencias que afectan a millones de seres humanos. Solidaridad que implica compartir, dar, entregar, pero también, recibir, multiplicar, acompañar. Con evidencia: que con lo poco se haga mucho, sin necesidad de derroche ni dinero, como lo ha impuesto el sistema vigente, el cual mide todo con el rasero de “cuánto gana ahí”, mercantilizando y reduciendo todo a una vil mercancía, con lo cual le niega, le roba, a cada sustancia, producto, etcétera, su mayor razón de ser y existir: ser de todos/as y para todos/as.

Es esta realidad la que propicia, de manera increíble, que en una región como América Latina y el Caribe, incluida Colombia, el hambre afecte a 53 millones de personas. Para Colombia la situación es preocupante, pues se estima que el 18%

¹ Informe “Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia”. Juan Carlos Morales González.

² Fian-Colombia. C.e.: porderechoalimentacion@gmail.com



Para Colombia la situación del hambre es preocupante, pues se estima que el 18% de sus ciudadanos (cerca de 8,1 millones) lo padecen en algún grado.

de sus ciudadanos (cerca de 8,1 millones) lo padecen en algún grado. En su mayoría son desplazados y campesinos situados en áreas marginales, así como desempleados que habitan ciudades grandes o intermedias. Donde más se registran datos preocupantes es en departamentos como el Chocó y Córdoba, pero también en barrios como Cazucá (localizado en Soacha, Cundinamarca), lugares donde viven familias que no tienen asegurada su alimentación diaria. Los programas de restaurantes dispuestos por gobiernos locales, o el sistema escolar de alimentación también dispuesto en algunas ciudades, evidencia que la problemática del hambre es más extensa de lo que a primera vista se pudiera considerar.

Pero que esto suceda en Colombia, un territorio con todos los climas, que por su conformación física es apta para sembrar gran variedad de productos, es casi increíble. Es este tipo de realidades las que evidencian que el actual sistema económico social y político vigente va contra las mayorías sociales, además de antinatural, incoherente, inconsistente, insostenible.

Las cifras actuales sobre el hambre son para sonrojar hasta el más ambicioso de los ricos que hoy dominan el mundo, en particular a los que se han lucrado con el trabajo de todos en Colombia. Mientras el 7,7% —en promedio— de la población latinoamericana sufre problemas de hambre y, por ende, de desnutrición, en Colombia se supera el promedio regional con el 12,6%. Las cifras las reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2012 en América Latina y el Caribe.

Los impactos de la desnutrición y, en general, de la malnutrición en Latinoamérica —en términos de salud— pueden ser graves y varían de acuerdo con el tipo de desequilibrio de nutrientes. Las deficiencias en vitaminas y minerales pueden dar lugar a problemas de visión o ceguera (vitamina A), debilidad muscular, parálisis, trastor-

nos nerviosos, problemas digestivos, piel agrietada (vitamina B), inflamación de la glándula tiroides, mal desarrollo cerebral (yodo), y anemia (hierro).

Esta problemática debe ser vista como un proceso que va mucho más allá de la simple alimentación. Esto significa que los temas de acceso a la tierra y el agua, la producción, transformación, generación y aplicación de conocimientos, estructuración cultural o social en torno al proceso alimentario, y su relación con el medio ambiente y la soberanía alimentaria de cada país, deben ser considerados para concretar la garantía plena del derecho a la alimentación (DA).

En esta perspectiva hay que tener en cuenta que Colombia ratificó en 1968 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha firmado muchas convenciones, acuerdos y declaraciones relacionadas con el tema alimentario y/o del DA, y ha incorporado en su Constitución artículos relacionados con el tema. Pero salvo algunos desarrollos jurisprudenciales en temas como por ejemplo la preservación de los recursos naturales, el pago de pensión alimentaria a niños y niñas, la protección alimentaria de la población reclusa y el apoyo a la población víctima de desplazamiento forzado, aún se carece de una normativa amplia, explícita e inequívoca, en torno a las obligaciones que las entidades estatales, los particulares, los intereses económicos nacionales y extranjeros, así como la sociedad restante, deben tener en torno al respeto, protección y realización del DA. Esta ausencia de una política pública clara y precisa, es la que facilita que los programas e iniciativas agenciadas por el Estado, se caractericen por su asistencialismo, con planes extremadamente focalizados (lo cual va en contra de la universalidad del derecho), inconstantes, que no generen capacidades de participación de los titulares del derecho ni espacios de fiscalización ciudadana.

Es este tipo de realidad, donde la tierra continúa concentrada en pocas manos, dedicada en su mayor porcentaje a la es-



peculación, el monocultivo o el pastoreo, negada a los campesinos e indígenas que la cosechan, pero además, con ríos, quebradas, arroyos, lagunas y otros cuerpos de agua cada día más contaminados y poco protegidos, con un sistema de páramos y bosques de niebla al borde de la desaparición, así como selvas en alto riesgo, con muchos de estos territorios expuestos a la explotación minera a gran escala y con una política económica que favorece a los más ricos, la que posibilita que la problemática del hambre se mantenga en el país.

Esta es parte de la realidad que obstruye y dificulta la aprobación y puesta en marcha de políticas públicas contra el hambre, donde la recuperación de la quinua y su extensión como sembrado y grano de especial protección (valorando y recuperando todo su significado cultural y de entretrejo social) más allá de los territorios y poblaciones que la han adoptado como grano sustancial para su alimentación diaria y para la conservación de sus prácticas culturales.

Sin política agraria y sin recursos

Una de las obligaciones estatales respecto al Derecho a la Alimentación es la de garantizar que los productores de alimentos tengan acceso suficiente a los recursos necesarios para su actividad económica. Entre estos se destacan la

tierra, el trabajo, el agua, los recursos genéticos, la asistencia técnica, la capacitación, financiación, salud, vías de comunicación, etc.

En el caso de la concentración de los ingresos económicos, Colombia presenta una gran eniquidad que se evidencia en el segundo mayor índice Gini de la región, el cual es de 0,58. Esto se traduce en que el 20% de la población más rica concentre el 62,7% del ingreso, mientras que el 20% más pobre apenas reúne el 2.5% total del mismo. Obviamente esta injusta distribución del ingreso nacional determina que gran parte de la su población no tenga posibilidades de acceder a los bienes y servicios suficientes para llevar una vida en condiciones de dignidad.

Respecto a la concentración de la tierra, el Índice Gini es de 0,85, lo que convierte a Colombia en uno de los países más inequitativos del mundo. La gravedad de la situación es tal, que apenas el 0,06% de los propietarios son dueños del 53,5% del área predial rural. Esta problemática incide negativamente en las posibilidades productivas de la pequeña economía rural, el acceso a bienes productivos como la tierra, la tenencia de los títulos de propiedad, y su capacidad de resistir a la rapacidad expropiadora de los grandes terratenientes, las empresas transnacionales y la delincuencia



organizada. Todo, con graves consecuencias para la preservación de la soberanía alimentaria del país.

Las líneas crediticias orientadas al sector rural están priorizadas a aquellos sectores vinculados con la apuesta agroexportadora. Así las cosas, los pequeños productores de alimentos tienen muy pocas posibilidades de acceder a dichos beneficios y, cuando lo hacen, lo logran a costa de poner en riesgo el escaso patrimonio que poseen. El acceso, uso y pertenencia de los recursos y conocimientos, esto no es visto por el Estado como un derecho inalienable del país y/o las comunidades a quienes pertenecen, sino que por el contrario se aborda desde una perspectiva extractiva con eventuales réditos económicos. En esa perspectiva, los recursos naturales del país, entre ellos los genéticos, son sujetos a un rápido proceso de usurpación, mercantilización, tráfico, y desprotección por parte del Estado.

El Estado colombiano ha sido renuente a adoptar fuertes medidas para el control al uso, siembra, venta y comercialización de productos transgénicos y, por el contrario, ha facilitado, a través de sus actos de ley, la penetración de las empresas transnacionales del sector y el uso de semillas o productos de ese tipo. La población tradicional y directamente responsable de la producción interna de alimentos se enfrenta a muchas dificultades relacionadas con los cada vez mayores obstáculos interpuestos para acceder y controlar autónomamente los recursos necesarios para que su actividad productiva. Actividad que se relaciona directamente con la disponibilidad alimentaria del país.

Nutrición

La realidad nutricional de la población colombiana es realmente lamentable. El último estudio nacional y regional, mostró que al menos el 41% de sus hogares se encuentra en inseguridad alimentaria*. Esta cifra es aún mayor en las zonas rurales donde se reporta un 58,3% de sus hogares. Las condiciones de las mujeres y los niños y niñas tampoco son las mejo-

res: el 45% de las mujeres en edad gestacional, y el 33% de los menores de cinco años, son anémicos.

Esta realidad propicia que cada año en nuestro país mueran por desnutrición cinco mil niños, según lo confirmó en el 2009 Paul Martin, director de la Unicef en Colombia, quien indicó que de cada cien mil infantes en el país 257 son víctimas fatales de esta problemática social.

La situación de hambre y desnutrición es peor en las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, para los desplazados, el 51,9% de cuyos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria, registrándose cifras mayores si los desplazados son de origen indígena (67,4%). La situación descrita incide no solamente en la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de las personas afectadas, sino que también se expresa en una preocupante mortalidad. En ese sentido, estudios recientes afirman que las muertes causadas en Colombia a causa directa o indirecta del hambre oscilan entre 15 mil y 40 mil personas al año.

A nivel latinoamericano, Colombia presentó un incremento de 2,3% en el número de hambrientos durante el periodo 1996-2005, contrariando las tendencias de la región en donde el hambre se redujo en un 12,5%. Cabe resaltar que a pesar de estas evidencias, el Estado colombiano se niega a admitir que se encuentra en una crisis alimentaria y, por supuesto, adoptar las medidas estructurales y de política pública que lleven a la garantía plena del Derecho Alimentario de los millones de personas afectadas.

El Estado colombiano carece de metas, indicadores y sistemas de vigilancia fiables y específicos, respecto al seguimiento que le debe dar al nivel de realización del DA. La ausencia de política pública coherente con este derecho, la carencia de aquellos tipos de referentes son apenas otro de los síntomas de la falta de compromiso del Estado para con el derecho que tienen todos y todas los colombianos a no sufrir hambre. 🐾



La huella geográfica

Espacio vital y control territorial para la acumulación

Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz¹

La huella ecológica o ¿cuánta tierra necesita el hombre?

La huella ecológica es un indicador ambiental que indaga específicamente por la sostenibilidad territorial a distintas escalas. Este propone medir el impacto de una comunidad humana sobre su entorno, para ello transforma todos los consumos de una población en unidades de superficie de tierras. El indicador entonces equivale a la cuantía en tierra o superficies y volúmenes de agua requeridos para producir los recursos que en un periodo de tiempo consume la población de un municipio, una ciudad, un país o el planeta. Los cálculos más recientes estiman que la huella global excede la capacidad del planeta y que en menos tres décadas, se necesitaría dos planetas más para acceder a recursos que hagan posible el consumo promedio mundial².

El consumo mundial y la población se han concentrado en los grandes centros urbanos, también los servicios y la producción de desechos. Buena parte de la población de nuestros países está concentrada en espacios urbanos. Pasamos entonces nuestras vidas en las ciudades y consumimos productos que vienen de los espacios rurales nacionales, o productos importados desde otras naciones, a través de circuitos comerciales de corta y larga



distancia. El continuo abasto de distintos bienes y productos para las ciudades, nos ha llevado a configurar una percepción urbana predominante de la naturaleza, “meramente como una colección de atracciones o lugares de recreación, más que la verdadera fuente de nuestra existencia y bienestar”³. Este hecho urbano olvida entonces que las necesidades básicas para la vida como el agua, los alimentos y buena parte de la fuerza de trabajo, no se producen, ni reproducen, ni provienen de las ciudades.

¹ Geógrafo, Topógrafo, Máster en Economía Social. Docente Investigador de la U. Externado de Colombia. C.e: flaviobladimir@gmail.com

² Ewing, B. y Reed, Galli, Kitzes, Wackernagel. 2010. Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, Oakland: Global Footprint Network. “La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y mar biológicamente productivos que un individuo, una región, toda la humanidad, o determinada actividad humana requiere para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera, y compara esta medida con cuánta área de tierra y mar está disponible”. “Hoy la humanidad utiliza el equivalente de 1,4 planetas cada año. Esto significa que ahora le tarda a la tierra un año y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un año”. Ver en <http://www.footprintnetwork.org>.

³ Wackernagel, Mathis y Reeves, William. 2000. Nuestra huella ecológica, reduciendo el impacto humano sobre la tierra, Buenos Aires, p. 24.



Las ciudades dependen de los bienes naturales y de los habitantes que se encuentra en los espacios regionales y nacionales asociados a los procesos de desarrollo urbano.

Las ciudades dependen de los bienes naturales y de los habitantes que se encuentra en los espacios regionales y nacionales asociados a los procesos de desarrollo urbano. Estas problemáticas urbanas regionales y rurales que se despliegan desde lo local a lo global y viceversa, cuentan entonces con un indicador, “la huella ecológica”. Su estimación es reveladora y permite plantear las problemáticas ambientales y urbano rurales a partir de una cuantía abstracta de tierras articulada al modo de vida y nivel de consumo de una población.

El conjunto de indicadores asociados a huella ecológica, entre ellos la biocapacidad y déficit ecológico fueron propuestos por Mathis Wackernagel y William Rees, ellos han elaborado un trabajo que marcó el debate internacional sobre la sostenibilidad, al medir la huella ecológica de la humanidad con principal atención en los países industrializados. Esto les permitió demostrar que la población del planeta requerirá más de cinco planetas si todos nos proponemos y lográramos consumir como un canadiense promedio de finales del siglo XX. Además esta estimación permitió plantear que aproximadamente existen 1.3 hectáreas eco-productivas por habitante en el planeta. Estas estimaciones permitieron argumentar que un número reducido de la población mundial consume entre cuatro y diez has., constituyendo un grupo de personas con altos consumos, que en mayor proporción viven en países del norte. Las sucesivas estimaciones durante la última década, han permitido evidenciar una inequitativa distribución de los bienes ambientales y una restricción de acceso a poblaciones para lograr acceder a la justa proporción de bienes que le corresponden en este planeta⁴.

Este indicador ha recibido distintas críticas. Unas caen en discutir si esta pretensión de medida es óptima o deficiente⁵. Ya hay consenso en que esta aproximación es imprecisa⁶. La principal crítica plantea que este enfoque ve a las poblaciones humanas consumiendo más de lo posible, con resultados funestos a futuro. Nos recuerda a Malthus, quien situó su atención en la producción de comida, argumentando que esta siempre estaría por debajo de las necesidades humanas siendo un limitante del crecimiento de la población⁷. Algunos críticos de los planteamientos de la huella ecológica argumentan que los ambientalistas reiteran este racionamiento malthusiano con otros bienes ambientales, como el petróleo y la tierra cultivable. Esto para construir escenarios catastróficos y negar la posibilidad de un cambio tecnológico, como el de la “revolución verde” que permitió multiplicar nuestra producción agrícola incrementando el suelo cultivado en sólo un 2% desde 1950. Un proceso en el que comiendo cada vez más hemos reducido nuestra huella ecológica alimentaria; “la tecnología lo ha hecho posible”⁸.

A partir de estos planteamientos la responsabilidad ambiental de los estados y de las corporaciones es transferida al desarrollo tecnológico y a la innovación, desconociendo las contradicciones propias del sistema económico global. Esta crítica, realizada al indicador huella ecológica por no considerar el cambio tecnológico es adecuada, pero es también pertinente tener en cuenta los efectos negativos de la “revolución verde”. En los países latinoamericanos son evidentes: deforestación por cambios de uso de la tierra, erosión de los suelos por cambio de cobertura vegetal, desertificación, contaminación de

⁴ Bernardo Reyes Ortiz en presentación de: Wackernagel y Rees, Ibid.

⁵ Carballo, Penela y Villasante. La huella ecológica de una economía cerrada: consideraciones teóricas sobre el ajuste de comercio en el marco de análisis de la huella. 2007. Departamento de Economía Aplicada Universidad de Santiago de Compostela.

⁶ Sin embargo, el indicador ha venido profundizando su precisión al utilizar en todos los países para comparaciones entre países la hectárea global (hag) es una unidad de medida empleada para cuantificar la biocapacidad del planeta. Una hag es la media de la bioproductividad de todas las hectáreas consideradas “productivas” en la Tierra. Es una unidad cada vez más empleada en geografía, ciencias ambientales, sociología, así como para el cálculo de la huella ecológica. Con la globalización, cada vez más recursos consumidos son producidos a escala global (y no local), por lo que permite calcular los recursos empleados para la producción de los bienes. Ewing B., A. Reed, A. Galli, J. Kitzes, and M. Wackernagel. 2010. Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, 2010 Edition. Oakland: Global Footprint Network.

⁷ Malthus, Thomas Robert. 1846. Ensayo sobre el principio de la población. Madrid, págs. 2-4.

⁸ Rodríguez, Daniel. Malthus y la huella ecológica. <http://www.juandemariana.org/comentario/1172/malthus/huella/ecologica/>



fuentes de agua, enfermedades pulmonares y esterilidad en las comunidades por uso intensivo de agroquímicos y dependencia por vinculación de la agricultura campesina a las corporaciones productoras de insumos para la agricultura. Esto solo para mencionar algunos de los impactos y su profundización contemporánea bajo la expansión de los agronegocios en estos países. Estas huellas hacen parte de un largo proceso histórico vinculado con un intercambio ecológico desigual y una geopolítica internacional, que permite la articulación, uso de recursos y apropiación de espacios, por medio de corporaciones de origen europeo y norteamericano⁹. Esta articulación de territorios y población, junto a la extracción de recursos permite la sostenibilidad económica y ambiental de las sociedades europeas y norteamericanas¹⁰. Este es un proceso histórico que debe tenerse en cuenta para realizar un análisis geopolítico del indicador huella ecológica y proponer así un análisis de la huella geográfica.

La huella geográfica del despojo

En el análisis geopolítico de la huella geográfica es preciso ubicar los territorios e identificar los mecanismos de control territorial como ejercicio del poder sobre un espacio¹¹ que permiten la dominación-

explotación, para garantizar el “espacio vital”¹² de una población. Se trata entonces de concretar esta superficie en tierra, articulada a la población de una región, ciudad o país, mediante el control territorial de otros espacios y comunidades que posibilitan el acceso constante a los bienes requeridos por una población. Para avanzar sobre estos puntos en este artículo se plantean algunas ideas iniciales para dar forma a una propuesta que busca reconocer a distintas escalas, las relaciones y condiciones políticas geográficas y territoriales que permiten el abastecimiento constante de bienes para un país, ciudad o población. De esta manera nos iremos aproximando a lo que denominaré “huella geográfica”¹³ o geograficidad de los procesos sociales urbanos y rurales, para emprender este camino es pertinente introducir las nociones de metabolismo sociales, brecha metabólica urbano-rural y acumulación primitiva.

Uno de los grandes aportes de las estimaciones, análisis y críticas al indicador huella ecológica, es haber promovido los debates sobre la sostenibilidad ambiental del desarrollo económico. Estos debates llevaron a retomaron las aproximaciones realizadas sobre el metabolismo o circuito socio-natural de la vida humana como lo denomina Hinkelammert¹⁴. Este concep-

⁹ Nahuel, Carlos y Granato, Leonardo. 2005. La deuda ecológica con los países del sur. Revista Ecología Políticas No 29, pp. 75-85.

¹⁰ Llamabi Luis. 1995. Restructuraciones mundiales de la agricultura y la alimentación, el papel de las transnacionales y los grandes estados, en Agroalimentaria No. 1.

¹¹ “Desde nuestra perspectiva, la territorialidad tiene un valor totalmente particular, ya que refleja la multidimensionalidad de la vivencia territorial por parte de los miembros de una colectividad y por las sociedades en general. Los hombres “viven” al mismo tiempo el proceso territorial y el producto territorial, mediante un sistema de relaciones existenciales y/o productivas. Ambas son relaciones de poder, en el sentido de que hay interacción entre los actores que buscan modificar las relaciones con la naturaleza y las relaciones sociales. Los actores, sin quererlo ni saberlo, se auto-modifican también. El poder es inevitable y no es inocente, ya que no es posible mantener impunemente cualquier relación sin estar marcado por él.” Raffestin, Claude. 2011. Por una geografía del poder, El colegio de Michoacan. P. 112.

¹² Este último un concepto planteado por Ratzel en el siglo XIX en el contexto de la consolidación de los estados nación. La cuestión del dominio del espacio adquiere una posición central, y dos conceptos formulados por Ratzel son fundamentales para dar cuenta de ella: uno es el concepto de territorio, entendido como la porción de superficie terrestre apropiada por un grupo humano; y el otro es el concepto de espacio vital, que expresa la necesidad de territorio de una determinada sociedad, variable según sean su bagaje tecnológico, sus efectivos demográficos o los recursos naturales disponibles. Así, toda sociedad necesita de un territorio en tanto espacio vital, y su defensa pasa a ser un imperativo de la historia. La historia es vista entonces como una **lucha por el espacio**, en la que los más fuertes serán los vencedores. Moraes, Antonio Carlos Robert. 1990. En Ratzel, A antropogeografía de Ratzel: Indicaciones, pp. 23-24.

¹³ El análisis de la “huella geográfica” refiere a indagar por el ámbito espacial del metabolismo socio-natural y las relaciones de poder que configuran el control territorial. Indaga entonces por el control y apropiación territorial a escala local, regional y global que posibilitan la sostenibilidad de la vida de personas, unidades domésticas y comunidades urbanas y rurales. Indaga el rastro y las marcas en la tierra de los flujos urbano-rurales de trabajo mercancías y capital, vinculados a los mercados regionales, nacionales y globales.

¹⁴ Hinkelammert, Franz J. 2009. Economía, Sociedad y Vida humana, preludio a una segunda crítica de la economía política. Altamira Buenos Aires, pp. 48-50.



to de “metabolismo social” fue planteado por Marx para dar cuenta de cómo las sociedades afectan y son afectadas por las dinámicas de la naturaleza¹⁵. La sociedad y sus distintas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, no se tejen y desarrollan en una suerte de vacío geográficos, éstas producen y reproducen sus condiciones de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza, configurando paisajes y espacios geográficos urbano-rurales y regionales. Este metabolismo está configurado por un conjunto de procesos desplegados tanto a escala local, nacional y global, mediante los cuales se apropia, concentra, transforma, consume y deshecha materiales procedentes del mundo natural, una primera naturaleza o naturaleza externa al ser humano.

Ligada a esta concepción del metabolismo social-natural de Marx, tanto John B Foster¹⁶ como Jason W. Moore¹⁷ propone la noción de brecha metabólica para

un tema central para el capitalismo¹⁸. A pesar de resolver el agotamiento de los suelos con fertilizantes se hace permanente una ruptura material y energética en el ciclo de los nutrientes, ya que los residuos generados en el procesamiento de materias primas agrícolas, en vez de retornar al suelo como nutrientes, son desperdiciados en los basureros y en las alcantarillas de las grandes ciudades. Este proceso extractivo, provoca una pérdida de fertilidad y sostenibilidad en capacidad de reproducción de los suelos. Una brecha metabólica que es compensada y rentabilizada a partir de fertilizantes químicos, que son comprados por agricultores a corporaciones en el comercio internacional, lo que hace dependiente a la agricultura de la industria de insumos y fertilizantes.

Para Jason W Moore la diferenciación entre sistemas naturales y sociales es teóricamente arbitraria y empíricamente artificial. Los metabolismos son relaciones entre la naturaleza externa y humana. La brecha metabólica es constitutiva de la acumulación incesante de capital y por ello esta se estableció con el surgimiento del capitalismo en el siglo XVI, entre los grandes movimientos de la acumulación primitiva constituidos por el colonialismo y la globalización de las relaciones campo-ciudad. Proceso que constituyo la dialéctica campo-ciudad como una manifestación geográfica particular de la brecha metabólica¹⁹. Una brecha campo-ciudad constituida entre el ritmo de la reproducción de la naturaleza, sustancias orgánicas y animales sometidos a ciclos orgánicos y los ritmos de las máquinas en la producción industrial. Este desacople entre ritmos de producción-reproducción a partir de los ciclos naturales y de la producción industrial constituye una brecha a nivel espacial/



bir las relaciones naturaleza-sociedad a través del trabajo en el capitalismo y como constitutiva del imperativo de acumulación. Foster ve la brecha metabólica como consecuencia del desarrollo capitalista, su planteamiento parte del análisis de la segunda revolución agrícola en Inglaterra entre 1830 y 1880 caracterizada entre otras cosas por el desarrollo de una industria de fertilizantes, que respondió al agotamiento de la fertilidad de la tierra, convirtiendo a la química de los suelos en

¹⁵ Marx, Karl. 1993. Manuscritos: economía y filosofía, Altaya, Barcelona, pp. 114-1115.

¹⁶ Foster, John Bellamy. 2010. A Ecologia de Materialismo e natureza, Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, pp. 218-224.

¹⁷ Jason W. Moore. Transcending the Metabolic Rift: A Theory of Crises in the Capitalist World-Ecology, *The Journal of Peasant Studies* 38(1), 2011, pp. 1-46. Ver tambien: Jason W More, Nature and the Transition from Feudalism to Capitalism. *Review: A Journal of the Fernand Braudel Center* 26(2), 2003. 97-172.

¹⁸ John Bellamy Foster, A Ecologia de Materialismo e natureza, Civilizacao Brasileira, Rio de Janeiro, 2010, pp. 209-212.

¹⁹ Moore, Jason W. 'Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist world ecology', *Journal of Peasant Studies*, 38: 2011, pp. 1-46.



material (urbano-rural) como a un nivel social más amplio, que repercute en el metabolismo socio-natural. Si bien estos planteamientos y categorías responden a unos procesos europeos del siglo XIX, son pertinentes para hacer una lectura contemporánea de las brechas socio-naturales derivadas de globalización y del neocolonialismo que viene reconfiguración la geográfica colombiana.

A las reconfiguraciones espacial del país le acompaña la profundización de una brecha metabólica cuya dimensión constitutiva es una ruptura social. Esta última generada por un nuevo ciclo de acumulación primitiva, cuyas características planteadas por John Foster y Jason Moore siguiendo a Marx, corresponden a la argamasa: socio-natural de tres procesos para a Gran Bretaña de finales del siglo XIX y principios del XX, *i*) proceso de expropiación de tierras, *ii*) proceso de migración de la población desde el campo *iii*) concentración de la riqueza²⁰. Estos procesos guardando cautela por la distancia histórica, geográfica y política, cuentan con similitudes con la historia colombiana de las últimas décadas y mantiene lógicas que han caracterizado a la consolidación, expansión y profundizaciones de capitalismo internacional.

En el primer punto encontramos un gran proceso de expropiación de tierras con la pérdida del control directo por parte de los campesinos sobre los medios materiales de producción, al estilo de la contra reforma agraria que ha vivido el país ejercida en buena parte por el paramilitarismo²¹. El segundo punto se refiere a

un gran proceso de migración de la población del campo a la ciudad, como el ejercido mediante el desplazamiento forzado que caracteriza a Colombia²². El tercero, hace alusión a una enorme concentración de la riqueza a partir de la concentración de las tierras en pocas manos que transfieren sus rentas a los centros urbanos e industriales, con semejanza al proceso de acaparamiento de tierras que se ha desbocado en Colombia, esto tanto para los agronegocios como para la expectativa minera²³.

Esta semejanza en procesos históricos y geográficos tan distantes nos permite plantear que el capitalismo cuenta con una lógica persistente. “De modo que, violencia y despojo son los pilares fundacionales del andamiaje capitalista pero, de ninguna manera, pueden reducirse a un conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente en la amplia geografía histórica de la acumulación, de capital hasta nuestros días”²⁴. Es precisamente esta lógica reiterada en muchos lugares y legalizada hoy por los estados, a la que Harvey denomina despojo para la acumulación y consiste en el uso de métodos de la acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos, espacios, territorios y recursos que hasta entonces no hacían parte del mercado. La diferencia de estas dos categorías radica en que acumulación originaria supuso la implantación de un nuevo sistema, al desplazar al feudalismo, mientras que la acumulación por desposesión tiene por objetivo mantener el sistema actual, transfiriendo a regiones y

²⁰ Moore, Jason W. 2011. Transcending the Metabolic Rift: A Theory of Crises in the Capitalist World-Ecology, *The Journal of Peasant Studies* 38(1), pp. 1-46.

²¹ *El Espectador*. 2009. Editorial. 16 Mar.

²² “Colombia se caracteriza por la violencia y los conflictos rurales causantes del éxodo forzado de más de 5,1 millones de personas y entre 6,6 y 8 millones de has abandonadas o despojadas, fenómeno que agudizó el histórico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes, narcotraficantes, paramilitares y grandes empresarios. Precisamente, en el periodo 2002-2009 se incrementó la concentración de la tierra al amparo de políticas gubernamentales que estimulan la inversión privada en la explotación de recursos.” En Salinas Abdala, Yamile. 2011. *Dinámicas en el mercado de la tierra en Colombia*, Marzo.

²³ “La histórica concentración de la tierra se agudizó entre los años 2000-2009 el Gini nacional pasó de 0.86 a 0.88, particularmente a partir de 2005 en el 56,5% de los municipios del país.” *Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia - 2000-2009*, Convenios IGAC - CEDE - Catastro de Antioquia. Ver también: Salinas, Yamile. FAO, 2012. *Dinámica del mercado de tierras en América Latina, Concentración y Extranjerización, El caso Colombiano*, 179-206.

²⁴ Composto, Claudia. 2012. *Acumulación por despojo y neoextractivismo en América Latina. Una reflexión crítica acerca del estado y los movimientos socio-ambientales en el nuevo siglo*, *Astrolabio, Nueva época* número 8, p. 325.



sectores empobrecidos la crisis de sobreacumulación del capital²⁵.

La historia y reconfiguración geográfica reciente de Colombia permiten entonces plantear que se encuentra en desarrollo un proceso de despojo para acumulación²⁶ que cuenta con repercusiones sociales y ambientales aún por evaluar. Con seguridad ha incrementado la brecha metabólica, reconfigurando las relaciones urbano rurales y la incorporación de las distintas regiones del país al mercado mundial. Esto ha permitido por una parte la solución de crisis de acumulación a empresas y capitales extranjeros, que al buscar un lugar donde fijar y ampliar sus inversiones, extienden sus huellas geográficas internacionales sobre el territorio nacional. Estas empresas se han localizado en distintas regiones del país cuyos excedentes fluyen directamente a centros urbanos nacionales y extranjeros, definiendo los flujos ecológicos y financieros que profundizan las desigualdades regionales, a partir de un modelo de desarrollo extractivista corporativo. En este proceso, las “huellas geográficas corporativas”²⁷ nacionales e internacionales se incrementan en el país y se hace evidente con la concentración de tierras bajo expectativas financieras de inversiones futuras. Se promueve una reconversión productiva en el país, donde sectores productivos como palma para agrodiesel, caña para etanol, cultivos forestales, promovidos por grandes

empresas, aparecen como prioritarios para el estado. Mientras la producción de alimentos de medianos y pequeños campesinos es relegada, lo que constituye la imposibilidad de construir la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Esta reconversión productiva se hace evidente con las masivas importaciones de alimentos, como es el caso de la papa, detonante del reciente paro papero²⁸. También se evidencia con la pretendida expansión del sector minero, cuando el 59% del territorio continental del país está solicitado en concesión para títulos mineros y cuando se otorgaron el 5.13% de la superficie del país en concesión, mediante títulos durante el periodo 2000-2010. De estas hectáreas tituladas el 23.3% constituyen huella geográfica corporativa de empresas mineras de gran escala²⁹. Frente a este proceso de expansión corporativa y sus implicaciones socioeconómicas, se hace necesario evaluar, caracterizar y comprender los procesos de control territorial ejercidos para el despojo por acumulación e indagar por las repercusiones de este proceso en metabolismo social-natural del país y en la ampliación de la brecha metabólica urbano-rural. Es pertinente avanzar en el análisis de la huella geográfica, como propuesta teórico-metodológica y horizonte complementario de las aproximaciones y estimación del indicador de sostenibilidad territorial huella ecológica.

²⁵ “La acumulación de capital siempre ha sido un asunto profundamente geográfico. Sin las posibilidades inherentes a la expansión geográfica, a la reorganización espacial y al desarrollo geográfico desigual, hace mucho tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar como sistema económico y político. Este recurso permanente a ‘una solución espacial’ para las contradicciones internas del capitalismo (más notablemente registradas como sobre acumulación de capital dentro de una are geográfica determinada) junto con la inserción desigual de diferentes territorios y formaciones sociales en el mercado mundial capitalista, han creado una geografía histórica mundial de acumulación de capital cuyo carácter debe entenderse bien” Harvey, David. 2007. *Espacios del Capital, Hacia Una geografía Crítica*, Ediciones Akal, Barcelona, p. 391.

²⁶ Betancur, María Soledad. 2012. *Observatorio de derechos Humanos No 16, Locomotora Minera Concentración y despojo*, Instituto Popular de Capacitación (IPC). Medellín.

²⁷ Por huella geográfica corporativa se entienden, la superficie en hectáreas que las corporaciones nacionales y extranjeras vienen concentrando para llevar a cabo sus inversiones cuyos excedentes son concentrados directamente en centros urbanos nacionales y extranjeros.

²⁸ Alberto Caro, miembro de la Junta Directiva de Fedepapa, denunció que el gobierno dio licencia sanitaria para importar 74 mil toneladas en el presente año, procedentes de Egipto, Chile, Bélgica, Canadá, Holanda, Ecuador y Perú. Estas importaciones siguen el mismo proceso que terminó quebrando la producción nacional de trigo, maíz, sorgo, afectada por la actual importación de siete millones de toneladas de alimentos, que le cuestan al país más de dos mil millones de dólares por año. En el caso papero se amenaza la producción anual de dos millones 600 mil toneladas en 170 mil has, que atienden el consumo nacional.

²⁹ Betancur, María Soledad. 2012. *Locomotora Minera Concentración y Despojo*. Observatorio de Derechos Humanos No 16. Instituto Popular de Capacitación (IPC) Medellín.

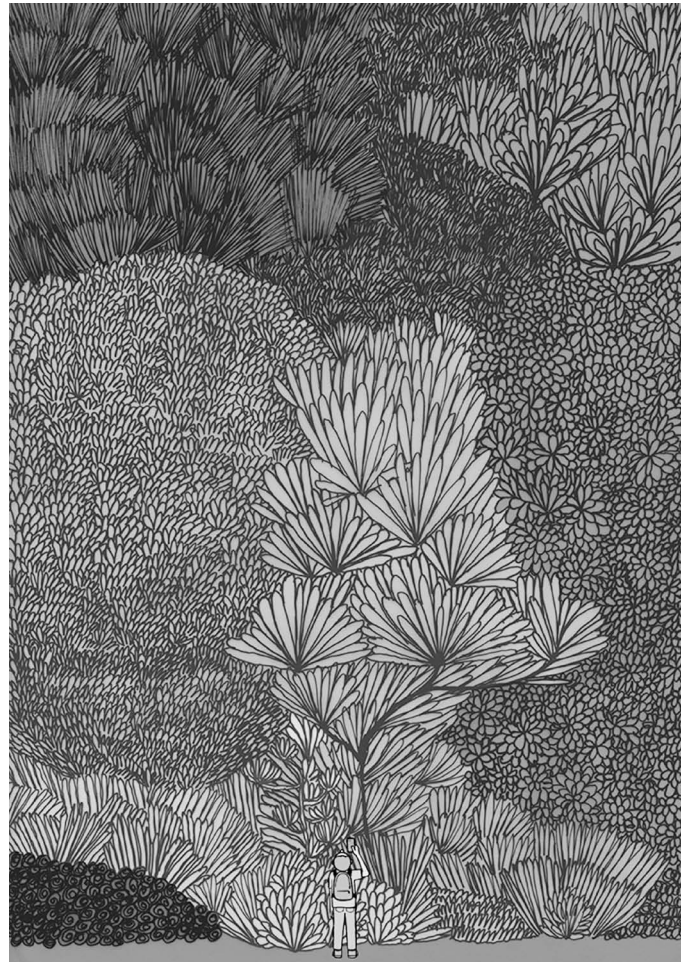


La huella geográfica global se despliega en los espacios nacionales

Las huellas geográficas de los países denominados “desarrollados” se despliegan en los espacios nacionales de los denominados países “en desarrollo”. Para indagar por este proceso se propone tener en cuenta los siguientes aspectos. Un primer aspecto a tener en cuenta es la relación entre el tipo de sociedad o modo de vida y la ruptura del metabolismo socio-ambiental, para no limitarse a una visión ecologista simple. Aun en la hegemonía global del capitalismo todas las sociedades no tienen la misma responsabilidad, por ejemplo, para el 2004 un habitante promedio de los Estados Unidos emitía veinte toneladas de CO₂ a la atmósfera, un europeo en promedio diez, un chino en promedio 4.2, un indio 1.2. Tampoco las clases sociales tienen igual responsabilidad el 1% de los ciudadanos de los Estados Unidos consumen más de cien toneladas de CO₂³⁰. Por ello para aproximarnos a los dominios y escalas geográficas de la brecha metabólica y sus efectos, es pertinente preguntarnos, ¿Quiénes producen los bienes que se consumen y quién los consume?, también ¿dónde están los recursos y territorios que garantizan el abastecimiento de las poblaciones y en qué relaciones se producen?

Los datos de las huellas ecológicas promedio por personas muestran que los países “centrales” con mayor crecimiento económico tienen un requerimiento de mayor espacio vital, asociado a sus modos de vida, esto comparado con los países periféricos. Esto se hace evidente con las estimaciones para la última década de huella ecológica, en las naciones europeas una persona promedio requiere 4.7 hectáreas, en norteamericana se requieren 7.9 por habitante, estas huellas son de mayor extensión a las de África de 1.4 y América Latina de 1.7 por habitante³¹. La estimaciones de huellas ecológicas, ha

permitido establecer que a mayor crecimiento económico, mayor consumo y mayor espacio vital con su correspondiente huella geográfica, requerida por los habitantes de los países denominados “desarrollados”.



Las ciudades europeas en los siglos XVI y XVII dependían metabólicamente del campo circundante. Los centros urbanos fueron inicialmente birregionalmente definidos, contando con ligeras huellas geográficas acotadas a la ciudad región. Estos países han contado históricamente con mayor consumo, producción de residuos y un acelerado deterioro de sus suelos.

³⁰ Houtart, Francois. 2013. El bien común de la humanidad: Un paradigma pos-capitalista frente a la ruptura del equilibrio del metabolismo, entre la naturaleza y el género humano. Tercera conferencia para el equilibrio del Mundo La Habana, Cuba. 28 de Enero de 2013.

³¹ Footprintnetwork. 2010. Results from National Footprint Accounts. www.footprintnetwork.org



La eliminación de la huella geográfica, no es viable, implica la supresión de la sociedad.

Esto último han incidido en que el abastecimiento de materias primas para sus economías, como de bienes básicos para la población se concentra en las ciudades del centro, se realice en buena parte desde países de la periferia, incrementando así el uso de combustibles fósiles. La articulación global de circuitos económicos y ecológicos de abastecimiento de las ciudades ha incrementado la brecha metabólica de los países y ciudades.

Un segundo aspecto a considerar en el análisis a nivel global, se refiere a los casos de algunos países considerando sus niveles de consumo y toda la población lleguen a tener requerimientos que excedan las capacidades productivas de su territorio nacional. Esto implica relaciones de dependencia con otros territorios para el abastecimiento de sus necesidades básicas y suntuosas generando relaciones de dependencia con otros países que disponen de tierras, recursos y suelos productivos. Esta relación de dependencia puede ser transformada históricamente a través de procesos coloniales, militares y comerciales que subordinan económicamente a los países que cuentan con los recursos requeridos, a partir de poder político, militar y económico. De esta manera el espacio vital de una nación y relativamente su huella geográfica es ampliada a partir de procesos de colonización y de acuerdos comerciales que brindan las condiciones para procesos del denominado neo-extractivismo.

Un tercer aspecto de la huella geográfica a escala internacional para el análisis, es identificar el impacto y cuantía de esta huella corporativa internacional en los espacios nacionales, teniendo en cuenta el origen de las inversiones y el destino de los excedentes que son generados por las corporaciones. En este caso es clave evaluar la cuantía de tierras concentrada en Colombia por empresas internacionales y el destino tanto de sus excedentes como de los productos generados por las distintas actividades productivas y extrac-

tivas que realizan. Por ejemplo la empresa *Poligrow* de capitales italianos y españoles ha sembrado más de 2.000 hectáreas con destino a la producción de aceite, o la empresa *Ethanol Consortium Boar* con inversiones de origen de Brasil, Suecia y Estados Unidos se encuentre vinculada a la siembra de 45 mil has de caña en Bolívar, Córdoba y Sucre; asimismo empresas y consorcios con capitales de origen nacional amplían las superficies de tierra vinculadas al mercado mundial, estas constituyen ejemplos de la huella geográfica corporativa internacional y nacionales en nuestro país³².

La huella geográfica nacional en espacios internacionales

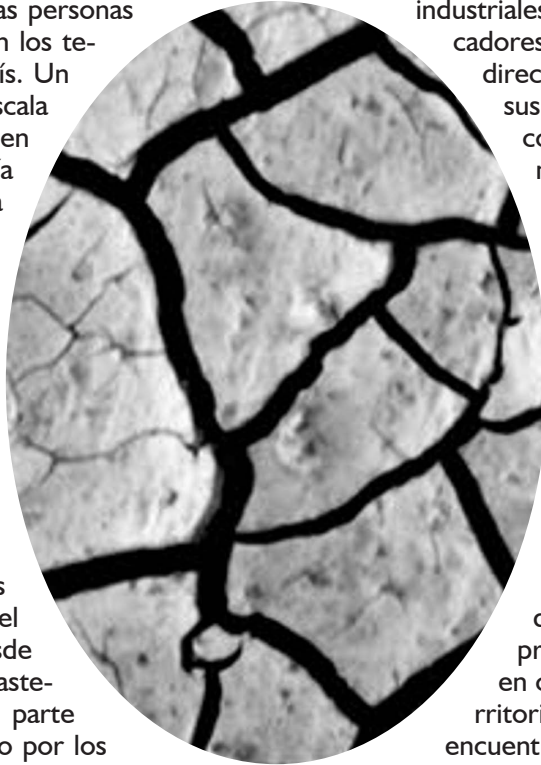
En cuanto a la escala nacional, en primera instancia debe reconocerse que siempre hay huella geográfica, generada por las actividades que desarrollan las distintas comunidades que integran una sociedad. Los planteamientos que pretenden reducir la huella geográfica nacional, encierran una discusión geopolítica sobre la gestión de la sostenibilidad ambiental en situación de dependencia económica discusión estrechamente vinculada con la transformación del modelo de desarrollo y su imperativo de crecimiento económico. La eliminación de la huella geográfica, no es viable, implica la supresión de la sociedad, el camino es transformarla, gestionarla política y tecnológicamente, para ello es central reconocerla y destacar la importancia que para la vida nacional, tienen los recursos y las poblaciones asociados a los territorios donde se sitúa la huella geográfica, de las distintas poblaciones de un país.

Un segundo aspecto en el análisis de escala nacional es el de la huella geográfica que la población de un país tiene sobre su propio conjunto de territorios, un análisis que indaga entonces por la población, superficies y recursos que están vinculados directamente al sostenimiento de una población. Es el caso de las aguas destinadas

³² Salinas, Yamile. 2011. El reto de la restitución frente al modelo de desarrollo rural y a concentración de la tierra. En revista Semillas, Junio/, pp. 24-30.



al consumo humano y el control territorial de cuencas priorizadas para el abastecimiento de agua potable de las ciudades en detrimento del uso agrícola del agua por parte de los campesinos. A partir del reconocimiento de esta argamasa socio-natural, es importante pensar en el manejo de las condiciones ambientales del país, subordinado su aprovechamiento a la vida de todas las personas que vivimos de y en los territorios de este país. Un tercer aspecto a escala nacional a tener en cuenta, es la cuantía de huella geográfica nacional localizada en espacios internacionales, esto refiere a los espacios vinculados mediante la importación para el consumo nacional, un ejemplo de estos son los productores y las superficies arroceras sobre la cuenca del río Guayas que desde el Ecuador son abastecedoras de buena parte del arroz consumido por los colombianos.



La huella geográfica regional y su articulación con lo local

En cuanto a la escala regional algunos aspectos a considerar de la huella geográfica nacional, refiere a las dinámicas urbano-rurales. Aquí es clave tener en cuenta el desarrollo desigual del país junto a los procesos de urbanización y sus vinculaciones regionales. El principal aspecto a tener en cuenta es la identificación del ámbito espacial definido por la vinculación urbano-rural, requerida para la configuración de

la vida urbana. Este análisis reconoce que los habitantes de una ciudad participan en un circuito o metabolismo socio-natural mucho más amplio, que el definido por el perímetro urbano de la ciudad. Este es un hecho urbano que implica actos de apropiación, transformación, transferencia y utilización de recursos en otros territorios, donde habitan trabajadores industriales, agricultores o pescadores, que se involucran directamente mediante sus jornadas de trabajo con las materias primas, fuentes de agua y suelos³³, recursos que son controlados indirectamente por circuitos comerciales que garantizan al abastecimiento urbano³⁴.

Se trata entonces de identificar los territorios que abastecen a las ciudades de distintos productos, teniendo en cuenta que en los territorios abastecedores se encuentran las condiciones de producción: tierra y espacio urbano regional como apelativos de la naturaleza externa y el trabajo como apelativo de las personas que la habitan y transforman produciendo los paisajes urbanos y rurales que constituyen a las regiones³⁵. Una de las formas de indagar la cuantía en tierra que las urbes articulan, es por medio de la estimación del indicador huella ecológica. La manera de recocer dónde se localizan, cómo están distribuidas, cómo fluyen los bienes y finanzas a escala regional, nacional y global, se realiza a través del análisis de la huella geográfica. Esta aproximación hace parte

³³ Commas, Dolors. 1998. *Antropología Económica*, Barcelona (España), Editorial Ariel.

³⁴ Rodríguez, Flavio Bladimir. 2005. *Nuestro Pan de Cada Día*, La huella ecológica alimentaria de Bogotá. En *Región Ciudad y áreas protegidas*, CEREC, 223-245.

³⁵ Polanyi, Karl. *La Gran Transformación*. Los orígenes políticos y Económicos de Nuestro Tiempo, Fondo de Cultura Económica México 1992, p. 182. "Tradicionalmente la tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo hace parte de la vida, la tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo articulado".



de la geopolítica interna de las ciudades y de las distintas regiones en los espacios nacionales, e incluye un análisis histórico y geográfico de los mecanismos de poder con los que se ejerce el control de un espacio, para garantizarle a una población urbana su “espacio vital”.

también se localizan en zonas externas a las ciudades. La producción de la ciudad incorpora consumos distribuidos en las zonas productoras de insumos, mientras que la producción urbana es redistribuida hacia espacios urbanos y rurales, nacionales o internacionales.



Las huellas geográficas locales de las ciudades en el campo se evidencian ya sea por las zonas dedicadas a la extracción de materiales para la construcción, canteras, minas y cárcavas generadas por la extracción de materiales para ladrillo. También por los procesos de reforestación y regulaciones forestales sobre las cuencas destinadas al abastecimiento urbano, junto a los lugares de explotación petrolera y plantas de refinamiento de los combustibles fósiles que garantizan la mayor parte de la movilidad urbana en la ciudad. A estos se agregan las zonas de cultivo y praderas dedicadas a la producción de alimentos consumidos en una ciudad, esto incluye tanto a los territorios del agronegocio como a los territorios de medianos y pequeños campesinos que producen para el sostenimiento de las ciudades.

La huella geográfica local: vida arraigo o acumulación ampliada

El análisis de huellas geográficas a escala local refiere entonces al anclaje espacial de los flujos materiales entre el campo y a ciudad. El primer aspecto a considerar en el análisis local son las vinculaciones entre las ciudades y los espacios rurales, éstos pueden ser regionales, nacionales o internacionales, que se encuentran vinculados a los centros urbanos mediante flujos que siempre aparecen en dos direcciones. Uno desde las zonas rurales, donde se extraen y producen bienes como el agua, la energía eléctrica, el petróleo y los alimentos, hacia los centros urbanos. Otro desde las ciudades donde predomina la transformación de materias primas en alimentos procesados, textiles y manufacturas, actividades que implica mayor consumo energético cuyas fuentes

Las huellas geográficas rurales son configuradas por las comunidades rurales del país y cuentan con distintas formas de apropiación territorial, esto incluye diversas concepciones sobre el uso y aprovechamiento de los bienes naturales y la tierra. Las distintas poblaciones rurales ya sean comunidades indígenas, comunidades negras o comunidades campesinas, vienen reivindicando la necesidad de sus territorios como posibilidad de mantener sus modos de vida y su arraigo territorial. La vinculación a la vida nacional de estas comunidades en Colombia se ha realizado bajo formas jurídicas para los territorios indígenas, territorios colectivos negros y zonas de reserva campesina, esta reivindicación y reconocimiento evidencia una noción de espacio vital para la paz, construido por las comunidades rurales colombianas en medio de la guerra y el despojo.

Pero los espacios y territorio de las comunidades rurales del país se encuentran




entretnejidos con los espacios agrarios, estos últimos constituidos por la territorialidad de los gremios y grandes agricultores, ganaderos y empresas agropecuarias, que reclaman mayores superficies, para la sostenibilidad de sus inversiones y lograr así la acumulación ampliada de sus capitales. Sus inversiones están asociadas mayoritariamente a las huellas corporativas internacionales, como son los casos de la palma africana, la caña de azúcar y la minería a gran escala. De esta manera las huellas geográficas rurales y agrarias constituyen un conjunto de relaciones complementarias y contradictorias que constituyen los conflictos territoriales de la geopolítica interna del país. Un conflicto constituido a partir de que todos los sectores sociales y económicos del país reclaman y disputan un espacio considerado por ellos mismos como socialmente necesario, un espacio vital para su sostenimiento y posibilidad de existir en paz. A pesar de ello el despojo de unos sectores socioeconómicos por otros se ha realizado acudiendo al poder y la violencia armada, a partir del control de la población y sus territorios, lo que busca generar condiciones para la inversión extranjera, medio por el cual se vienen desplegando las huellas corporativas intencionales en el país.

Los indicadores que permiten aproximarnos a la distribución del espacio en el país, muestran la profunda concentración de la tenencia de las tierras. Este es el caso del Gini que en la última década se incrementó ubicándose en el 2009 por encima del 0.85, lo que evidencia una alta concentración de tierras en el país³⁶. El catastro rural nacional registra un poco más de 85.7 millones de hectáreas, de éstas, el 44% un poco más de 38 millones de has corresponden a predios privados. “El 41% del área de propiedad privada es gran propiedad o predios de más de 200 hectáreas (15.8 millones de has); y el 40% de la propiedad privada se clasifica como mediana propiedad, predios entre

20 y 200 hectáreas. La extensión restante, siete millones de has, está distribuida entre pequeña propiedad, minifundio y microfundio.” La propiedad privada en Colombia se incrementó en un poco más de cuatro millones de has en el periodo que va del año 2000 al año 2009³⁷.

A manera de conclusión

Los procesos y cifras presentados evidencian la huella geográfica del poder, de unos sectores socioeconómicos sobre otros, huellas configuradas en medio del conflicto armado, el control territorial, la concentración de tierras y el desplazamiento. Procesos que caracterizan la huella del despojo, realizada para la acumulación a partir de la relocalización de unos capitales en búsqueda de una solución espacial a la crisis internacional. Un proceso global que se despliega en las regiones y localidades, vinculando los espacios socialmente necesarios para la vida de algunas comunidades, con los intereses de grandes corporaciones.

En este proceso las huellas geográficas corporativas nacionales e internacionales despliegan su poder económico y político para concentrar espacios tierras y territorios donde han construido sus vidas comunidades rurales. En tal sentido la concentración de las tierras asociado a la extranjerización y las distintas formas de acaparamiento de las tierras y sus recursos, hace parte del despliegue del poder y de las huellas geográficas por medio de corporaciones de los países que mantienen sus modos de vida y crecimiento económico bajo estrategias geopolíticas neo-coloniales. 



³⁶ Este índice puede ser más alto debido, al proceso de contra-reforma agraria del que no se cuenta con información por ellos el índice ha sido estimado con información catastral desactualizada y con deficiencias. Ver: IGAC Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. 2012.

³⁷ Idem., IGAC. 2012, pp. 117-118.



El campesinado, una cultura amenazada por la urbe globalizada

Gloria S. Moreno Fernández¹
Gladys Gómez Ariza²



ciudad con enormes vacíos de gobernabilidad.

El fortalecimiento de lo público comienza por reconocer que su gestión no es exclusiva de las entidades gubernamentales; de hecho, son significativos en ese sentido los esfuerzos de las comunidades campesinas por hacerse visibles desde propuestas concretas como el agroparque los Soches, desde su participación en el intento de establecer reglas de juego que les permitiera autoincluirse en la ciudad, de los que derivó una sensible ampliación en el imaginario colectivo urbano: con ocasión de la construcción de la política de ruralidad, fueron muchos los habitantes de la ciudad que se enteraron que Bogotá también era rural.

La búsqueda de interlocución con la administración sostenida en el tiempo tampoco se limitó al caso de Los Soches, igual capacidad exhibieron las comunidades de las veredas La Requilina, Chiguaza y Olarte, desde la expedición de Plan de Ordenamiento Territorial se plantearon en un constante debate por la defensa de la territorialidad rural frente a la determinante normativa de expansión en Usme; igualmente, la reivindicación de la ruralidad de las comunidades de Ciudad Bolívar ante la implacable presión sanitaria por el volumen de basuras que se depositan entre las veredas Mochuelo alto y bajo. Justamente, en esta coyuntura de cambios de enfoque en el modelo de ciudad, es la oportunidad de obtener respuestas,

A propósito de la afortunada defensa de lo público resaltada en el actual Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., bien vale la pena comenzar señalando que la construcción de lo público, como estrategia para oponer al clientelismo y la corrupción tiene una gran oportunidad en el reconocimiento de la capacidad organizativa y de gestión del territorio por parte de las comunidades. En el caso particular de la ruralidad es connotada la lucha por su territorio desde la segunda mitad de la década de los noventa ante los embates de la expansión urbana formal e informal y ante la administración misma de una

¹ Antropóloga. Magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible. C.e.: eslagloria@yahoo.com

² Comunicadora Social. C.e.: gladysenred@hotmail.com



no parciales y atomizadas, sino de expresión de una voluntad política que refleje la articulación que el PDD plantea: ordenamiento alrededor del agua, revertir la segregación socioespacial y la defensa de lo público, todo en uno.

La capacidad de las comunidades campesinas de hacer coincidir sus intereses como grupo poblacional con los intereses colectivos de la ciudad respecto a la protección del agua y el control territorial de los distintos factores, no solo urbanización pirata, que jalonan la expansión urbana los convierte en los socios por antonomasia de la administración en el propósito de consolidar la ciudad compacta. Sus esfuerzos se pueden apreciar en ejercicios de planeación en los que, convocados por las entidades desde 2004, han participado y la disposición permanente para contribuir en el diseño de las estrategias para enfrentar conjuntamente los conflictos territoriales de la ruralidad y el borde urbano-rural.

En razón a esta importancia que cobra lo público, hablar de la ruralidad en un contexto territorial predominantemente ciudadano, significa romper con el arquetipo de la ciudad capital, que por sus propios atributos, excluye otras formas de vida de la llamada “modernidad urbana” abundante en consumo y oferta de servicios, lo cual pareciera inevitable como paradigma de la sociedad actual. Desde esta perspectiva es necesario analizar los conflictos socio-ambientales que afronta y el potencial de la ruralidad en la sustentabilidad territorial de Bogotá.

Pese a la tendencia impuesta de vivir en las urbes, en las goteras de la ciudad se extiende una ruralidad en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con características socioculturales, económicas, ambientales y políticas que complejizan su dinámica y relaciones.

Este territorio ofrece servicios ecosistémicos con cualidades hídricas y boscosas importantes: Páramo, bosques alto andino, vegetación subxerofítica y fauna asociada. Ecosistemas que por sus cua-



lidades y vulnerabilidad, especialmente ante el cambio climático, tienden a desaparecer.

En él, confluyen identidad cultural, cuencas hidrográficas, historia y ecosistemas para conformar una unidad territorial donde la diversidad enriquece paisaje y geografía, exalta las montañas y da nacimiento a una de las principales cuencas de Bogotá, la del río Tunjuelito, siendo el agua fundamental para la viabilidad de la ciudad, la ruralidad del Distrito Capital cumple un papel primordial para el abastecimiento hídrico tanto urbano como rural y no solo distrital sino regional.

En la actualidad se encuentra en la mira de empresas multinacionales, amparadas por las políticas energéticas para construir enclaves de generación mediante cadenas de microcentrales aprovechando el potencial hídrico de Sumapaz, proyecto que cuenta con el consenso social.

La estructura del país desde la década del sesenta dejó de ser esencialmente cam-



La estructura del país desde la década del sesenta dejó de ser esencialmente campesina para darle paso a las urbes con un 70% de su población concentrada en las ciudades.

pesina para darle paso a las urbes con un 70% de su población concentrada en las ciudades, tendencia típica de las sociedades modernas, sin duda, orientada por las políticas del Estado hacia el desarrollo urbano, que cobraron auge bajo el manto de la globalización. En términos cuantitativos este proceso implicó el paso de 7.915 hectáreas urbanizadas en 1964 a 30.110 hectáreas en 1999, es decir aumentó la urbe más de cuatro veces. Un cambio que le llevó a Europa cerca de 300 años, a nosotros tan solo veinte, lo cual precipitó que la ruralidad se hiciera “subalterna” a los intereses urbanos. Es ilustrativa la tendencia de enfrentar precisamente las cifras de población urbana con las de población rural para justificar cualquier cosa: con esta falacia numérica el interés general siempre estará sospechosamente del lado urbano.

Este tránsito agudizó los múltiples conflictos sociales, culturales y económicos³, donde el concepto de rural fue asociado al subdesarrollo o atraso, “ninguneando”⁴ la cultura campesina, generando un desconocimiento de este escenario, de alguna manera se invisibilizó el territorio rural, en toda su complejidad, simplemente se lo asimila como proveedor de “recursos naturales” y de suelo urbanizable y se actúa en consecuencia. De tal manera la ciudad no solo ha succionado bienes naturales de la región como el agua, sino que ha ido apropiándose del territorio, para transformarlo en *metros cuadrados valorizados*, con el consiguiente deterioro social, ambiental y la pérdida de identidad cultural.

¿Cómo vive el campesino, *ad portas* de la ciudad?

Parece estar signado por el anacronismo, asumir la condición de campesino en la plenitud del modelo urbano como sinónimo de progreso y modernidad. Irónico destino de limbo social es el reconocimiento a la multiétnicidad y pluriculturalidad

inscrita como principio en la Constitución Nacional, que simultáneamente alcanzó a comunidades étnicas y pareció enterrar las posibilidades del campesino de ser reconocido.

El territorio rural es escenario de conflictos, en especial en el borde urbano-rural, el más palpable es por supuesto el de tener una ciudad, que se aproxima a los ocho millones de habitantes, presionando la ruralidad, contraponiendo el interés de convertir la ruralidad en suelo urbanizable a expensas del territorio campesino. La operación Nuevo Usme planeó una expansión en cuatro polígonos que desaparecerían cinco veredas con cerca de ochocientas hectáreas de Usme para la oferta de vivienda de interés social en la ciudad, sin mayores opciones para una minoría social y cultural.

Pero éste no es el único factor de conflicto, el sur es además el sumidero de la ciudad, lo ilustra la disposición de basuras en la zona rural de Ciudad Bolívar, con algo más de seis mil toneladas diarias que se depositan en lo que antes eran tierras fértiles; en ellas los campesinos cultivaban y producían tubérculos, hortalizas y cereales, combinando con ganadería de menor extensión y cría de especies menores. Hoy la fetidez, la contaminación atmosférica y paisajística, la pérdida de cobertura y capa de suelo, no sólo en el área destinada al relleno doña Juana sino en las veredas aledañas que sufren el impacto socioambiental, hace progresivamente inviable la vida campesina en su proximidad.

La reflexión sobre lo público nos obliga a reconsiderar las múltiples dimensiones del territorio y apreciar que los usos de alto impacto que, por efecto de la segregación socioespacial esta ciudad ha concentrado en la cuenca del Tunjuelo, deberán ser reasumidas colectiva y solidariamente a fin de recuperar en alguna medida el sentido de equidad y el equili-

³ García Canclini, Néstor. “Consumidores y Ciudadanos” Grijalbo editores, México 1995.

⁴ Galeano, Eduardo incorporó el concepto “ninguneo”, para caracterizar el tratamiento de los países desarrollados con el llamado tercer mundo, especialmente con Latinoamérica.



brio territorial entre la ciudad y el territorio que le da sustento, lo cual nos obligará a asumir socialmente la responsabilidad de un manejo integral de los residuos sólidos y a priorizar la seguridad alimentaria antes que el depósito de basuras en suelo rural. La minería plantea otro escenario en disputa con la perspectiva rural y la seguridad alimentaria, que no desarrollaremos porque amerita capítulo aparte.



Expansión, basuras, minería y desarrollo informal disputan su oportunidad a las formas de vida y economía campesina, poniendo en riesgo un modelo de ocupación que podría llegar a ser sostenible, dada su condición de baja densidad, sistemas productivos campesinos (los que aun perviven), redes sociales de vecindad y parentesco; en fin, en este borde de ciudad, la territorialidad ha sido construida en una dinámica histórica adversa a la campesinidad como opción cultural.

La falacia de la nueva ruralidad

La dinámica rural adquiere una importancia mayor por sus externalidades y enlaces intersectoriales, y por el papel articulador de una economía diversificada y de vínculos urbano-rurales, permitiendo entender que su importancia estriba en su impacto

sobre una población mucho mayor que aquella dependiente directamente de su actividad productiva⁵, esta lectura de la corriente que expone la teoría de la nueva ruralidad, lo hace desde la visión de la ruralidad como desarrollo agroindustrial, con tecnologías que contribuyen al monocultivo y a la economía de escala para *asegurar la productividad*, y por supuesto *la rentabilidad de la inversión*. Una visión que nace del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), quien promueve proyectos en el marco de la Iniciativa de Economía Verde (IEV). Este proyecto define a una economía verde como el resultado de mejoras en el bienestar humano y equidad social, al mismo tiempo que se reducen los riesgos ambientales y la escasez ecológica⁶.

En plata blanca, el mercado se impone en una lógica de demanda y oferta, por encima de la seguridad y soberanía alimentaria, actuando en consecuencia. Desde esta perspectiva, predominan las grandes inversiones en tierras preferiblemente llanas que permitan su mecanización e industrialización, se producen y acaparan semillas manipuladas para la producción de un solo ciclo productivo y generar dependencia al mercado de semillas, insumos, agroquímicos, etc.

Este modelo se exhibe como la salvación a las hambrunas mundiales y para superar la pobreza. En la ruralidad del Distrito Capital, es posible ver un ejemplo en la agroindustria de flores, al norte de la ciudad en la localidad de Suba, bajo estos preceptos de eficiencia, productividad y rentabilidad, se hacen los mayores aportes de fungicidas y agroquímicos a los acuíferos de mayor importancia. Por contraste las áreas rurales del sur se destacan por configurar propiedades pequeñas de parcelas y minifundios en laderas y zonas de subpáramo, con prevalencia de economías familiares que merecen unas políticas públicas de soporte a las condiciones particulares, potenciando la producción

⁵ Niño Carrillo, Lucy Amparo, Directora de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Estrategias de Desarrollo Rural para una nueva ruralidad. Seminario Internacional: LA Nueva Ruralidad en América Latina. 2001, PUJ.

⁶ Nadal, Alejandro. Periódico Jornada. www.jornada.unam.mx/2012/01/11/ind



agroecológica y la permacultura como opción de vida.

Territorio vs disposición de suelo urbanizable

La ciudad avanza, discurre, se impone a los límites del perímetro de servicios. No solo aquella planificada, ordenada y habilitada con servicios, espacio público e infraestructura para garantizar calidad de hábitat, más bien hablamos de aquella que se hace mediante el loteo ilegal, la informalidad y la ocupación ilegal de rondas de ríos y quebradas, adentrándose a las áreas rurales. Esto sucede como efecto de uno de los principales conflictos socioambientales, el del acceso al uso y disfrute del suelo en la ciudad, en razón a la especulación en los precios del suelo. En tanto los urbanizadores ilegales ofrecen lotes de 72 m² a precios aproximados de 25 mil pesos metro de tierra, para construir una vivienda unifamiliar levantada por autoconstrucción, lo cual se ajusta a las posibilidades de amplios sectores poblacionales, la vivienda de interés social se acerca al millón de pesos metro cuadrado construido y esto en las zonas de periferia, pues en el centro y norte oscilan los precios entre cinco y doce millones metro cuadrado, respectivamente; en consecuencia, la segregación se agudiza y la ilegalidad campea sin que la regulación y el control por parte del Estado se ejerzan efectivamente.

El típico patrón de ocupación que se impone demanda de una construcción colectiva-comunidad-entidades de estrategias de contención y definición y manejo del borde urbano-rural.

La polarización rural-urbano en sus dimensiones cultural, geográfica y territorial, reflejada en la inversión y presencia Estatal, obedece a la visión de opuestos de estos dos sistemas; sin duda, otro de los factores de polarización que está ocurriendo en la ruralidad, especialmente en el borde urbano-rural es el conflicto por acceso al agua, este servicio que no puede ser extendido más allá del perímetro de servicios, ocasiona una presión de la po-

blación asentada en la informalidad a los acueductos veredales que a duras penas pueden garantizar, por su propia gestión, un servicio a las familias de sus veredas. Dicha polarización conlleva a las diferencias y en ocasiones a conflictos sociales entre ciudadanos y campesinos, expresada en calidad de vida, acceso a servicios, dinámica económica e inversión pública.

Disminuir esta polarización para dar el salto a la complementariedad, exige una voluntad de administración compartida del territorio, esto es alianza público-sociales para consolidar el modelo de ocupación campesina en la ruralidad, con medidas que motiven la recuperación de los sistemas productivos tradicionales.

Sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos campesinos

La atención que requiere la zona rural, no responde única y exclusivamente a las necesidades manifiestas de la población campesina, sino a la importancia de dicho territorio como oferta ambiental y alimentaria. Aun cuando para el Distrito Capital es más representativa la oferta ambiental que la alimentaria por cuanto la viabilidad del crecimiento de la ciudad depende de la oferta hídrica, es claro que el fortalecimiento de los sujetos sociales que están en condiciones de hacerla posible, podría afirmarse en su propia soberanía alimentaria.

Por su potencialidad, el sector rural como territorio, es estratégico en el desarrollo integral de la ciudad. La inversión en el desarrollo de los territorios rurales tiene la más alta rentabilidad económica y social, lo que se opone a las ideas compensatorias y asistencialistas y conduce a la necesidad de definir estrategias de desarrollo rural integrales y referidas al territorio, más que a la actividad económica agropecuaria.

Es éste un tema de carácter nacional, nada fácil de reorientar, pero con posibilidades de iniciar un proceso de reconocimiento e identidad propia en el Distrito Capital, como una apuesta de gobernabilidad del

La mayor riqueza de esta estructura rural está en su cultura, tradiciones, valores e instituciones, conformadas en largos procesos de construcción social, que cuentan con muy valiosas formas de organización social, solidaridades y mecanismos de acción colectiva, que hoy se han visto vulnerados por esquemas de desarrollo que las han excluido, rechazado y subestimado.



mismo, teniendo en cuenta que este territorio tiene un ingrediente más y es el conflicto político que alberga.

El concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, de construcción social, apropiación e identidad cultural, donde se reconocen relaciones entre lo sociocultural y las dimensiones ecosistémicas e institucionales, que se traduce en capacidad de gestión que otorga sentido y significación simbólica a la ocupación *del suelo*, las interrelaciones entre lo rural-urbano, entonces plantea un hecho significativo y es que lo rural no es solamente agricultura y población dispersa. La visión territorial de lo rural es un modelo de vida que permite visualizar la multiplicidad de funciones vinculadas al desarrollo agrícola, pecuario y artesanal, a los servicios, a la cultura, a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.

La relación urbano-rural es complementaria e interdependiente. Este reconocimiento debería servir al propósito de incrementar el respeto mutuo, de tal manera que el crecimiento urbano no menoscabe la riqueza sociocultural y ambiental de lo rural. Este enfoque demanda una política gubernamental con instituciones fuertes que aseguren la administración compartida del territorio. Es poco usual pensar en que la planeación, la gestión y el control del territorio sea un ejercicio compartido con las comunidades, sin embargo en el caso del territorio rural es muy claro que pautar a distancia el comportamiento de particulares y comunidades no ha sido un ejercicio afortunado: se desconoce el territorio en escalas muy generales y, además, la actuación distrital compartimentada impide construir las sinergias necesarias para actuar en espacios cuya sostenibilidad ambiental, económica y cultural depende de equilibrios delicados. Este proceso de aproximación a la ruralidad es más fácil, eficiente y legítimo si se hace en interlocución y acuerdo con las organizaciones campesinas.

Las comunidades campesinas de la ruralidad reclaman presencia estatal, su capa-

cidad organizativa a través de sus redes naturales: el parentesco, el compadrazgo y el paisanaje y por supuesto su arraigo a la tierra, su identidad como campesinos, conformando un tejido social que confluye alrededor de territorialidades locales. Gracias a esta capacidad y conocimiento del territorio se gestiona el ordenamiento y resuelven conflictos, hasta donde es posible ante los intereses privados.



El momento actual ofrece una posibilidad de poner a prueba la voluntad política para traducir en la política de ruralidad y en el ajuste al POT, las estrategias de manejo del borde urbano-rural, privilegiar la seguridad alimentaria, la cultura y modelo campesino de ocupación, antes que la expansión urbana, finalmente, compartir la administración del territorio.

Un enfoque de esta naturaleza tiene como soporte el principio de complementariedad, en tanto la zona rural se constituye para la ciudad en el garante de la oferta de servicios ecosistémicos y alimentarios, a su vez la ciudad le retribuye con oferta de servicios sociales básicos. Esta es la manera como la zona rural puede cumplir su papel de conector entre la ciudad y la región, en la medida que se brinden las condiciones de habitabilidad a las comunidades campesinas y de regulación al crecimiento urbano. 🐾



Agua y relaciones urbano-rurales en Colombia: ¿Prosperidad para quién?

Danilo Urrea¹



Foto: CENSAT Agua Viva - AT, Colombia

lombiana y se constituyen formas autónomas de gestión del agua, que generalmente están por fuera de la administración estatal y que se contraponen al abandono sistemático del campo por parte del Estado y sus instituciones, pero que no por ello se abstraen de la posibilidad de garantizar agua para la población, más allá de la ruralidad misma.

Este artículo presenta, en primer lugar, un análisis del camino de construcción que sigue la actual política rural de agua en el país, haciendo referencia al contexto en el que ésta se ha pretendido generar. En segundo lugar, describe el modelo público-comunitario de gestión territorial que vislumbran las comunidades organizadas como

salida a la encrucijada de la privatización y la afectación al ciclo hidrológico producto del modelo de desarrollo colombiano, y que a su vez enfrenta las políticas de fomento privado y transnacional de las últimas dos décadas. Finalmente señala algunas consideraciones respecto a la actualidad de los conflictos ambientales por el agua y la coyuntura del país, tanto en términos del modelo minero-energético como frente a la construcción de la paz, a mi modo de ver temas en los que las aguas, como elemento articulador de la vida, resultan afectadas y al tiempo se convierten en condición de posibilidad para entender las dinámicas sociales y las

Hacer referencia a la relación urbano-rural del agua en Colombia implica, necesariamente, tener presentes dos miradas diferenciadas y complementarias. Por un lado, la manera en que se ha estructurado la política pública y desde allí cómo se ha trazado “si es que acaso eso hubiese llegado a suceder” una valoración de las formas de ocupación del territorio y la disponibilidad de agua en el campo colombiano, aunado a un modelo correlativo de gestión hídrica para la ciudad.

De otro lado, la forma en que, de hecho, se construye la territorialidad rural co-

¹ Censat Agua Viva. Amigos de la Tierra. Colombia. C.e.: agua@censat.org





posibilidades de reconstrucción de nuestro complejo y parcialmente descompuerto tejido social.

Política rural de aguas y ¿participación? comunitaria

En noviembre de 2011, Beatriz Uribe, la entonces titular de lo que en ese momento fue el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT– anunciaba la desaparición de los Planes Departamentales del Agua² –PDAg–, uno de los fracasos más sonados en las últimas décadas en materia de política de agua para el país. La supuesta desaparición de los PDAg obedeció a que luego de cinco años, según la exministra, habían caído en la burocracia y se necesitaba una estrategia más efectiva para solucionar la problemática hídrica de las y los colombianos. Meses antes, la firma *Acodal* señalaba en el periódico *El Espectador* que las obras proyectadas se encontraban retrasadas hasta en un 75%, y no se veía una salida concreta a la equívoca estructuración de los PDAg, que entre otras cosas implicaban en su modelo de inversión el endeudamiento departamental con la banca nacional y multilateral y la pignoración de recursos de regalías y del sistema general de participación. Las críticas a los PDAg se expresaron en su momento, principalmente desde la articulación intersectorial del referendo por el agua, y existen diferentes enfoques que demuestran su inviabilidad³.

Para el tema en cuestión, la política rural de agua, nos interesa, principalmente, uno de los puntos críticos de los PDAg: fueron construidos sin perspectiva territorial, y sin tener en cuenta las necesidades específicas de la población. En la estructuración de los planes, los diagnósticos departamentales no se realizaron bajo un esquema de participación comu-

nitaria, y como algunos de los consultores de dichos diagnósticos expresaron⁴, no existió valoración estricta de la relación urbano-rural para la implementación de las obras, y la ruralidad no fue tenida en cuenta como unidad territorial para la inversión ni para el mejoramiento de sistemas de agua. Estas limitaciones, entre muchas otras, mostraron la inexistente integralidad de estos instrumentos, y llevaron a que su permanencia, por lo menos frontal y públicamente, fuese insostenible.

Con la desaparición de los PDAg se anunció la aparición de la nueva política, *agua para la prosperidad*. Sorprendentemente, la prosperidad parecía no tener ninguna diferencia con los PDAg, pues la información pública y la página web del entonces MAVDT no mostraban ningún cambio en el contenido de los instrumentos de construcción de la política. Más allá de la diferencia nominal se mantuvieron los mismos esquemas de financiación, las mismas estructuras en las que se reconocía la burocratización, y, más sorprendentemente aún, se anunciaba la masiva entrada de operadores privados al país bajo el argumento de su eficacia y eficiencia en la gestión del agua. La exministra nunca aceptó la posibilidad de un debate público en el Congreso de la República en el que se rindieran cuentas de los cinco años de implementación de los PDAg, y se despejaron los interrogantes frente a cómo se daría la transición entre el fracaso anterior y *agua para la prosperidad*.

La construcción de una política rural de aguas para el país fue concebida como la gran variación respecto del programa anterior y se presentó, mediante documento Conpes 3715, el inicio de un nuevo intento de solución a la problemática del agua en el campo colombiano. La lectura

² Los Planes Departamentales del Agua hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo del segundo mandato del gobierno Uribe; fueron presentados como la solución a la falta de acceso de la población al agua potable y al saneamiento básico, privilegiando el endeudamiento con la banca privada y las instituciones financieras internacionales, y llevando a escala departamental el modelo de privatización inaugurado en el año 94, principalmente en la costa caribe colombiana.

³ Véase, por ejemplo, Urrea y Cárdenas. *Aguas sin Planes ni dueños. Políticas de privatización y procesos de resistencia en Colombia*. 2011. CENSAT agua Viva. También disponible en <http://censat.org/publicaciones?task=view&id=56&catid=10049>

⁴ Idem.



de dicho documento no entrega un panorama alentador. El Conpes 3715 se estructura “con el fin de obtener concepto favorable para contratar por parte de la Nación un empréstito externo con la banca multilateral, hasta por sesenta millones de dólares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT”⁵.

del programa”⁶. Nuevamente, como en el modelo de privatización inaugurado en el año 1994, con la ley 142, la banca multilateral es protagonista en la creación de una propuesta de política de agua.

Más allá de presentar el documento Conpes, que bien vale la pena conocer para entender el enfoque gubernamental respecto a la prestación del agua en la ruralidad colombiana, este escrito intenta advertir lo que esa intencionalidad pone en juego. Como lo señala el documento, el crédito con el BID sirve para financiar sólo parcialmente el programa, y, según lo expresado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la gobernación de Cundinamarca⁷, con el crédito se realizaron los talleres de socialización y se invertiría en la construcción de algunos proyectos piloto y en la sustentabilidad de las zonas rurales dispersas. Para atender las necesidades de la población rural, se estima al año una inversión de 82.000 millones de pesos, y la asignación del gobierno Santos es de 36.000 millones. La diferencia se espera cubrir con la participación de la Agencia Española Internacional para el Desarrollo en Colombia - AECID⁸.

Además de las preocupaciones que surgen del análisis de la participación de la banca multilateral en la construcción de la política de agua en Colombia⁹, genera inquietudes el papel que podría jugar la cooperación española, pues desde el año 1994 las empresas provenientes de este país han secundado el proceso de privatización¹⁰. Queda por indagar directamente con la AECID y el Ministerio, cuál será



Foto: CENSAT Agua Viva - AT, Colombia

Las categorías de inversión se reúnen en cuatro ítems, a saber: : “i) infraestructura, ii) desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional del prestador, iii) asistencia técnica y modelos de apoyo postconstrucción en zonas rurales, y; iv) administración, seguimiento y evaluación

⁵ Documento CONPES 3715. Página 6. Disponible en: <https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=M7dKVCJR8uw%3D&tabid=1260>

⁶ Idem.

⁷ Esta socialización fue realizada el 3 de febrero de 2012 con la participación de un promedio de 30 personas, casi ninguna de ellas perteneciente a sistemas comunitarios rurales de agua. El taller fue facilitado por la Fundación AVINA y el Instituto SINARA.

⁸ Bien vale recordar que la AECID sostuvo varias reuniones para definir el modelo de cooperación en agua que implementaría en Colombia. A estas reuniones asistieron varias de las organizaciones que participaron activamente en el Referendo por el Agua, presentando la necesidad de avanzar hacia un modelo público-comunitario y advirtiendo los conflictos por el agua generados por las asociaciones público-privadas y que en general la privatización ha conllevado principalmente en la ruralidad y zonas menos favorecidas del país.

⁹ Para conocer más acerca de la participación de la banca multilateral y la política de agua en Colombia puede consultarse Camacho y Urrea. Agua y transnacionales en la costa caribe: laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia. 2007. CENSAT Agua Viva. También disponible en: <http://censat.org/publicaciones?task=view&id=2&catid=10049>

¹⁰ Filiales españolas de la transnacional Suez, como Aguas de Barcelona, han tenido una amplia participación en los procesos de privatización del agua en Colombia. En la costa caribe colombiana también han participado de asociaciones público-privadas el Canal Isabel II y Fomento de Construcciones y Contratas.



el esquema de financiación que se generará con la participación española, y cuáles las condiciones de inversión-cooperación definidas¹¹.

Ahora, la participación comunitaria en la construcción de la política rural de agua consistió en la realización de cinco talleres –cuatro regionales y uno internacional– facilitados por la Fundación AVINA –definida como actor estratégico para garantizar dicha participación–. Llama la atención que en un país con una población rural que supera el 20%, la perspectiva de consulta y deliberación comunitaria se reduzca a la realización de talleres en las sedes de algunas gobernaciones y en los que sin duda no se hicieron presentes las comunidades rurales organizadas para la prestación del servicio del agua. Así, por un lado, uno de los problemas principales que llevó a su rotundo fracaso a los PDAg, la falta de perspectiva territorial y la nula participación de los directamente afectados e involucrados con la problemática, vuelve como eterno retorno en la supuestamente innovadora política rural de agua para la prosperidad. Por otra parte, la definición de la cuestionada Fundación AVIMA como facilitadora de la participación comunitaria despliega un manto de duda sobre la concepción gubernamental de un proceso participativo. Recordemos que la Fundación AVIMA ha sido fuertemente cuestionada por el papel que supuestamente ha jugado en algunos países en relación con la cooptación de líderes que luchan frente a la privatización de los bienes comunes¹².

Brilla por su ausencia la correlación entre la creación de la política rural de agua y la protección territorial para asegurar agua para la población urbana. Pareciera

que los afanes por garantizar la trilogía endeudamiento-inversión-cooperación, generalmente desde la intervención extranjera, reducen la posibilidad de pensar un país en el que las dinámicas urbanas reconfiguran día a día el futuro del campo colombiano, y en el que la posibilidad de agua para la población urbana depende de la lógica de ocupación territorial producto de esa reconfiguración.

Modelo público-comunitario vs privatización del agua

Históricamente, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua en Colombia han trabajado sin el apoyo estratégico del Estado y en condiciones adversas frente al modelo de desarrollo que impacta los territorios. Sin embargo, las comunidades y sus sistemas de agua han garantizado el acceso de la población y se calcula que en Colombia existen alrededor de 12 mil pequeños prestadores, muchos de ellos en zonas rurales. Posterior al proceso de referendo por el agua, y como correlato de dicha iniciativa, la organización de los sistemas comunitarios ha emergido bajo la figura de *red nacional de acueductos comunitarios*. Además de la articulación para enfrentar los ataques de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD– y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, que cada vez ahogan más a las comunidades organizadas con exigencias en la normatividad (en una clara contradicción con la inasistencia que el Estado y sus instituciones, como las nombradas, han tenido para con las comunidades), la propuesta de construcción del modelo público-comunitario de gestión del agua y territorial ocupa los debates y esfuerzos de la red.

¹¹ Uno de los antecedentes que también generan preocupación se hizo manifiesto durante la pasada Cumbre de los Pueblos en Chile. Allí, y analizando los resultados de la Cumbre Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que transcurrió simultáneamente, se mostró cómo la crisis económica europea ha llevado a la UE, y concretamente a países como Alemania, a generar un modelo de cooperación con América Latina que en realidad es un esquema de protección de inversiones. Para información concreta de esta modalidad: <http://radiomundoreal.fm/Cooperacion-para-la-explotacion>

¹² Para la ampliación de esta información se sugiere el texto de Paco Puche: Dos mil doce, un año clave en la lucha contra AVINA y ASHOKA. Publicado en diciembre de 2012. Disponible en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/Dos_mil_doce_un_ano_clave_en_la_lucha_contra_AVINA_y_Ashoka



Existen diferencias dependiendo de las características geográficas de los territorios donde se ubican las diferentes comunidades y organizaciones pertenecientes a la red, no obstante, generalmente la construcción del modelo público-comunitario parte, en principio, de los análisis de las dinámicas territoriales que han dado lugar a la gestión del agua por parte de las comunidades y a la autonomía territorial que se presume necesaria en un país entregado al corporativismo en lo que puede ser definido como la consolidación de una corporación-nación. Frente a una política de aguas construida para favorecer la inversión privada y el control transnacional de los territorios, las organizaciones comunitarias contraponen un modelo comunitario que de hecho ha funcionado en Colombia desde hace más de 50 años. Ese modelo ha partido de la protección del territorio bajo la concepción según la cual territorios degradados no pueden producir aguas de calidad y en cantidad suficientes para los seres vivos. Por tanto, la defensa y cuidado del territorio es condición necesaria para la gestión del agua, no so-

lamente para garantizar el consumo de la población rural, también para asegurar el cuidado de fuentes de las que dependen poblaciones urbanas (como ha sucedido en los páramos de El Almorzadero, San Turbán y Sumapaz, sin los cuales la población urbana de diferentes ciudades no tendría garantía del líquido vital).

Adicionalmente, las relaciones de solidaridad y reciprocidad al interior de las comunidades se convierten en la segunda condición objetiva para la posibilidad del modelo. La división social del trabajo se realiza en función del bien general y al agua no se le asignan valores de cambio, de acuerdo a lógicas de oferta y demanda, como sucede con el fenómeno de la privatización. Las tarifas por el servicio se definen en asambleas populares y las ganancias, cuando se obtienen, se reinvierten en el mejoramiento de los sistemas, procurando la dignificación de la vida de la población.

De fondo, esta alternativa entraña la resignificación de lo público —en riesgo de desaparición en la etapa neoliberal del





capitalismo, que mercantiliza el patrimonio natural a través de estrategias como la financiarización— desde la gestión comunitaria. Así, la dimensión comunitaria del manejo de los bienes comunes pretende demostrar que es posible concebir lo público más allá del Estado, pero sin renunciar a que esa resignificación se convierta en proceso de recuperación estatal frente al embate corporativo. Lejos de compartir la visión de la necesidad de acabar con el Estado, por no cumplir sus funciones como garante del derecho de los pueblos, las comunidades organizadas comprenden que contribuir a su desaparición sería de alguna manera favorable al modelo corporativo.

A largo plazo, el proceso de articulación de acueductos comunitarios proyecta la creación de una ley propia que tenga en cuenta las particularidades y especificidades de las organizaciones, comunidades y territorios. La definición de un marco jurídico de prestación del servicio adecuado a las necesidades y posibilidades de las comunidades organizadas, puede anclarse también en la autonomía política de las legislaciones populares que se han expresado en escenarios como el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, realizado en octubre de 2011 en la ciudad de Cali, y en el que pueblos, organizaciones y movimientos sociales proyectaron siete mandatos para el control y administración territorial, entre ellos el mandato por el agua¹³.

Aguas, modelo minero-energético y paz

Sin lugar a dudas, con la puesta en marcha de la llamada locomotora minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos los conflictos por el agua se exacerbaban, y los impactos sobre los territorios del agua no se hacen esperar¹⁴. La minería pone en riesgo la disponibilidad de agua de calidad

y en cantidad suficientes para los seres vivos, y genera competencias desiguales y conflictos por el uso entre las empresas de actividad extractiva y, por ejemplo, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua.

Asimismo, la actividad extractiva minera, y en directa relación con las afectaciones al ciclo hidrológico, pone en riesgo la soberanía alimentaria de las y los colombianos, como ha sido demostrado en casos concretos como el de la pretendida explotación en Cajamarca—Tolima—, donde la Anglo Gold Ashanti pretende la explotación del oro y pone en riesgo, entre otras cosas, la producción alimentaria de la llamada *Despensa Agrícola de Colombia*.

En casos como éste se hace manifiesta la equívoca y limitada concepción de la *prosperidad democrática* respecto a las relaciones urbano-rurales y las dinámicas que dentro de ellas deben respetarse para garantizar territorios que a su vez aseguren el acceso al agua de la población del campo y la ciudad, y la alimentación de los pobladores urbanos a partir de la producción nacional. La lógica del crecimiento económico y de favorecimiento para negocios privados y transnacionales atropella la tradición y ancestralidad colombianas y favorece la territorialización del capital al tiempo que desterritorializa a comunidades étnicas, campesinas y urbanas.

El modelo energético basado en la producción hidroeléctrica desplaza comunidades de pescadores, campesinos, afrodescendientes e indígenas para asegurar la construcción de megarepresas en los ríos que otrora entregaban sus aguas para configurar el sentido de la vida de esas poblaciones. Las empresas definen los censos en las regiones y arbitrariamente generan compensaciones que no resuelven la desterritorialización y la pérdida

¹³ Véase: <http://www.radiomundoreal.fm/Protectores-del-agua>

¹⁴ Los intereses de las corporaciones transnacionales y en general de las empresas mineras y de construcción de represas se ubican en las principales estrellas hidrográficas del país, y en los principales ríos cuyas aguas son utilizadas para el procesamiento de minerales o estrangulados para la producción hidroeléctrica. Ejemplos sobran en el país - desviación del Río Ranchería para minería de carbón en La Guajira, construcción de la represa El Quimbo sobre el río Magdalena, entre muchos otros.



de las formas de subsistencia de las y los afectados.

Las aguas se privatizan y el Estado se aplica en función de garantizar la inversión extranjera directa, permitiendo el despojo de las tierras y la desaparición de los saberes ancestrales y de la cultura del país. Infortunadamente, frente a la legítima protesta social por la privatización del agua y los territorios, el gobierno colombiano oferta represión, militarización de territorios, detenciones masivas, judicialización de líderes y lideresas, protegiendo negocios como los de Empresas Públicas de Medellín, en el caso de Hidroituango¹⁵.

También queda por esclarecer a dónde van los desaparecidos que se han opuesto a este modelo energético y han defendido el agua, como en el caso de Miguel Ángel Pabón Pabón, integrante del Movimiento Ríos Vivos, a quien se le vio por última vez el 31 de octubre de 2012.

Mientras el gobierno de Juan Manuel Santos habla de paz y sostiene diálogos bilaterales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– para poner fin al conflicto armado de más de cincuenta años en Colombia, simultáneamente aplica acciones nada pacíficas contra la población colombiana, contra las y los pobladores, principalmente de zonas

rurales, en oposición al modelo minero-energético que, como se ha señalado, destruye los territorios de agua y con ellos las vidas y los sueños de los pueblos.

Es evidente la contradicción. Por tanto, la paz en Colombia, además de requerir un proceso de negociación con los agentes alzados en armas, implica, necesariamente, la búsqueda de la justicia social y ambiental, con la participación de las comunidades que históricamente han configurado relaciones de solidaridad y reciprocidad entre ellas y con la naturaleza.

La paz no puede significar el fin del conflicto armado para dar paso a la consolidación de un modelo corporativo destructor de las aguas y de las relaciones entre el campo y la ciudad. La paz debiera configurar la búsqueda de alternativas de vida digna para el conjunto del cuerpo social en Colombia.

Probablemente, el agua como elemento generador de vida tiene mucho que enseñar en estos procesos, y la comprensión de sus ciclos puede orientar la reconfiguración de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y sólo si oponemos, desde nuestros esfuerzos y propuestas, el metabolismo de vida, al de muerte que sustenta la acumulación irracional de capital a partir de las guerras y la destrucción. ♪



Foto: CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia

¹⁵ Véase <http://censat.org/component/content/article/10684>



Economía campesina y ciudad

Jaime Forero Álvarez¹

En Colombia, alrededor del 51% de la producción agrícola viene de las fincas campesinas. Para el 2008 era casi el 60%, aunque esta diferencia se puede expresar debido a los cambios metodológicos en la formulación de las investigaciones y el uso de nuevas fuentes. Con base a los alimentos de todo el país que entran a Corabastos encontramos que casi el 80% de estos provienen de las zonas más cercanas. Por eso se calcula que más del 60% de los alimentos de Bogotá provienen de la economía campesina, aunque se debe aclarar que estos estudios dejan por fuera los productos de origen animal, pecuarios y las importaciones.

Antes del auge de las importaciones, el campesinado aportaba alimentos en la canasta familiar en un equivalente al 35% y alrededor del 70% la producción de los alimentos era generada por los campesinos. Hoy en día no existe el cálculo exacto, pero el aporte de los campesinos es del orden del 25%. Existe otra parte que equivale a los productos pecuarios, vegetales industrializados y los importados que cada vez tiene más auge en la economía de los capitalinos. Aun así, en Bogotá se consume alrededor del 80% de la papa que producen los campesinos, la mayoría de las hortalizas, el frijol en un 100%, la panela en un 90% y casi todas las frutas del consumo interno. Hay casos como la leche, donde podemos ver que se consume alrededor del 40% de la producción campesina.

La economía campesina por lo general no provoca grandes impactos en los ecosistemas a excepción de algunos cultivos que tienen problemas muy severos, prin-



cialmente en papa y ganadería extensiva, que generan impactos en regulación hídrica, erosión y contaminación. Pero cuando hablamos de ganadería no debemos contar con la producción de leche, en donde los impactos son menores, en la medida que el suelo son desprotegidos y las pasturas son robustas.

A pesar de las amenazas, el campesinado sigue siendo protagonista fundamental dentro

¹ Profesor de la Universidad Javeriana. Director de la Maestría en Estudios rurales. C.e.: jforero@javeriana.edu.co



Bogotá se consume alrededor del 80% de la papa que producen los campesinos, la mayoría de las hortalizas, el frijol en un 100%, la panela en un 90% y casi todas las frutas del consumo interno.

del sistema agroalimentario y es parte vital de nuestra seguridad alimentaria. A diferencia del empresario capitalista, el campesino es menos volátil y más persistente por su capacidad de adaptación y posee una mayor capacidad para enfrentar las crisis de los precios y el clima. Además, cuando la tierra que labra la considera un activo económico pero también un patrimonio cultural. Esta lucha por permanecer en el territorio, lo incentiva a proponer nuevas alternativas productivas por el simple hecho de prevalecer.

Campo en la ciudad

Bogotá tiene como característica su micro verticalidad climática, que genera una gran heterogeneidad de producción que se representa por la configuración del país, por estar en la cima de una cordillera y en la zona centro. Esto le permite tener una conexión con muchas partes del país. Es así como el plátano del Arauca y Armenia, el tomate de la Costa, la papa de Ipiales, llega en uno o dos días a Bogotá. Esto va configurando un mercado nacional con un relativo fácil acceso a los alimentos a pesar de una pésima red vial y de otras consecuencias adversas.

En Bogotá encontramos las plazas de mercado, que son una parte importante pero no la sustancial de la economía popular de distribución de alimentos. Además de las plazas, existen bodegas, conglomerados en los barrios populares y tiendas. Las estadísticas de la ciudad están desactualizadas; hay cifras que conllevan a pensar que en Bogotá se consume alrededor del 43% de productos procesados y un 83% de productos no procesados.

Así mismo, encontramos solo en Bogotá alrededor de 140 mil agentes en el abastecimiento de alimentos que cubren todos los estratos. Si bien en los estratos altos el consumidor paga la comodidad y va a los supermercados, en las tiendas consigue aquellos productos que no encuentran en las grandes superficies, pero al parecer a precios más altos. Por contraste en los sectores populares, las tiendas colo-

can los alimentos a precios más bajos y además ofrecen servicios complementarios. Con esto se deduce que las plazas son insubsistentes y que generan apenas unos pequeños porcentajes de todos los sectores que ofrecen los alimentos en la ciudad.

Se ha planteado que en la producción de alimentos para Bogotá que el sistema de comercialización es muy nocivo ya que se pagan precios muy bajos a los agricultores, esto ha aumentado la pobreza rural. Pero según los estudios realizados por la Universidad Javeriana en algunos productos específicos encontramos que resultan siendo remunerativos.

No hay evidencias empíricas que la intermediación rural urbana sea nociva para el campesinado. Es exagerado afirmar que esos precios no remuneran los costos pues de ser así no habría papa, frijol, panela ni plátano.

Es improbable que esos productos con una alta composición monetaria permanezcan en el mercado si los campesinos los están vendiendo por debajo de su costo. La evidencia muestra que se mantienen y solo en algunos momentos por diferentes variables pueden llegar a estar debajo de sus costos. Pero en general no es nocivo, pues un sector que estuviera sometido a esto desaparecería.

Los tecnócratas, promotores rurales gubernamentales y no gubernamentales vienen planteando la eliminación de los intermediarios y sustitución por otro sistema solidario y cooperativo basado en intercambios recíprocos, un sistema moderno operado por eficientes compañías. Según ellos, los intermediarios son los causantes de los problemas económicos de los campesinos.

Nosotros particularmente hemos encontrado evidencias que muestran lo contrario, que la eliminación del sistema no es la vía, sino el ajuste y la regulación y la introducción de mecanismos que permitan un mejor funcionamiento del sistema.



Corabastos

A pesar de los problemas, Corabastos sigue siendo el centro más grande de abastecimiento no sólo de Bogotá, sino también de buena parte del país. Es una equivocación por ello la posición del Ministerio de Agricultura y el gobierno al decidir vender el 20% de sus acciones y apartarse de la central mayorista aduciendo que existen fenómenos de criminalidad, tráfico de drogas y armas.

Por el contrario, lo que podría hacer el gobierno es impulsar una regulación que trate de solucionar los grandes problemas de préstamos muy altos, especulación, arrendamiento de las bodegas, pues todos estos factores encarecen los productos. A pesar de estas circunstancias, el sistema funciona bastante bien y sería mucho mejor si se tomaran medidas efectivas, pues al eliminar el sistema de “vacunas” a los comerciantes y controlar los arrendamientos y los monopolios en las bodegas, los precios de los alimentos serían más económicos.

A su vez, es un error el rumbo del Plan de Abastecimiento de Bogotá de la administración de Gustavo Petro y los resultados negativos saltan a la vista. Sin ninguna evidencia empírica, proponen crear canales alternativos a los populares establecidos y en especial a Corabastos. Luego del intento fallido del burgomaestre de colocar en la junta directiva de la Central de Abastos a alguien de su cercanía, se planteó como una manera de solucionar problemas que sólo habitan en la cabeza de los planificadores, crear un paralelismo frente a Corabastos. Se dictaminó entonces la construcción de plataformas alternativas, creyendo que acabarían con el monopolio de la Central de Abastos, sin comprender que estas plataformas encarecen la comercialización. En el barrio Lucero se construyó el plan piloto y hoy se encuentra casi vacía, erigida como otro de los tantos elefantes blancos concebidos por nuestros gobernantes.

De todas formas se planean construir otros centros de acopio en otras zonas de

la ciudad, pero parece que la mentalidad es que al edificar un edificio de cemento y tener unos controladores, que terminan siendo los funcionarios de siempre, se modernizará un mercado arcaico e ineficiente y se acabará el problema.

Efectos colaterales

Existen también amenazas al campesinado en nuestro país. Uno de ellos muy en boga es la minería, aunque debe decirse que se ha exagerado en los alcances de la economía extractivista y encontramos aquí que el problema no depende de la explotación minera, sino en la necesidad de replantear esta práctica en Colombia principalmente en ecosistemas estratégicos para la seguridad alimentaria.

En la actualidad la minería nos muestra que el gobierno expide licencias de explotación de forma muy ligera y en muchas ocasiones de manera irresponsable. Por eso, para el bien del campesinado, es necesario replantear el modelo de regulación de la minería e inclusive resulta indispensable frenar las explotaciones en algunas zonas del país.

Se percibe, aun así, que existen muchas contradicciones, pues la minería genera riqueza y empleo. El problema de la minería es el impacto que genera, pues en las zonas rurales se produce una emigración de la mano de obra por la minería y de esta forma, como ya sucede en Cajamarca, llega a encarecer la recolección de productos como la arracacha, cuando nadie quiere trabajar en el campo por su baja remuneración.

Otro aspecto es el TLC. Colombia es un país muy integrado y las zonas que pueden llegar a desabastecerse de alimentos, y rápidamente los abastecen con otros productos de otros países. Aún los Tratados de Libre Comercio en la actualidad no afectan negativamente a la producción campesina; pero para el caso del maíz y de forma muy restringida con el arroz, pueden existir algunos impactos, pero seguramente no habrá una catástrofe como algunos plantean. 🐼

Colombia es un país muy integrado y las zonas que pueden llegar a desabastecerse de alimentos, y rápidamente los abastecen con otros productos de otros países.

Los retos de la soberanía alimentaria en Bogotá

Hernán Darío Correa¹

Cuando indagamos por la sostenibilidad de Bogotá tenemos sin duda primero que preguntarnos ¿qué es Bogotá?, y quiero destacar algunos elementos que nos permitan reconocer esta ciudad y para ello pongo a consideración cuatro planteamientos para relacionarlas con el tema de la sostenibilidad de la capital del país. Lo primero es que Bogotá es una construcción geográfica-histórica-social en un lugar privilegiado desde un punto de vista ambiental. No todas las ciudades se construyeron en este sentido y quienes levantaron las construcciones aprovecharon unas condiciones ambientales y aprovecharon esta situación privilegiada debido a tres elementos:

Bogotá está ubicada equidistante de los grandes biomas de Colombia: Amazonas, Orinoquia, el Pacífico e inclusive del Caribe, y obviamente de los Andes. Además, como segundo aspecto, está localizado en el lugar donde se vertebran los nacimientos de la mayoría de las grandes cuencas hidrográficas: Chingaza, ríos de la Orinoquia, Sumapaz y la Amazonia; y finalmente está en medio de grandes centros climáticos, en un solo día en Bogotá podemos encontrar cuatro estaciones, en la madrugada de cuatro grados bajo cero, pasa a veinticinco grados en el día.

El segundo punto, es que Bogotá se construyó como ciudad y se configuró en medio de dos grandes ciclos de violencia y



desarrollo. La historia colombiana ha sido tal y como lo han estudiado sociólogos e historiadores, una combinación particular entre violencia y desarrollo, generalmente despojos muy profundos en el campo van asociados a la globalización, y así por medio de estos desmadres, van configurándose los ordenamientos territoriales y Bogotá tiene un primer ciclo de crecimiento a partir de los años cincuenta en medio de la violencia de los cuarentas-cincuentas en todos los escenarios originarios de la conformación de Bogotá-Región central del país. El Sumapaz, el Tolima, Cundinamarca, y todo el corredor del Magdalena Medio, son los confines de la ciudad-región que vivieron estas implicaciones muy fuertes de violencia y que eso explica la dinámica poblacional que Bogotá deriva. El segundo ciclo de violencia y desarrollo empezó justo en los años noventa, y aún estamos en él. Es un ciclo que aún no ha terminado y de las configu-

¹ Subdirector del IPES - Instituto para la Economía Social - Alcaldía Mayor de Bogotá. C.e.: hdcorrae@yahoo.com



raciones de los ejes de esa nueva noción de acumulación de capital y desarrollo en Colombia, que ahora se le suma el Plan de Desarrollo Nacional con la minería, pero también de violencia que no cesa con todas esas complejidades del conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento, etc.

El tercer elemento, Bogotá está enclavada en una región de larga historia. El altiplano cundiboyacense en su configuración regional ya existía antes de la llegada de los conquistadores españoles, era todo un territorio de los muiscas, con unas lógicas de confederaciones y aldeas articuladas que intercambiaban productos y tenían correlaciones de servicios y comunicaciones. Ese eje, que hoy subsiste, ya existía antes de la constitución hispánica y aquí encontramos un tema de territorialidades de lugares campesinos que fundamentan el funcionamiento de la ciudad, pues le traen comida, le garantizan los servicios ambientales como el agua, le prestan servicio de distinto tipos. Esos territorios campesinos son adaptados a las demandas humanas de alimentos, un tema muy importante para entender la soberanía alimentaria.

El cuarto elemento, es que Bogotá es una ciudad autoconstruida, el 70% de las soluciones de vivienda de la ciudad a nivel histórico y hasta nuestros días, son soluciones de vivienda construidas por la propia gente. Es una ciudad informal, llamada así por los planificadores, una ciudad autoconstruida en barrios y localidades enteras. Tenemos a Ciudad Bolívar, una localidad con casi millón y medio de habitantes, construida en los años ochenta y con apenas una generación. Es ahí, en los sectores populares, donde se ha hecho la ciudad. Estos no han pensado solo en las viviendas, sino los espacios públicos, las vías, y han tenido que salir a pelear y exigir al Estado que traigan los servicios. El 87% de la población bogotana se ha encargado de autoconstruir la ciudad, es la gente que está inscrita en lo que llaman los desarrollistas, la economía informal. Ese 87% de la población tienen el 97.5% de las unidades productivas de la ciudad:

de las empresas, microempresas, empresas familiares, o las que llaman informales, que generan el 64% del empleo y el 60% de los ingresos en la ciudad, y eso está minimizado. Los llamados informales encarnan en sus formas reproductivas sociales, esa complejidad sociocultural de la región central del país y por citar un ejemplo, San Cristóbal Sur es una localidad de 650 mil personas con 270 barrios y cerca del 80% de su población es originaria de Boyacá. Sin estos elementos no podríamos explicarnos las potencialidades y problemas que conllevan la noción de sostenibilidad de la ciudad.

Como ciudad, Bogotá es la punta de un iceberg de una región que vertebró unos factores de ordenamiento territorial muy importantes que se han construido de manera formal, administrativa y política. Esta ciudad tiene un sistema regional de áreas protegidas muy interesante, que al menos formalmente en el concepto de la legislación, protege el corredor de paramos en torno el cual se abreva el ciclo del agua que abastece a Bogotá. Pero a la vez, Bogotá tiene esa complejidad regional pues se alimenta de un sistema muy diverso de agro ecosistemas campesinos e indígenas –de Boyacá, Cundinamarca, Tolima– que es lo que permite que exista una disponibilidad alimentaria plena. En Bogotá existen las condiciones para la soberanía y seguridad alimentaria, pues diariamente llegan 14 mil toneladas de comida, de todos los pisos térmicos y diversidades. Otra cosa es que ese 87.5% de la población, esa economía popular, no tiene acceso económico a los alimentos. Por eso tenemos un problema importante, que no debe considerarse de inseguridad alimentaria, constituido por mal nutrición e incluso algunos casos de desnutrición.

Hay una huella alimentaria que Bogotá marca, no simplemente en un sentido negativo de una huella que depreda. La sostenibilidad de Bogotá está dada en el mantenimiento de esas áreas protegidas, de los ecosistemas originarios, la sostenibilidad de Bogotá está dada en que se mantengan y se reproduzcan las relacio-



nes equilibradas entre campo ciudad. No hay destino posible para el campesinado que es quien gestiona los territorios, a veces por modelos inapropiados, pero también con una serie de desarrollos, sin la demanda de Bogotá. Sin esta demanda no hay garantías de justicia territorial, estabilidad para el campesinado y ahí hay un tema: la sustentabilidad, el equilibrio de intercambios y correlaciones entre ciudad y campo pueden garantizar la sostenibilidad. No es un retorno ideal romántico a unas estabildades de ecosistemas prístinos, sino más bien la reproducción de agro ecosistemas que pueden incluso mejorarse y también, la oportunidad de revitalizarse. Las recuperaciones naturales en las entrañas de Bogotá.

El otro factor de esa estructura que tiene el ordenamiento territorial en Bogotá, es que hay grandes agro ecosistemas en la región, con una estructura económica principal denotada en su plan de ordenamiento territorial y por lo menos se ha convertido en un referente importante de las discusiones en los planes de desarrollo. Hay alrededor de 300 municipios que traen a Bogotá comida, 14 mil toneladas diarias, de las cuales siete mil se quedan en la ciudad y siete mil se reciclan a otras regiones. Ahí existen unas dinámicas de intercambios con profundas injusticias territoriales. Bogotá es una ciudad que integra un mercado interno altísimo que como Región es prácticamente el 45% de la economía colombiana, y solo entre Bogotá Cundinamarca un 31%. Este mercado interno lo están queriendo desvertebrar. Si en el primer ciclo de violencia y desarrollo se generó la industrialización, en este se prepara la desindustrialización, el desmonte del mercado interno, que aun en la precariedad de su situación, le da vida, empleos e ingresos al 85% de la población bogotana, un poco más de seis millones de personas.



El plan de desarrollo de Bogotá Humana

El plan de desarrollo de Bogotá Humana se propone transformar el modelo de ciudad que nos han venido montando y me refiero con esto a que los ciudadanos solo hemos participado eligiendo, e inclusive a veces ni siquiera en esta lógica de las promesas electorales se hace en la inversión pública. En las lógicas del desarrollo, el neoliberalismo como filosofía plantea acabar con el Estado y da intromisión a un número de poder en los tecnócratas, en planeación y conlleva a unos instrumentos de poder que son los contratos. Tenemos en Bogotá un plan de desarrollo que es un instrumento de política pública por cuatro años, un plan de ordenamiento territorial de diez años y unos planes maestros de inversión de veinte años. La ciudadanía elige para un plan de desarrollo de cuatro años, y cuando se instauro, se crea una maraña de contratos, la privatización de la política pública de veinte años de duración. O sea que decimos misa cuando elegimos, esa es la democracia colombiana, porque nos sustrajeron la decisión profunda de la orientación del desarrollo bajo una idea civilizatoria.

Ese modelo de gestión pública está asociado a un modelo de ciudad para la competitividad, la exportación, para el aprovechamiento del mercado interno y



acumulación de capital y no para el bienestar de los habitantes. El modelo está diseñado para un crecimiento de la riqueza y de PIB que a cambio genera escombros, basura y además conlleva a cementar los suelos y destruir completamente los ecosistemas, pues es una lógica altamente urbanizadora del campo. Los instrumentos de planeación a estas normas del campo son instrumentos de desarrollo urbano. En la ley 388, que inspiró a los POTs de todos los municipios de Colombia el modelo de desarrollo urbano se extrapoló y es un desarrollo rural para la economía. Si a eso le sumamos el modelo de desarrollo nacional que es un modelo exportador y relictivizador de la economía, nos encontramos frente a un crimen, no solo ecológico ambiental, un crimen histórico y social, en un país con la megabiodiversidad que tiene Colombia, que como lo ha enseñado el profesor Julio Carrizosa es tan complejo y tan rica, como frágil en términos de la responsabilidad de procurar que la naturaleza no se afecten en sus sistemas reproductivos, ciclos de las aguas y ecosistemas.

Este modelo reprimarizador comete el crimen no solo de ignorar esa biodiversidad sino de poner una locomotora encima, porque es la metáfora que propone el plan de desarrollo, un modelo de ciudad hilado al modelo de desarrollo conspirando en la construcción histórica que se fundamenta en la soberanía alimentaria y la supervivencia del campesinado que le queda a Colombia. Hay unos nichos muy concretos, Boyacá, Cundinamarca, unas zonas de Nariño, Tolima, unas pocas zonas de la Costa. Se acabó el campesinado y este plan de paz que estamos viviendo es una de las esperanzas que tenemos, no porque de ahí vengan las grandes soluciones, sino porque es un factor de apertura en la implementación en el desarrollo agrario.

Los urbanos tenemos la responsabilidad de complementar esas perspectivas de paz con propuestas de apertura para el campesinado y escenarios en la ciudad. El gobierno de Santos está hablando de una reforma agraria y se puso de acuerdo

rápido con las FARC, pero a la vez está vendiendo los Corabastos y plazas de mercado, a dónde van a llegar ese campesinado, que supongamos, ojalá vuelva a producir alimentos, quedará en manos de las grandes superficies. Están acabando con los tenderos, las plazas, queriendo aniquilar los sistemas populares, que son tan urbanos como campesinos.



Bogotá Humana en su plan de desarrollo se propone transformar el modelo de ciudad y el modelo de desarrollo, marcándole a Colombia una impronta desde la magnitud de esta región-ciudad, enunciando que si desde aquí se recupera la economía popular, se recomponen las articulaciones con el campesinado, se genera una lógica de desarrollo urbano, recuperamos elementos de sostenibilidad, podremos marcar nacionalmente unos hitos de transformación. Hay unos sectores, grupos económicos que en el sentido literal, venden a la mamá a causa del coroplacismo, de la acumulación y los negocios, al que impusieron por muchos años la lógica del “todo vale”, “me alío con quien sea para hacer más plata”, del cinismo. El *bufet* de abogados “neoyorquinos” Brigard y Urrutia de Bogotá, robando tierras en el Vichada. Pensamos que eran los narcos y los mafiosos de Antioquia, no, en



Bogotá unas personas se encuentran creyendo como robar el país, por eso esta nación se deslegitimó mundialmente por el desfago y robo de tierra.



Cambiar esos modelos supone entonces una lucha política en la que estamos. Hay quien dice que al gobierno de Bogotá le quedan dos meses, no soy defensor a Petro. Estoy en el gobierno convencido por unas ideas que están en el plan de desarrollo y que ayudé a construir durante estos últimos diez años. Porque hemos luchado varios por esas ideas y en un romance de pasión, proponemos mirar la economía popular, reconocer las economías campesinas. El eje es no más depredación, que esta ciudad haga cosas para adaptar las críticas al desarrollo, al cambio climático, que garanticemos los ciclos del agua. Esa deformación mediática de los grupos económicos que ya compraron los periódicos, como El Tiempo, y dicen que Bogotá no le quiere vender agua a los municipios de la sabana, cuando el debate de la venta de agua en bloque es lo contrario, los acueductos cercanos a Bogotá la idea es que tengan agua en sus cascos urbanos.

En las zonas rurales de estos municipios hay leyes nacionales que tiene que abreviar el agua con lógicas rurales y piden a Bogotá se les lleve el agua en bloque y en muchos casos ni siquiera para los núcleos urbanos, sino para los urbanizadores de

las zonas rurales de estos municipios que están cementando la sabana. Cuando en la sabana hay suelos orgánicos de ocho metros de grosor, ¿dónde en otras partes del mundo encontramos estas capas vegetales? y quieren poner cemento, no es dejar de entregarles agua a los municipios, sino a los urbanizadores piratas que no pueden seguir atacando ambientalmente, así tengan todos los estipendios legales.

¿Qué hace una de las mejores universidades de la ciudad construida en las rondas del río Bogotá?, tuvieron que traer unos holandeses para construir unos diques para que el adefesio de ocupación de la Sabana no se inundara más y se debilitara, echaron para abajo la dinámica del río, porque están en la parte norte y el río viene hacia el sur, para abajo. ¿Qué quiere decir? Lo desviaron a los barrios de ese 87% de la población del borde humano occidental de Bogotá que es la zona popular y ese es el tipo de desarrollo que nos quieren plantear.

Por eso no más privatización. Debemos defender lo público, recomponer los espacios íntimos, los bienes de uso común, recomponer esa noción de pacto social basado en unos bienes básicos y unas responsabilidades en el tema de la sostenibilidad. Hoy la tuerca que más aprieta al campesinado es la minería y tenemos un debate abierto, el gobierno anterior y este, están feriendo el campo, el ciclo del agua y todos los factores que históricamente se han construido, lo están tirando por la borda por una ilusoria idea de divisas que le llegan al país y así entregamos a la minería inclusive los páramos. ¿Hasta dónde llega el páramo nos preguntamos a sesenta años de construcción de pensamiento ambiental en Colombia? El tema de la minería es otra forma de violencia, otra forma de desarrollo que expulsa el campesinado colombiano y debemos tocar las alarmas, tenemos elementos de seguridad y soberanía alimentaria, pero estas condiciones se encuentran en riesgo y podremos en unos años decir que matamos a la gallina que daba huevos de oro. 🐔



¿Llegó la guerra del agua a la Sabana de Bogotá?

Rafael Colmenares¹

Hace algunos años, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismael Sarageldin, lanzó una frase que con el tiempo se haría en famosa: “Las guerras del siglo XXI serán por el agua”. ¿Le ha llegado el turno a la Sabana de Bogotá?

Si bien es cierto que la EAAB utiliza solo la mitad del agua que potabiliza para atender las necesidades de Bogotá y diez de los municipios contiguos a esta, no lo es menos que esta aparente abundancia puede convertirse en dramática escasez. La calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento de Tibitoc y Wiesner es cada vez peor, lo cual determinó que la primera estuviera cerrada, en suma, durante cien días en el 2012 y la segunda durante sesenta. Esto ha implicado que tengan que invertirse mayores cantidades de depurantes químicos lo cual aumenta los costos de potabilización.

Lo anterior se debe al asentamiento desordenado de viviendas campestres, empresas y diversas actividades cuyos vertimientos se realizan en los ríos Bogotá o Teusacá, cuando no contaminan los acuíferos mediante la disposición inadecuada de las excretas. La Sabana, en particular la zona al norte de Bogotá, presenta desde hace varios años un desbalance entre el



agua que recibe por infiltración y la que se le extrae mediante pozos que en buena parte operan sin permiso de la CAR, es decir son ilegales.

La situación se ha visto agravada, en los últimos años, al amparo de la autorización dada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para el establecimiento de la denominada “Vivienda Campestre”², que puede operar disponiendo sus aguas residuales en pozos sépticos. Esta modalidad atenta contra el principio de que las aguas servidas deben ser tratadas antes de su vertimiento al medio natural.

Al tiempo, grandes industrias productoras de cerveza y gaseosas se han instala-

¹ Miembro de Unión Libre Ambiental. C.e.: rafaelcolmenaresf@yahoo.es

² Este tipo de vivienda fue autorizada mediante el Decreto 097 de 2006.



do en el entorno sabanero demandando ingentes cantidades de agua y produciendo los consiguientes vertimientos que no siempre son tratados adecuadamente, como ha podido constatarse durante el año pasado por la EAAB. La minería extractora de arena y otros materiales de construcción implica igualmente un gran impacto claramente visible en los Cerros Orientales de la ciudad y en los municipios circunvecinos alterando el ciclo hidrológico y deteriorando gravemente el paisaje, además de generar riesgos por deslizamientos y desestabilización de las estructuras geológicas.



Pareciera que el tipo de desarrollo que se ha venido impulsando en Bogotá y la Sabana se hubiera propuesto, paradójicamente, contravenir el mandato del artículo 61 de la ley ambiental³ según el cual la sabana de Bogotá es de “interés ecológico nacional” y su destinación prioritaria debe ser “agropecuaria y forestal”. Entonces, ¿Para qué sirve el ordenamiento territorial? Podrá preguntarse ante el panorama descrito. Si se trata de una simple adecuación y convalidación de las actuales formas de ocupación del territorio, que son el principal factor de vulnerabilidad para que el riesgo se convierta en desastre, nos po-

dríamos ahorrar el complejo proceso que implica la expedición y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Una rápida mirada a los perímetros urbanos de los municipios aledaños a Bogotá muestra que estos no son definidos con base en las características geológicas, edafológicas, hidrológicas y paisajísticas del territorio sino que se acomodan a los planes de expansión urbana resultantes del fabuloso negocio de convertir las tierras de rurales en urbanizables, o en zonas industriales.

La huella ecológica, alimentaria e hídrica de Bogotá

Lo anterior ha determinado que la capital de la república y los cascos urbanos de los municipios más próximos dependan para su alimentación de suministros traídos de comarcas cada vez más alejadas y comporta igualmente el desplazamiento, por la dinámica económica del modelo, de la población campesina de la Sabana de Bogotá. Es decir a la vulnerabilidad ambiental se añade la alimentaria y la descomposición del tejido social.

Esto nos introduce en el concepto de “huella ecológica”, es decir pasamos del impacto que la ciudad genera en su entorno más inmediato al que se extiende más allá de sus fronteras. La “huella ecológica” es un indicador formulado por Wackernagel y Rees, en la segunda mitad de los años noventa y representa el área de tierra productiva y de ecosistemas acuáticos requeridos, para generar los recursos usados y asimilar los desperdicios producidos por una cierta población, para un específico nivel material de vida. La huella ecológica urbana refiere la noción anterior a una población urbana determinada.

La Contraloría Distrital realizó un ejercicio de medición de la huella ecológica de Bogotá hasta el año 2000 y concluyó que la huella ecológica de Bogotá era de 2.85 hectáreas *per capita*. La huella ecológica de Bogotá es ya elevada pues supera en el 23.5% a la huella ecológica de la huma-

³ Véase el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.



nidad calculada por Wackernagel en 1997 y en el 67% a la estimada para Colombia por el mismo autor.

Un aspecto esencial e ilustrativo de todo lo anterior es la denominada “huella alimentaria” es decir la cantidad de tierra involucrada en la producción de los alimentos que la ciudad consume. Según el estudio de la Contraloría esta asciende a 4.4 millones de hectáreas, considerando una población de 6.4 millones de habitantes y 55 productos.

El investigador Bladimir Rodríguez afinó los cálculos⁴ y basándose únicamente en los productos que ingresaron a Corabastos, en 2002, estableció que estos generaron una huella ecológica de 227 mil hectáreas de las cuales 117 mil se ubican en Cundinamarca. Es igualmente interesante en el estudio de Rodríguez que la superficie dedicada al cultivo de hortalizas (26%) sumada a la de tubérculos y plátano (15%) representa un poco menos de la mitad del total impactado. El estudio concluye que el 55% del total de alimentos que ingresan a Corabastos es de origen campesino, producidos en pequeñas y medianas propiedades.

A partir de la identificación y la cuantificación de la huella alimentaria sería posible y necesario determinar la huella hídrica es decir la cantidad de agua incorporada en la producción de los alimentos que actualmente no se considera como consumida por la urbe. Igualmente se deben explorar los impactos generados por los vertimientos de residuos químicos a las fuentes de agua y a los suelos, o el aumento del arrastre de los suelos por deforestación y potrerización producto de la ampliación de la frontera agropecuaria.

Dos factores relativamente nuevos contribuyen a la vulnerabilidad de la ciudad en el aspecto alimentario, que es uno de los fundamentales para su sostenibilidad.

El primero es la globalización neoliberal y al respecto tanto el estudio de la Contraloría como el de Bladimir Rodríguez, hacen preocupantes advertencias. Este último, luego de evidenciar el peso de la economía campesina en el abastecimiento alimentario de la ciudad, señala: “Desafortunadamente tanto las nuevas políticas económicas y acuerdos comerciales internacionales (ALCA, TLC) junto con el desplazamiento forzado como un proceso de reorganización de la tenencia de la tierra dentro del territorio nacional, son factores que obstaculizan y restringen tanto la permanencia como la expansión de estas economías”⁵.

Otro tanto pronostica el estudio de la Contraloría General en cuanto a la profundización de la huella ecológica: “En síntesis un modelo productivo y territorial en la región orientado exclusivamente a participar en los procesos de globalización económica llevará a inducir un creciente impacto ambiental, generará menos empleo asalariado o dependiente, incentivará la profundización en los desequilibrios regionales y en las desigualdades sociales, ampliando la huella ecológica”.

El segundo es el cambio climático que amenaza con generar una inestabilidad peligrosa para la agricultura y cuyos efectos en la región han comenzado a ser analizados en las dos comunicaciones sobre el asunto elaboradas por el IDEAM.

¿Qué hay detrás de la venta de agua en bloque?

La expansión de Bogotá sobre la sabana requiere, sin lugar a dudas, de ingentes cantidades de agua. Por ello quienes se benefician de ella, y quienes la prohijan desde los altos cargos del Estado, pusieron el grito en el cielo ante la decisión de la Alcaldía de Bogotá y de la gerencia de la EAAB, anunciada el año pasado, de no continuar facilitándolo mediante la denominada “venta de agua en bloque”, que

El 55% del total de alimentos que ingresan a Corabastos es de origen campesino, producidos en pequeñas y medianas propiedades.

⁴ Véase “Nuestro pan de cada día”, texto publicado en “Región, ciudad y áreas rotegadas”, Fescol - Ecofondo, 2005.

⁵ *Ibidem*, pág. 243.



consiste en transferir a los operadores de los municipios vecinos de grandes volúmenes de agua que estos comercializan a precios superiores a los que rigen para Bogotá. Esta decisión ha sido cuestionada haciendo creer a la ciudadanía que se ha suspendido el suministro de agua a los municipios, lo cual contraviene la evidencia de que estos continúan disponiendo del líquido vital.

Se ha invocado igualmente el derecho humano al agua, del cual fueron recientes opositores quienes ahora se acogen a él, para sustentar que está por encima de todo intento de ordenamiento y racionalización del uso del suelo y en general del territorio. Nada más contrario al derecho humano al agua pues un ordenamiento territorial que garantice la sostenibilidad del agua y el territorio es precisamente la base para que aquel derecho pueda ser ejercido por las generaciones futuras, que también lo tienen, como se desprende de la definición consagrada en la ley ambiental⁶.

El contexto anterior permite apreciar en toda su dimensión los anuncios del Ministro de Vivienda y el Gobernador de Cundinamarca, según los cuales demandarán a la EAAB por su negativa a continuar vendiendo “agua en bloque” a los municipios de la Sabana, más allá de los perímetros urbanos. Anuncian también que solicitarán una concesión de aguas a la CAR para construir un acueducto regional que independice a la región del yugo de la EAAB⁷.

¿Será que la guerra es por el agua o por la defensa de los

grandes negocios que ponen en riesgo a la región, pero enriquecen a unos pocos y para los cuales el agua es decisiva? El trasfondo es sin embargo la insostenibilidad del modelo de ocupación del territorio y de construcción de ciudad que se ha desarrollado en beneficio de los urbanizadores, de los especuladores con el suelo, de los vendedores de servicios públicos, de los transportadores, de los monopolios transnacionales y nacionales y de un sinnúmero de redes clientelares, no exentas de corrupción, que se articulan alrededor de los anteriores y cuyos intereses son agenciados por diversos actores políticos.

Bogotá ha crecido y la sabana se ha urbanizado en forma acelerada. Hoy en día la denominada sabana centro concentra el 20% de la población del país. Este proceso de concentración poblacional y de actividades económicas se explica por diversos factores que es imposible analizar en este artículo pero es indudable que el mismo ha sido aprovechado por los urbanizadores legales e ilegales para realizar un excelente negocio de venta de suelo



Inundaciones en Bogotá.

⁶ Según el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.

⁷ La nueva administración de la EAAB, a partir de marzo del presente año, ha iniciado un proceso de concertación con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos, a fin de llegar a un acuerdo sobre la venta de agua en bloque, en el marco de un consenso sobre el ordenamiento regional. Es de esperar que esta necesaria política de “distensión”, no conduzca a dejar las cosas como estuvieron antes de la aguda polémica del año pasado.



y vivienda. Para ello ha sido incesante la conversión de las áreas rurales y suburbanas en suelo urbanizable. No en vano el Concejo Distrital ha aprobado varios acuerdos de legalización de barrios informales y ha ampliado también varias veces el perímetro urbano de la ciudad.

El suministro de agua potable ha sido a la vez condición y estimulante del anterior proceso. Tempranamente, varios acuerdos del Concejo Distrital autorizaron a la EAAB la venta de agua en bloque, práctica que continuó a pesar de haber sido prohibida en el acuerdo 6 de 1990. A mediados de esa década dicha actividad, contraria a la ley, avanzó con gran ímpetu y se integró sin dificultad al esquema de mercantilización y privatización del agua instaurado en la Ley 142 de 1994, bajo la mirada complaciente de la Comisión Reguladora de Agua Potable –CRA–⁸. Hoy en día varios de los principales compradores de agua en bloque a la EAAB son empresas privadas o mixtas de servicios públicos que abastecen a las urbanizaciones campestres que proliferan en los municipios vecinos a Bogotá y desde luego a la población de los cascos urbanos.

El modelo depredador se refleja en el río Bogotá

Los requerimientos de la expansión urbana han ido moldeando otros factores de la tragedia que se condensa en la actual situación del río Bogotá. Ya desde los años cincuenta del siglo pasado se decidió aprovechar el agua del río para generar energía eléctrica, y con el objeto de garantizar los volúmenes necesarios en épocas de estío se construyó el embalse de El Muña. En la medida en que las aguas del río se fueron contaminando aquel reservorio que fue escenario de deportes náuticos se fue convirtiendo en un mar muerto de desechos urbanos de todo tipo. Ante tamaño desastre ambiental, que incluye la tragedia humana de los habitantes del municipio de Sibaté,

sometidos a insoportables olores, emanaciones que emponzoñan el aire y a una inclemente plaga de mosquitos, no se ha pensado en ponerle fin a semejante pesadilla sino que por el contrario se construyó una segunda cadena de generación de energía eléctrica, la cadena Paraíso - La Guaca (Pagua), cuando ya las aguas que llegaban al embalse estaban altamente contaminadas. Hoy en día el llamado plan de recuperación del río Bogotá incluye, a costa de todos los bogotanos, que lo pagaremos en la tarifa de alcantarillado, la construcción de una costosa estación elevadora que permita continuar la generación de energía eléctrica en la mencionada cadena Paraíso-La Guaca, como si alguien se hubiera propuesto darle el nombre mas contradictorio a la oscura realidad generada por los intereses del “desarrollo”, hoy agenciados no solo por el Distrito Capital sino por la multinacional italiana Entesa que adquirió las acciones de la española Endesa en Emgesa.

La urbanización desbordada de Bogotá y sus alrededores han ido arrasando a su paso los humedales y sepultando bajo el cemento y el pavimento los afluentes del río. Los cerros orientales de Bogotá, donde se inicia el viaje del agua hacia el río han sido sometidos a diversos procesos destructivos: urbanización legal e ilegal, deforestación, prácticas de artillería y explotación intensiva de arena y otros materiales de construcción a cargo de las transnacionales Holcim y Cemex y la Fundación San Antonio de la Curia Arquidicesana. Otro tanto viene ocurriendo con los sistemas montañosos que circundan la cuenca en jurisdicción de los municipios vecinos. Las heridas en los cerros están a la vista.

La creciente desigualdad social se expresa espacialmente: en las zonas más vulnerables se aglomeran los pobres, víctimas de los urbanizadores piratas, se someten a las peores condiciones con tal de tener una precaria vivienda. Luego toda la ciu-

En Colombia, hay diez millones de personas que no acceden al agua potable.

⁸ Para dar cubrimiento legal a la venta de agua en bloque la CRA dictó el año pasado la resolución 608, que la autoriza. Esta resolución es abiertamente ilegal pues la operación de venta de agua en bloque no figura en la lista taxativa de actividades autorizadas por la Ley 142 de 1994. La resolución fue demandada por la EAAB ante la justicia contencioso-administrativa.



dad paga los costos de dotar de servicios públicos, particularmente de agua potable, zonas de difícil acceso. La mercantilización y privatización de este servicio agrava su situación pues el crecimiento de la tarifa ha sido exponencial en los últimos años y un promedio de 300.000 usuarios ven suspendido el servicio por falta de pago. De ellos 70.000 han perdido definitivamente la conexión a la red.

Por otra parte el modelo se torna cada vez más insostenible. Así lo pusieron de presente las inundaciones de los últimos dos años, que son la demostración trágica, en particular para las clases populares y medias, de la insostenibilidad del tipo de ciudad actual.

El agua fluye como un torrente hacia el río y las calles que bajan de los cerros se convierten en canales. Otras ingentes cantidades del líquido provienen de la cuenca alta y de los municipios que anteceden a Bogotá en el sentido de la corriente del río.

Cuando las aguas llegan a las compuertas de Alicachín construidas para remansar el agua y permitir su bombeo al Embalse del Muña, se encuentran con estructuras que detienen su flujo así las mencionadas compuertas estén abiertas⁹. Fueron construidas para garantizar un volumen de agua suficiente para la operación de las bombas. Deforestación, urbanización e intereses energéticos confluyen así como generadores de vulnerabilidades que convierten el riesgo en desastre.

Lo que menos importa es el río y la gente más pobre. Aquel es visto como cloaca, como proveedor de agua para la generación eléctrica, como fuente para riego (a pesar de la contaminación de sus aguas) como recurso para cualquier actividad económica que pueda producir ganan-

cias. El río ha dejado de serlo, ha sido sepultado por los oscuros intereses que imponen el tipo de sociedad, y de Estado, que oscurece sus aguas y se refleja sin brillo en ellas.

A estas alturas la construcción de costosas megaplantas de tratamiento parece inevitable. En parte porque la desaceleración del crecimiento urbano, cuya primera fase sería la no expansión urbana de Bogotá y los municipios aledaños, tardará e producir sus efectos y entre tanto es necesario tratar los ingentes volúmenes de aguas residuales que la ciudad genera. En parte porque costosas inversiones, como los interceptores, ya fueron realizadas.

La triple crisis del agua

En reciente documento la conocida activista de la "Justicia del agua", Maude Barlow, identifica tres crisis del agua: deterioro de los ecosistemas y disminución del agua dulce; acceso desigual al agua y privatización y mercantilización del agua.

La primera se puede ejemplificar con hechos como la contaminación de los sistemas hídricos, donde cada día dos millones de toneladas de aguas cloacales y desechos industriales, el equivalente al peso de toda la población humana, son vertidos.

En consecuencia disminuye la cantidad de agua dulce disponible, frente a una demanda creciente que según el Banco Mundial superará en un 40% a la oferta en 2030¹⁰.

Para ilustrar la segunda basta decir que un niño nacido en el primer mundo consume entre 30 y 50 veces más agua que uno en el tercer mundo. Enfrentando una escasez creciente de agua dulce disponible la

⁹ Es cierto que entre las causas mediatas de las inundaciones. la deforestación y urbanización de la cuenca alta del río Bogotá figuran en primer lugar. Hubo, sin embargo, causas inmediatas como el manejo de embalses de la Sabana en función de la generación de energía eléctrica. Este manejo está determinado por los intereses de Emgesa que mantiene niveles altos de agua en el río para posibilitar su bombeo al Muña. Una consecuencia poco conocida fue el ingreso de aguas contaminadas del río Bogotá al Embalse de Tominé el cual quedó contaminado.

¹⁰ La revista Nature informa que el 80% de la población humana vive en zonas en donde las aguas de los ríos están muy amenazadas. (Asit Biswas, Water Pollution expert derides UN Sanitation Claims, The Guardian, 26-04-2010).



población pobre se encuentra discriminada y consume menos agua que la de los países ricos.

La tercera de las crisis arriba mencionadas, obedece a las políticas del Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua que han promovido la privatización y mercantilización de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, acentuando la desigualdad y poniéndole precio de mercado al agua. Esta política, como señala Barlow, impidió por mucho tiempo que se reconociera el derecho humano al agua.

En Colombia, recordemos, hay diez millones de personas que no acceden al agua potable. Sin contar con quienes ven suspendido el servicio por no poder pagar las altas tarifas que ha implicado la privatización y mercantilización de este.

Una de las políticas impulsadas por la actual Alcaldía de Bogotá y la Administración de la EAAB, como respuesta a

la movilización social y en particular a la iniciativa del Referendo por el Derecho Humano al Agua, fue hacer efectivo, para los estratos uno y dos, el mínimo vital gratuito de agua.

Otra medida fundamental tomada por la actual administración ha sido la denominada “retoma”, a partir del primero de enero del presente año de las funciones delegadas a empresas privadas¹¹. Estas tenían a su cargo la medición del consumo de agua, la correspondiente facturación y el mantenimiento de las redes secundarias del acueducto en tres de las cinco zonas en que se divide la ciudad para estos efectos.

La decisión anterior se tomó no solo en desarrollo de la política de fortalecimiento de lo público, bandera del movimiento social y sindical acogida por la Administración, sino con base en un estudio que demostró los elevados costos y la notable ineficiencia¹² del sistema de “tercerización” plasmado en los denominados “contratos



¹¹ Se trata de las empresas Aguazul, Proactiva y hasta hace dieciocho meses, Aguas Capital de la familia Nule, que debido a los escándalos de corrupción entregó la zona 1 (Suba y Usaquén), la más lucrativa de la ciudad, a Aguazul.

¹² Los contratos especiales de gestión tenían como objetivo disminuir el índice de agua no contabilizada –IANC–, es decir el agua que circula por las tuberías pero no se puede cobrar pues se pierde por fugas o por consumo fraudulento. Dicho índice estaba en el 36% en 2002. Los gestores privados no solo no lo disminuyeron sino que incluso aumentó. En efecto, en los dos primeros años de su “gestión” alcanzó el 40% y a Junio de 2012, se encontraba en el 37,98%. Entre tanto en las dos zonas en las que el



especiales de gestión”, frente a los cuales se produjo la mencionada “retoma”.

Las anteriores medidas no se consolidarán e incluso podrían revertirse si no son rodeadas e impulsadas por el movimiento social, pues desafían importantes intereses y núcleos estructurales del modelo neoliberal. Hasta ahora hay un notable déficit en la participación de dicho movimiento y solo el sindicato de la EAAB aparece como soporte de las mismas a este nivel.

La sabana de Bogotá y la indispensable dimensión regional

Todo lo anterior, sin embargo, tampoco será duradero ni sostenible si no se trabaja en la restauración y preservación del ciclo hidrológico. Este aspecto es fundamental para la “justicia del agua”.

En el caso de la sabana de Bogotá reviste particular importancia pues se trata de una cuenca cerrada articulada en torno al río Bogotá que no cuenta con agua suficiente para atender las necesidades de la numerosa población asentada en ella y concentrada fuertemente en el perímetro urbano del Distrito Capital.

El agua que actualmente se consume en Bogotá buena parte de la región es “importada” de la cuenca del Orinoco, a través del sistema Chingaza.

En la dirección anterior el Plan de Desarrollo de Bogotá, adoptado mediante el decreto 489 de 2012 se propone, en el segundo de sus ejes, enfrentar el cambio climático y ordenar el territorio alrededor del agua.

Se utiliza el confuso concepto de “gobernanza del agua”, anotando sin embargo

mantenimiento de las redes secundarias quedó a cargo directo de la EAAB, se presentó una leve mejoría que no siendo un gran logro desnuda la supuesta eficiencia de la gestión privada. En ellas el IANC se redujo al 35,91%, a Junio de 2012. La conclusión de CEFINCO es lapidaria en este punto: “El gran fracaso se refiere a una gran meta: el mejoramiento del IANC, lo que no se logró en los nueve y medio años que lleva el modelo”.

¹³ Véase el artículo 24 del Decreto 489 de 2012.

¹⁴ En este sentido es notable el esfuerzo mancomunado de organizaciones sociales, la EAAB y las Secretarías de Planeación y Ambiente en la organización de las mesas ambientales en varios municipios de la Sabana. Proceso que confluyó en el Foro realizado en el mes de Diciembre pasado.

que esta: “... partirá de considerar una visión integral de cuenca para el río Bogotá, sus afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema que integra el agua superficial, freática y subterránea, el clima y los demás sistemas que conforman su ciclo”¹³.

El concepto, en el Plan de Desarrollo, incluye aspectos como una nueva cultura alrededor del agua y una nueva relación de la ciudadanía con el Estado.

Las anteriores perspectivas deben ser desarrolladas pasando de los enunciados a las acciones para lo cual será indispensable el concurso del movimiento social.

Lamentablemente este movimiento le ha faltado convocatoria desde la administración distrital, ni siquiera está suficientemente informado sobre las medidas y planes adoptados y tampoco se autoconvoca, pareciendo no entender que las medidas adoptadas son ante todo el resultado de sus luchas de muchos años¹⁴.

La visión que hasta ahora ha proyectado la actual administración distrital contrasta con la imperante en la gran mayoría de los municipios sabaneros, con notables excepciones, entre las que se podrían contar Soacha, Mosquera y Sopó.

Predomina en gran parte de la región una visión desarrollista que pretende el crecimiento económico y el fortalecimiento de los fiscos municipales a partir de una urbanización desahogada o de la instalación de complejos industriales y agroindustriales.

La ocupación del territorio de la Cuenca Alta del Río Bogotá supone, por el con-



trario, atender a las características ecológicas que le son propias, desechar las actividades que se contraponen a ellas, adelantar procesos de transformación siguiendo su lógica. Para ello es necesario emprender, sin dilación, la construcción de un Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial¹⁵ que debe ser precedido de un diálogo regional.

De manera constructiva es necesario sentar a la mesa de conversaciones a todas las posiciones y confrontar de manera directa pero respetuosa las distintas visiones, profundizando sus alcances y supuestos.

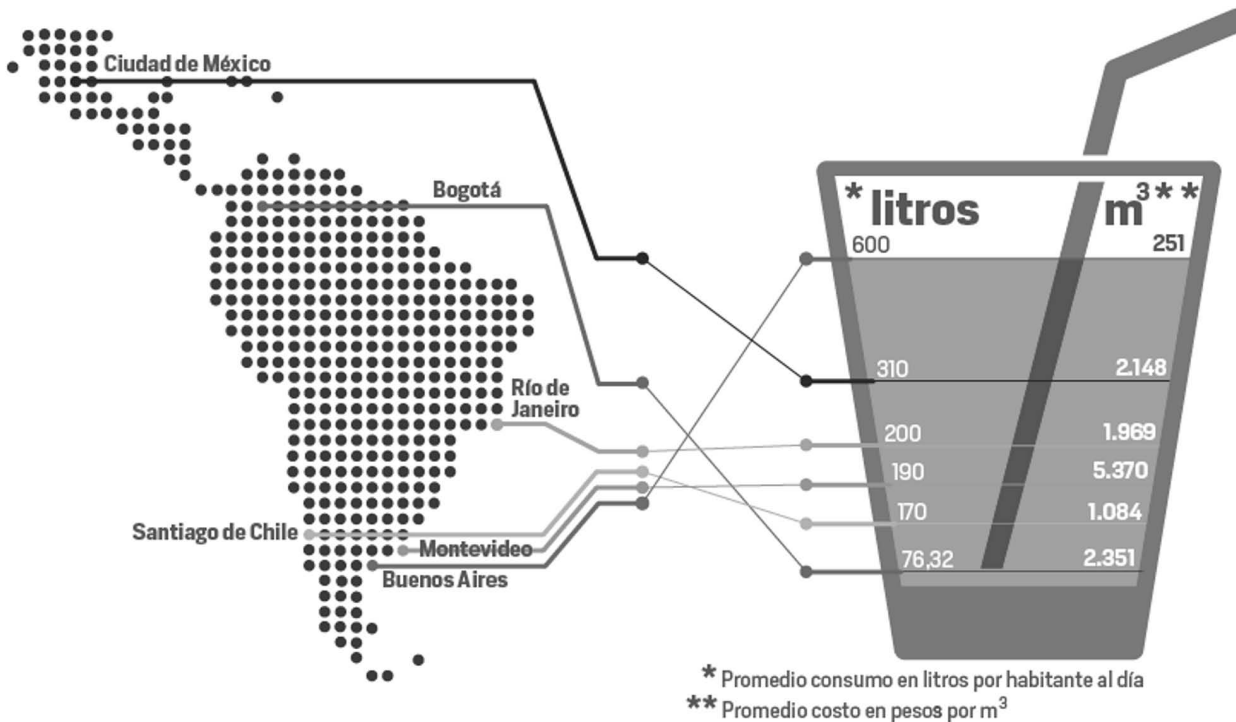
Obviamente más que una conciliación ecléctica en la cual se terminen imponiendo los intereses de urbanizadores, industriales o agronegociantes, la oportunidad de escudriñar a fondo las alternativas, que

indudablemente existen, al actual modelo depredador.

Lo que hay que gobernar no es el agua, sino las actividades que la sociedad realiza en el territorio.

El agua está gobernada por la lógica de la naturaleza a la cual ella pertenece. La cultura que es la forma como los seres humanos nos adaptamos o desadaptamos a la lógica ecosistémica y que comprende las formas de producir, la organización social y política y el mundo de lo simbólico, es el campo donde debemos construir una nueva forma de vivir ambientalmente sostenible.

No gobernemos el agua, construyamos una nueva sociedad. 🐘



¹⁵ Para ello hay insumos muy importantes en los trabajos de los profesores Thomas Van Der Hammen, Julio Carrizosa y Alberto Mendoza.

Los canales de comercialización y la economía campesina

Familia de la Tierra¹

El presente artículo pretende esbozar el proceso de comercialización de productos ecológicos de la economía campesina e indígena en la ciudad de Bogotá a través de la experiencia de Familia de la Tierra, una red de organizaciones productores de alimentos ecológicos que dinamiza los mercados de estos productos en la ciudad y que ha venido posicionando un canal de comercialización en colaboración con instituciones públicas distritales, organizaciones sociales, profesionales, estudiantes y activistas de diversos procesos sociales para incidir en la diversificación de la economía campesina, de la pequeña producción ecológica y de la sostenibilidad ambiental y social de los emprendimientos productivos.

En la primera parte del presente artículo se pretende mostrar la correlación entre los precios del petróleo y el de los alimentos, esto para evidenciar la necesidad de implementar programas y estímulos económicos a la pequeña producción ecológica campesina y el desarrollo de iniciativas de comercio local de bajo consumo de energía. Luego de esto se muestra la necesidad de información por parte de las organizaciones productoras para poder ajustar los costos de su producción y las utilidades necesarias para su sostenibilidad así como para dimensionar la demanda potencial y real del mercado. En la tercera parte se presentan datos técnicos de la experiencia en los canales de comercialización implementados



en Bogotá durante un periodo de cerca de tres años. Finalmente, se presentan algunas de las iniciativas necesarias para el posicionamiento y la consolidación de diferentes modelos de organización social y económica que permita que las familias campesinas y organizaciones sociales productoras puedan mantener la diversidad de la cultura campesina, manteniéndose

¹ Oscar Nieto C.e: familiadelatierra@gmail.com



en la tierra y produciendo de manera ecológica. Esperamos que este artículo contribuya a generar más procesos de comercialización local y de organización comunitaria.

Los flujos económicos asociados al sistema agroalimentario global

El sistema productivo alimentario se encuentra en un escenario de doble amenaza proveniente de una escasez de energía barata, la cual en el caso de la agricultura industrial proviene en su mayoría de combustibles fósiles, y así mismo, consecuencia del abuso de éstos, un cambio en los patrones climáticos evidente y demostrado, con escenarios de incremento en la temperatura que oscilan entre 1,8° y 5° grados centígrados², y que conlleva a cambios ecosistémicos globales de larga duración y temibles impactos. Efectivamente, la dependencia del sistema productivo hacia los combustibles fósiles y la volatilidad del clima resultado de las emisiones contaminantes del modelo industrial, hacen que los precios de los alimentos estén sujetos a dinámicas de mercado, casi siempre externas a las comunidades locales de productores.

Los precios de los alimentos han crecido un 2,7% en el año 2012, logrando niveles parecidos a los vistos en la década de los sesenta y setenta, y mostrando cifras de crecimiento de un 104.5% entre el 2000 y 2012, con una tasa anual de crecimiento de 6.5%³. Estos precios sin duda tienen un patrón similar al de los precios del petróleo y gas natural, estos conectados a su vez con los fertilizantes de síntesis química. La siguiente gráfica relaciona los precios reales, es decir, ajustados a la inflación, de algunos de los principales productos alimentarios, como lo son el maíz y el arroz, así como el precio del petróleo, de los fertilizantes químicos y la energía en general.

No es casualidad que las tendencias de los cambios porcentuales de sus precios tengan unas tendencias prácticamente iguales en todos los casos, evidenciando los cambios más bruscos durante el año 2008, con la crisis económica y financiera global como escenario, donde el precio del petróleo alcanzó niveles por encima de los 100 dólares por barril. Cabe anotar que el cambio brusco en los precios de los cereales afecta sobre todo a las personas de escasos recursos de todo el planeta. Según la FAO, desde que empezaron los incrementos en los comienzos de la primera década del milenio, los precios de los cereales habían subido hasta un 200% con respecto a la media 2000-2004. Las tendencias no dejan mucho espacio para esperar una caída de los precios del petróleo y esto conllevará a un incremento constante del precio de los alimentos provenientes de la producción industrial, así como la necesidad de un replanteamiento sistémico de la producción global y local de alimentos.

Mucho se ha hablado de los incrementos en la producción global de alimentos gracias a la revolución verde, los procesos de industrialización y los desarrollos comerciales biotecnológicos, sin embargo dicha mejora en la productividad y de las cosechas se ha realizado a costa de un constante aumento de la cantidad de petróleo consumido en el proceso. El siguiente análisis termodinámico de la producción muestra los costos energéticos reales de la producción agrícola industrial:

“Un campesino tradicional produce alrededor de 10 calorías por cada caloría gastada. Un granjero de Iowa, empleando la tecnología más avanzada disponible puede producir 6.000 calorías por cada caloría de trabajo humano, pero su hazaña resulta menos impresionante si calculamos la cantidad de energía consumida para generar los beneficios energéticos

² D.L. Albritton y otros, “Summary for Policy Makers: Climate Change 2001: A report of working group I of the intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC, 2001, pág. 7, <http://ipcc.ch/pub/spm22-01.pdf>

³ Banco Mundial, Global Economic Monitor (GEM) Base de datos de productos Básicos, disponible en internet en: <http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=global-economic-monitor-commodities>, tomado de: Wenzlau, Sophie, “Global Food prices continue to rise”, Worldwatch Institute, Vital Signs, 2013.



netos. Para producir una lata de cereales de 270 calorías, el granjero consume la ingente cantidad de 2970 calorías para mantener la maquinaria en funcionamiento y obtener los fertilizantes y los pesticidas. Así pues, por cada caloría de energía producida, el tecnificado granjero norteamericano termina consumiendo diez calorías de energía en el proceso⁴.

Mientras todavía disfrutamos del petróleo relativamente barato y abundantes cosechas, la desnutrición afecta a casi mil millones de personas en el mundo. Imaginemos el futuro que nos espera cuando la producción global de petróleo toque techo y los precios se disparen de forma irreversible⁵. Todas estas cifras argumentan de manera técnica y política la creación y apoyo de canales de comercialización alternativos que atiendan demandas locales con precios justos e impactos positivos en los ecosistemas y las comunidades.

La necesidad de información y los hallazgos principales de la investigación

Para iniciar un proceso de comercialización que empodere a los pequeños productores de alimentos ecológicos se inició una indagación preliminar que permitió auscultar el mercado al cual se pretendía entrar y sus principales características. Los hallazgos de esta investigación mostraron la dimensión del mercado, sus principales actores y la dinámica económica existente.



Se encontró que la agricultura orgánica registrada por IFOAM⁶ llega a representar el 0,9% del área cultivada en todo el planeta, llegando a las 37 millones de hectáreas cultivadas con prácticas ecológicas o en proceso de reconversión ecológica, el triple del área cultivada de esta manera en el año 1999⁷. La región con mayor área sembrada con prácticas orgánicas es Oceanía, con cerca de 12 millones de hectáreas, seguido de Europa con cerca de 10 millones, y en tercer lugar América Latina con poco más de 8 millones de hectáreas⁸.

A nivel de Bogotá la indagación contó con visitas a 37 sitios de comercialización de productos ecológicos y alternativos ubicados en la ciudad, de los cuales 15 son tiendas especializadas, 17 son grandes superficies, y 5 son distribuidoras a puerta cerrada. La visita a una muestra de estos puntos mostró datos de diferencia entre el precio de los productos ecológicos de los convencionales que oscilaba entre el 20% y hasta el 400%. Los datos más altos se encontraban en productos como

⁴ P. Farb, *Humankind*, Boston, Houghton Mifflin, 1978, págs. 181-182.

⁵ Rifkin, Jeremy, *La Economía del Hidrógeno: La creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra*. Paidós, 2002, pág. 196.

⁶ Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica.

⁷ Ward, Catherine y Reynolds, Laura, "Organic Agriculture contributes to sustainable food security", Vital Signs Worldwatch Institute, 2013.

⁸ Helga Willer y Lukas Kilcher, eds., *The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends 2012* (Bonn, Germany, and Frick, Switzerland: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and Research Institute of Organic Agriculture, 2012).



la zanahoria, la papa pastusa, la lechuga y la habichuela. Los productos que tenían el precio más cercano entre un mercado ecológico y el mercado convencional fue la panela y la miel de abejas.

En cuanto al consumidor la investigación determinó el perfil de los compradores de alimentos ecológicos, el cual pertenece a los estratos socioeconómicos 4,5 y 6. Dichos consumidores están en su mayoría ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, siendo estas localidades donde se ubican la mayoría de los puntos de comercialización de este tipo de productos. Así mismo se indagó la presencia de productos en dichos puntos de comercialización, mostrando que los productos que más presencia tienen en estos puntos son las variedades de lechuga, el tomate, la rúgula, la cebolla puerro, la zanahoria, la acelga y el tomate cherry. En el caso de los productos procesados de origen agroecológico con mayor presencia en las tiendas ecológicas y grandes superficies son el café orgánico, las hierbas deshidratadas, la quinua, panela pulverizada, panela en bloque y conservas de vegetales. Estos productos definitivamente son los más apetecidos por los consumidores habituales de productos orgánicos.

El mercado de los alimentos ecológicos tiene una demanda importante, según lo evidenciado por la investigación, de frutas frescas, la cual debe ser atendida con una planificación de las siembras y una coordinación logística entre los productores y el canal de comercialización.

El momento actual de los canales de comercialización

Durante los últimos tres años Familia de la Tierra ha dinamizado la comercialización de productos ecológicos de por lo menos veinte organizaciones productoras a nivel nacional, ubicando un portafolio de más de 180 productos de la economía indígena y campesina a nivel nacional y encontrando diversos canales a través de

los cuales fluyen estos productos. A continuación mostramos las características de estos canales, su dimensión y su potencial dentro del proceso de empoderamiento económico de las comunidades de productores.

Restaurantes

Los restaurantes son un canal interesante para pequeños productores debido a la concentración de la demanda de productos. La demanda promedio mensual de un restaurante de comida criolla puede alcanzar los 300 kilogramos de tomate, 100 kilogramos de zanahoria, 240 leguchas, 100 kilogramos de cebolla cabezona, 200 kilogramos de papa, 120 mazorcas, 6 kilos de cilantro y 30 kilos de yuca⁹. Estas demandas, si se escalonan con redes de restaurantes de 5 o más puntos de venta, podrían generar una economía dinámica para una red de productores, quienes pueden atender ese tamaño de demanda y obtener beneficios sostenibles para sus familias. La liquidez que permite este tipo de negocio permite al pequeño productor mantener un flujo de caja importante para dinamizar la economía de una red de productores. Un mercado de una cadena de restaurantes que tenga esta demanda permitiría programar siembras de estas variedades para cumplir con una demanda anual estimada de 3,6 toneladas de tomate, 1,2 toneladas de zanahoria, 24 cargas de papa, 1.000 mazorcas, 72 kilos de cilantro y 360 kilos de yuca por restaurante. Estas son cifras interesantes para pequeños productores agroecológicos de la región central del país.

Tiendas especializadas

Para atender este tipo de canal hace falta una coordinación con diferentes tipos de productores para consolidar un portafolio que permita hacer viable los costos de distribución. La diversidad de productos que ofrece una tienda hace que ésta tenga una necesidad de minimizar el número de proveedores sin minimizar su diversidad, es por esto que una red de productores

⁹ Datos obtenidos de la experiencia comercial de Familia de la Tierra con redes de restaurantes en la ciudad de Bogotá.



a nivel nacional, con productos de diversos ecosistemas, se presenta como una oportunidad para construir una sinergia entre redes de productores y tiendas. En la ciudad existen aproximadamente 20 tiendas que ofrecen productos orgánicos, ecológicos y alternativos, estas tiendas se presentan como un potencial para pequeñas redes de productores organizados, siempre y cuando haya acuerdos de pago diferenciados y favorables, como lo es el pago de contado de productos frescos y no más de 30 días de crédito para los productos procesados o no perecederos.

gánicos como parte de su tratamiento. En promedio una persona que se trata a sí misma con alimentos orgánicos con la terapia Gerson o con diversas terapias holísticas, consume mensualmente cerca de 120 kilos de zanahoria, 150 lechugas romanas, 80 lechugas verdes crespas y 20 kilos de manzana criolla. Esto puede significar que anualmente una red de productores ubicados geográficamente cerca de estos consumidores pueden programar siembras anuales de 1 tonelada de zanahoria, 2.000 lechugas romanas, 1.000 crespas verdes y 300 kilos de manzana por consumidor.

Otra vez el proceso organizativo de red permite atender demandas locales de alimentos ecológicos a un precio accesible y con un mercado estable.

Domicilios puerta a puerta

Las entregas a domicilio son un mercado potencial importante para una red de productores, en este caso se concentran los pedidos para dos días a la semana, en nuestro caso los días martes y viernes, de tal manera que los costos de transporte sean cubiertos por varios pedidos. Los pedidos deben tener un tope mínimo de \$100.000 para cubrir gastos de transporte y generar una ruta para realizar la entrega. Es en este caso muy útil usar tecnologías de posicionamiento geográfico para realizar cálculos y rutas óptimas.

Estas herramientas si bien en un primer momento no son vitales, si son una manera de reducir los costos de entrega relacionados con los tiempos de desplazamiento y la gasolina, así mismo se encuentran herramientas de software libre en internet para realizar estas optimizaciones de ruta. Este canal de comercialización se dinamiza plenamente en internet, redes sociales y comunicación telefónica. Estas herramientas de comunicación son indispensables para la operación logística, las ventas y el relacionamiento con los consumidores. Las visitas que se logran en internet actualmente en la página web son más de 1000 y los suscritos a boletines son más de 300 visitantes.



Salud y bienestar

El modelo de producción industrial de alta entropía generó a su vez toda una serie de enfermedades crónicas debidas a la contaminación de los alimentos con pesticidas y derivados petroquímicos, la consecuente contaminación de los acuíferos y flujos de agua, y el aire urbano cada vez más cargado con gases de efecto invernadero y residuos industriales. En la actualidad existe una tendencia creciente de personas preocupadas por su salud y su cuerpo, personas que deciden consumir productos provenientes de huertas locales y que no contengan químicos, así como pacientes de tratamientos para enfermedades crónicas que consumen importantes cantidades de alimentos or-



Mercados veredales

Los mercados veredales son una iniciativa local que permite llevar productos directamente desde las huertas a consumidores identificados con anterioridad. En el caso de la presente propuesta se han realizado mercados veredales en la vereda El Hato del municipio de la Calera, lugar donde habitan personas que habitualmente consumen productos ecológicos. Estos mercados han sido apoyados por instituciones distritales y ha tenido resultados positivos en los productores de la Red de los Verjones, habitantes de las veredas Verjón Alto y Bajo de la ruralidad de Bogotá, quienes acopian localmente sus productos, se organizan para realizar el transporte de éstos y las carpas del mercado y realizan la venta de sus productos.

Los mercados realizados han obtenido ventas promedio de cerca de \$1 700.000, correspondientes a productos hortícolas de las huertas, productos procesados y artesanales de invitados de diversas organizaciones. Estos mercados son coordinados por líderes locales y representan otra alternativa a la producción local debido a sus bajos costos y grandes potenciales de copar la demanda local. Para la convocatoria a los mercados se usan herramientas web, redes sociales y correos electrónicos. El alcance de las campañas de convocatoria de los más recientes mercados ha ascendido a 6.000 personas.

Las apuestas a futuro

Efectivamente queda mucho camino por recorrer para consolidar un mercado estable para los productores agroecológicos, sin embargo los emprendimientos rurales de pequeñas redes deben ser estimulados por el sector público y privado para empoderar a estos productores y darles la posibilidad de permanecer en la tierra, tener ingresos dignos y una calidad de vida justa y deseable. La industrialización ha logrado prácticamente desaparecer a los pequeños productores del escenario del mercado, las redes son

las herramientas que les permiten a ellos lograr economías de escala horizontales y escalonamiento para copar espacios económicos de la ciudad.

Existen diferentes iniciativas comunitarias en el mundo para potenciar los procesos locales de producción ecológica, entre ellos resaltamos algunos que consideramos importantes para el fortalecimiento de las organizaciones de abajo para arriba.

La *Moneda Comunitaria* es una iniciativa local de relacionamiento económico que permite fluir y reciclar recursos locales sin la interferencia del sector externo al barrio, como lo son los bancos comerciales y las grandes superficies. Las monedas complementarias han logrado desarrollar el crédito comunitario, las asociaciones locales de crédito y los bancos comunitarios en diversos países (dólar de Ithaca en Estados Unidos, Palmas en Brasil, Tlaloc en México, Red Global de Trueque en Argentina), logrando millones de dólares en créditos que dinamizan la economía local sin los costos de la deuda.

Los productores crean acuerdos de la dinámica de la moneda, ganan libres¹⁰ en la medida que trabajan para su comunidad, a su vez pueden comprar productos a los demás productores que están bajo el acuerdo o en las huertas donde realizan sus trabajos, así mismo los trabajos realizados están encaminados a producir alimentos y semillas con potencial de impacto en la soberanía alimentaria y económica de las familias. Estas monedas crean riqueza local que no se fuga hacia los bancos y los grandes comerciantes minoristas.

La homologación de los *sistemas de garantía participativa, SGP*, con redes de restaurantes, distribuidores y gobierno local permitirá el acceso de productores ecológicos a los mercados sin el pago a certificadores de tercera parte y la interferencia en los precios que éstos generan. Los sistemas de garantía participativa deben florecer en muchas orga-

¹⁰ Moneda comunitaria desarrollada por Familia de la Tierra para dinamizar productores locales de alimentos y semillas.



nizaciones de productores y retroalimentarse permanentemente con consumidores, de tal manera que se genere una confianza en el sistema y mayor fortaleza de la red. Así mismo, con la homologación de SGP por parte del gobierno distrital, se podría crear un mercado institucional estable para pequeños productores, fijando metas del gasto público dedicado a la compra de productos provenientes de pequeños productores que estén cubiertos por este tipo de sellos, tal como ocurre en ciudades como Nuremberg, Alemania¹¹.

La *Integración de energías alternativas* a la producción y transformación de alimentos como lo son los paneles solares, los microgeneradores de energía eólica e hidroeléctrica es una oportunidad para reducir los costos de la producción y crear empresas rurales de vanguardia, conectadas a internet y con capacidad de producción local de energía. Este proceso puede ser apoyado por instituciones públicas con empresas privadas de países que desarrollan esta tecnología como parte de un apoyo a la economía rural y el mejoramiento de calidad de vida.

Emprendimientos como *Alvarado Street Bakery*, una empresa comunitaria de pan orgánico en Petaluma, California, muestra como los procesos comunitarios de producción, apoyados en energías alternativas y planificación de operación logística pueden ser rentables y eficientes. Esta empresa está organizada de manera comunitaria, cada trabajador recibe iguales acciones en la empresa y votos igualita-



rios en los asuntos de los negocios, incluyendo beneficios para los empleados, sueldos y la reinversión de los beneficios¹².

Estas tres herramientas serán, a nuestro modo de ver, el futuro de las organizaciones productoras de la pequeña agricultura, de tal manera que puedan fortalecer sus procesos de producción hacia el exterior de la red y la reciprocidad al interior, creando lazos solidarios que generarán sostenibilidad económica, ecológica y social a largo plazo. 🐾

¹¹ La ciudad de Nuremberg fijó como meta que por lo menos la mitad de su apoyo alimentario a primarias y jardines infantiles provenga de la agricultura orgánica, así como el 25% de la demanda de la administración pública sea cubierta con alimentos orgánicos.

¹² Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Alvarado_Street_Bakery



Sumapaz: afectaciones a la seguridad alimentaria y nutricional

Alejandra Álvarez, Lina Rosas, Sara Del Castillo¹

Colombia presenta diferentes tipos de desplazamiento, además del desplazamiento forzado por la situación de violencia en el país, sino también por factores económicos, sociales y ambientales que impactan a las comunidades, los cuales se encuentran relacionados tanto de forma positiva como negativa a la garantía del derecho a una seguridad alimentaria y nutricional óptima. Las migraciones de familias y/o de comunidades enteras han sido para Colombia una problemática relevante, por el extenso lapso de tiempo y por la cantidad de población que se afecta de forma directa e indirecta.

Acción Social de la Presidencia de la República definió que en Colombia existen un total de 3.389.386 personas desplazadas, aproximadamente el 7,3% de la población del país². Sin embargo, organizaciones no gubernamentales consideran que esta cifra es significativamente mayor. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), aseguran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años ochenta supera ya los cinco millones de personas³.

Este proceso migratorio se observa con claridad en la región del Sumapaz, ubicada al sur del departamento de Cundinamarca. Aquí se desarrollan unas carac-



Campeño de Sumapaz en la siembra de papa.

Archivos de la investigación - OBSAN - UN

terísticas particulares debido a sus complejas condiciones ambientales, sociales y económicas. Dentro de este territorio se encuentra la localidad veinte del Distrito Capital, Sumapaz, ubicada a 31 kms del área urbana de Bogotá D.C. y que se establece como la única localidad netamente rural de la capital. El 40% de su territorio hace parte del Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo, con una extensión total de 154 mil hectáreas y presenta características montañosas, variedad de fauna y flora, y una gran fuente hídrica para el país⁴.

¹ Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia en su Sede Bogotá OBSAN UN. C.e: sedelcastillom@unal.edu.co

² Acción Social de la Vicepresidencia de la República. Desplazamiento forzado en Colombia. Marzo de 2010.

³ Página web ACNUR Situación Colombia.

⁴ Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Área de Desarrollo Rural Provincia de Sumapaz. Presentación ADR Sumapaz - Incoder. Archivo [PPT]. Revisado el 01/12/2012.



Recuerdan con nostalgia comidas como la mazamorra (sopa), los envueltos y las arepas, platos que además de ser típicos de la región incluyen los alimentos que crecían en la tierra.

Históricamente, las dinámicas de las comunidades residentes en la localidad han sido resultantes de las condiciones ambiguas de ser localidad del D.C. y a la vez, zona rural, situación poco estudiada y menos en lo concerniente a la situación alimentaria y nutricional. En este sentido, OBSAN-UN, dentro del grupo de investigación de Equidad y SAN, desarrolló el trabajo de grado “Análisis del goce efectivo de derechos en seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina de Sumapaz con antecedentes de desplazamiento forzado”, con el fin de analizar su situación, enmarcándose en la determinación de la seguridad alimentaria y nutricional como derecho, comprendiéndose esta como un concepto amplio e integral al permitir el análisis de las dimensiones humana, alimentaria, nutricional y ambiental.

En la primera fase del estudio se desarrollaron dos grupos focales con adultos mayores, con el fin de conocer las características sociales, económicas, agropecuarias y alimentarias de la localidad a partir de los años noventa, información que permitió la comparación de las condiciones de la región con la situación previa a la migración de las doce familias analizadas en la segunda fase, mediante el método de estudio de caso y con la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a profundidad que indagaron acerca de la composición familiar, vivienda y saneamiento básico, situación económica y situación alimentaria y nutricional enmarcados en el antes y después del desplazamiento. Finalmente, en la tercera fase se conoció la relación de cada una de las familias con el circuito agroalimentario de la papa, que se caracterizó a través de entrevistas semi-estructuradas a actores como productores, trabajadores, proveedores, consumidores y técnicos.

Sumapaz ayer y hoy

En primer lugar, identificamos el cambio estructural de la localidad en lo referente a vías, comunicación, acceso a educación y servicios de salud. La percepción de la comunidad es que a mayor acceso a los

servicios de atención en salud, genera una mayor intervención en procesos que según ellos mismo explican son naturales y deben desarrollarse bajo sus propias dinámicas, no mediante estrategias invasivas y que contrario a mejorar la calidad de vida de la población, generan a largo plazo mayores complicaciones en la salud. En contraste, no puede ignorarse el hecho de que muchos problemas en la salud de la comunidad han sido identificados, abordados y mejorados gracias a la presencia de centros de salud en la región.

Otro cambio importante que la población reconoce es concerniente al medio ambiente, específicamente las variaciones en el clima. Se identifica positivamente la presencia en el pasado de temporadas de invierno y verano bien definidas en cuanto a duración y épocas de aparición, lo cual les permitía prepararse para la proyección de la siembra. Además resaltan el cambio en la temperatura del páramo, que se correlaciona con el proceso de calentamiento global y que afecta significativamente los cultivos y a los animales. “El invierno y el frío eran terribles, ahora es más calientico ha subido más la temperatura. Los meses de octubre y noviembre llovía mucho, ahora hace calor, el clima ha cambiado bastante. Había más verde, se veían menos potreros, se taló mucho de eso para cultivar. Pero ahora en un futuro se nos va acabar el páramo y el agua”. Adulto mayor Vereda Raizal-Sumapaz.

En el tema de la agricultura, los campesinos consideran los grandes cambios que se ha presentado en la localidad, señalando en primer lugar la transformación de la forma de cultivar, pues anteriormente se realizaba una diversificación de la siembra que le permitía a la familia contar con una gran variedad de alimentos en todas las épocas, contrario a la actualidad, donde se ha llevado la agricultura a la masificación del monocultivo, que además de contribuir a la inseguridad alimentaria pone en riesgo la economía del campesino, quien depende totalmente de las disposiciones del mercado. “En los noventa se cultivaba además de papa, habas, arveja, maíz, arracacha, ahorita se siembra muy

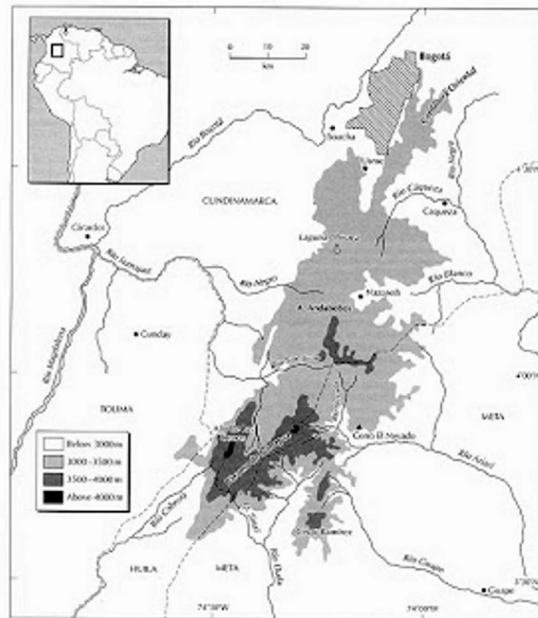


poquito, la gente casi no siembra, en ese tiempo se daba cebada, trigo, habas, pero ahora la tierra se acostumbró que se le tiene que echar bastante abono para que dé.” Adulto mayor Vereda Raizal- Sumapaz.

En este mismo sentido, es reconocido que en el pasado había gran variedad de semillas de todas las plantas, pero especialmente de papa, el cultivo de más tradición y se identifican variedades de diversos tamaños, formas y colores, muy alejadas del proceso de estandarización del comercio actual, que fue además el principal responsable de la desaparición de estas, puesto que la competencia en el mercado exigía la producción de variedades puntuales de papa, con características necesarias para el posterior proceso de industrialización de este alimento. “Había una papa roja muy rica para comer, no sé cómo la llamaran, también la argentina, tocarreña, guatiba, lizarasa, la blanca, colorada, negra... Se dejaron de cultivar porque se acabó la semilla, las semillas nuevas llegaron dando más, rendían mucho más, entonces se fue acabando. Además el gusano también la fue acabando” Adulto mayor Vereda San Juan - Sumapaz.

Este punto marca gran relevancia, puesto que la pérdida de semillas ancestrales aleja aún más a las comunidades de su autonomía alimentaria, al volverlas dependientes de semillas industrializadas que deben comprarse, ignorando la condición del campesino quien basa su racionalidad en el trabajo de la tierra y sus recursos, elementos que en la actualidad le son cada vez más limitados. La situación alimentaria en el pasado de la localidad, era muy baja en oferta de alimentos de la zona, en ventas y mercados, pues según expresan, los padres de familia en compañía de sus hijos debían recorrer grandes distancias para conseguir alimentos. Sin embargo, esta situación era positivamente complementada con la gran disponibilidad de alimentos cultivados en la región, que no solo se auto-consumían de las huertas caseras

sino que además se intercambiaban entre campesinos como forma de garantizar la variabilidad en la dieta. Lo mismo ocurría con los animales, pues los productos obtenidos como leche, de la cual además se producían quesos, mantequilla y otros derivados, nunca faltaron en la mesa. “Eso por ejemplo como en El Duda si se daba el maíz hacían intercambios, de acá se llevaba papa y de allá se traía el maíz”... “solo se compraba la panelita y la sal”. Adulto mayor Vereda San Juan y Raizal - Sumapaz.



Ubicación geográfica de la Localidad 20 Sumapaz. Atlas de Páramos de Colombia. Complejo Cruz Verde-Sumapaz⁵.

Las condiciones de acceso a los alimentos eran en comparación con la actualidad muy buenas, pues las familias no dependían del dinero para alimentarse, tenían un mayor nivel de autonomía al decidir que alimentos producir y consumir. Así las cosas, las disposiciones del mercado en cuanto a precios de alimentos no afectaban de forma directa a la comunidad, pues como ellos mismo refieren los únicos productos que se compraban eran panela, sal y pasta. Finalmente, se puede

⁵ Cadena V. Otero G. Torres P. Van der Hammen Atlas de Páramos de Colombia - Complejo Cruz Verde-Sumapaz. Editorial Grey Comercializadora Ltda. Bogotá D.C. 2007. Revisado el 01/12/2012, en: http://www.paramo.org/files/recursos/14_cruz_sumapaz.pdf



El Duda si se daba el maíz hacían intercambios, de acá se llevaba papa y de allá se traía el maíz"... "solo se compraba la panelita y la sal".

inferir que el consumo se encontraba garantizado al realizarse la preparación en el hogar y por lo tanto mantener las preparaciones y alimentos nativos, lo cual es confirmado por los participantes quienes recuerdan con nostalgia comidas como la mazamorra (sopa), los envueltos y las arepas, platos que además de ser típicos de la región incluyen los alimentos que crecían en la tierra casi sin necesidad de cultivarlos. "Se traía maíz, se tostaba y se revolvió con leche y quedaba una sopa de maíz y dulce que se llamaba jorobos, en esa sopa se le echaba habas, arveja seca y otras cosita". Adulto mayor Vereda San Juan – Sumapaz.

La migración y la seguridad alimentaria y nutricional en Sumapaz

Las doce familias del estudio, consideradas cada una casos emblemáticos de la situación de seguridad alimentaria y nutricional de Sumapaz son familias provenientes de la Bogotá urbana, Cundinamarca, Tolima, Caquetá y Quindío. En principio, la investigación buscaba la identificación de familias con antecedentes de desplazamiento forzado, sin embargo se pudo establecer que aunque esta situación se presenta en la localidad, es de poca prevalencia, siendo más común encontrar diferentes tipos de migración.

Así, en su mayoría, las familias migraron en búsqueda de mejorar la situación económica, pero las razones de salida fueron diversas: la conformación del hogar, el conflicto armado, problemas sociales, el de escapar de Bogotá, ciudad agresiva y peligrosa para su familia. Así mismo, era de interés indagar la principal razón para decidir reubicar la familia en la localidad de Sumapaz, siendo una región poco conocida y de condiciones geográficas y ambientales complejas.

En este sentido, las familias mostraron claramente que su decisión partía del hecho de contar con familia en la región pero también de establecer a la localidad como una zona donde vivir sin las angustias de la ciudad.

Al llegar a la localidad cada familia evidencia el cambio en las condiciones de vivienda, pues aunque algunas poseían casa propia, terminan viviendo en arriendo, en una situación especial, ya que el pago del arrendamiento incluye el cuidado, mantenimiento y trabajo en las fincas. Gracias a esto se deriva una mayor tenencia de terrenos, utilización y aprovechamiento.

En una época el terreno se utilizaba para la producción de papa, arveja, zanahoria, yuca, plátano, maíz, frijol; así como para el mantenimiento de animales, en especial de vacas. En la actualidad, las familias cultivan papa y en algunos casos cebolla. También poseen pequeñas huertas caseiras destinadas principalmente a las hierbas aromáticas y especias.

A nivel alimentario y nutricional, la disponibilidad y el acceso a los alimentos se proyectan como los aspectos de mayor riesgo para las familias desplazadas y en condiciones de ruralidad, en la región del Sumapaz se produce una baja variedad de alimentos y los que llegan generalmente son de baja calidad y alto costo. A esto se deriva las condiciones climáticas, el complejo acceso geográfico y las transformaciones culturales en la agricultura, la progresiva disminución del pluricultivo y la dedicación a la producción a gran escala.

Sin embargo, contrario a esta consideración, las familias escogen llegar a este sitio por el apoyo familiar que reciben pero especialmente por las ayudas que diferentes instituciones ofrecen para lograr un mejor nivel de vida. "No hacía falta nada, usted mantenía comida de lo que uno quería, en cambio acá, no se consigue, estando tan cerquita de Bogotá, acá la alimentación también es buena, se dificulta las carnes, acá es comprándola pero así tenga la plata es difícil". Familia vereda Animas Bajas.

Dentro de estas ayudas se encuentra la canasta complementaria de alimentos entregada por instituciones gubernamentales capitalinas, un "paquete de alimentos de la canasta familiar, que se proporcionan a las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad con el fin de satisfacer las



necesidades alimentarias para el restablecimiento del derecho a la alimentación”⁶. Este tipo de ayuda ha provocado en gran parte que la población del Sumapaz, un tipo de asistencialismo en la parte alimentaria, que ha dejado a un lado el autoabastecimiento y cultivo de hortalizas y verduras propias de la región.

Es claramente el efecto de una estrategia pensada para familias urbanas, que se constituye en factor de riesgo para la producción familiar de alimentos. *“Por aquí de vez en cuando se cultivan las verduras, pero casi esto no es tierra de verduras, por ahí que nos las regalan en la canasta”* Familia vereda Capitolio”. *Acá es buena por la canasta, esa es buena porque viene casi de todo, fruta, verdura, granos.”* Familia Vereda Lagunitas.

Por otro lado, para todas las familias fue relevante el cambio de la cultura alimentaria, pues muchos refirieron extrañar platos típicos de sus regiones, los cuales no se preparan en la localidad, ni tampoco se encuentran los ingredientes para confeccionarlos, lo cual convierte el proceso alimentario en un acto monótono.

“Allá se come mucho sancocho, mi preferido era el de pescado, muy sabroso, era fácil conseguir pescado, era ir y botar el anzuelito y listo. Carne de monte, chigüiro, armadillo, si le daban ganas de comer armadillo, cogía la escopeta y se iba, en una hora se traía su armadillo”. Familia Animas Bajas.

Sin embargo, la percepción de la situación alimentaria de las familias tanto actual como previa al desplazamiento se encontró adecuada para la mayoría, pues a pesar de las dificultades, destacan que en la actualidad tienen asegurada la alimentación por las ayudas de instituciones gubernamentales, y en el pasado por la posibilidad de contar con una tierra pro-

pia donde podía cultivar y consumir directamente alimentos, mejorando el acceso y la disponibilidad.

“Allá consumía mayor cantidad de alimentos, usted iba y bajaba una mandarina, un mango, un limón de dulce, fresquita, eso no es como acá... si usted no va a Bogotá usted no trae algo bueno”, Familia Vereda Raizal.



Páramo de Sumapaz. Localidad 20, Bogotá.

Archivos de la investigación: OBSAN - UN

Finalmente, se encontró que las familias presentan diferentes tipos de vinculación al circuito de la papa: algunas con padres trabajadores del cultivo y en todas como consumidoras del producto; hallazgos que al complementarse con la fase tres facilitaron la comprensión de este característico circuito, que muestra una masiva utilización de agroquímicos amenazante del recurso hídrico del páramo y una profunda indiferencia de las entidades estatales con roles poco claros y sin un impacto aparente, en las prácticas agrícolas de las familias de Sumapaz, todas vinculadas de una u otra manera al circuito agroalimentario de la papa. 🐾

⁶ Secretaría Distrital de Integración Social. Proyecto 515 Seguridad alimentaria y nutricional. Canastas complementarias de alimentos para familias de Sumapaz. Disponible en: <http://www.bna.com.co:88/LinkClick.aspx?fileticket=c%2FfcR0%2Fsy8l%3D&tabid=193&mid=1463>.

El municipio de Montería: entre el progreso de la ciudad y el abandono del campo

Víctor Negrete Barrera¹



Campesinos de Martinica acarreado junco y nea de los extensos playones de la ciénaga en 1972. Desde hace años convertidos en pasto.

El mejoramiento de la ciudad...

Montería es una ciudad intermedia, localizada en la parte sur de la Costa Caribe colombiana, capital del departamento de Córdoba. Contaba en el 2011 con 319.135 habitantes y el sector rural del municipio con 96.661 para un total de 415.796. La sola ciudad representa el 25% de la población del departamento que es de 1.607.463 personas según proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En los últimos años la ciudad ha cambiado. En

especial la zona céntrica y las que corresponden a los barrios de estratos medios y altos. Se nota el dinamismo y ampliación del comercio representado en miles de negocios, consultorios, oficinas y talleres de todos los niveles y tamaños. Adecuados servicios de acueducto, energía eléctrica, recolección de basuras, gas domiciliario y transporte urbano. Un parque automotor moderno, cada vez más numeroso, que congestiona las calles y miles de motociclistas, la mayoría convertidos en mototaxistas porque no tienen otra manera de ganarse la vida. Construcciones, remode-

¹ Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú. C.e.: vicnegreteba43@gmail.com



laciones, adaptaciones en viviendas y urbanizaciones de estratos cuatro, cinco y seis; mejoramiento en los parques, escenarios deportivos y vías; grandes clínicas, restaurantes, almacenes de cadena, hoteles, bodegas, terminal de transporte, entre otros, que le dan un aspecto de ciudad organizada y limpia.

La importancia de Montería para las distintas clases de inversionistas, así como para los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares, narcotráfico y los de la posdesmovilización) radica en que es el centro político, administrativo, judicial, financiero, comercial, empresarial y de educación superior no solo del departamento sino de zonas de Sucre, los Urabá antioqueño y chocono y el bajo Cauca; desde hace varios años, antes de la desmovilización, la convirtieron en lugar propicio para invertir con dineros lícitos e ilícitos; el medio centenar de asentamientos subnormales que hacen parte de su población les aporta una numerosa mano de obra de adolescentes y jóvenes sin oportunidades de estudios técnicos o profesionales, falta de empleo, con familias incompletas y problemas de convivencia en un medio de alto nivel de riesgos sociales; la cercanía y colaboración que mantuvo la dirigencia del departamento con los principales jefes paramilitares de las AUC Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.

En cuanto a inseguridad la ciudad presenta un cuadro preocupante de delitos de distintos tipos. Sobresalen los homicidios, extorsión, amenazas, lesiones, hurto a personas, residencias, comercio y motocicletas, fleteos, incautación de drogas, tráfico de estupefacientes y reclutamientos.

...y el deterioro progresivo de la vida en el campo

En Montería en la década de los cincuenta sucedieron varios hechos que permitieron ampliar el número de haciendas y consolidar el comercio ganadero, algunos de los cuales empezaron a deteriorar las fuentes de aguas. Tales fueron los casos de aper-

tura de la carretera Montería- Medellín en 1952 que hizo posible el traslado de ganado en camiones y se abandonara las trochas; el inicio de la carretera Montería- Arboletes en 1953 con el levantamiento de un terraplén de varios kilómetros que dividió la ciénaga La Trampa y cortó los caños Viejo y El Vidrial; la puesta en servicio del puente metálico sobre el río Sinú y la hechura del terraplén Montería-La Vorágine, ambos en 1958. Esta última obra también dividió ciénagas y separó cursos de agua.



El norte de Montería apesta por laguna de oxidación.

Foto El Universal.

Con la mentalidad de los propietarios de origen foráneo y de algunos raizales (para ellos la ganadería es la base del desarrollo y la riqueza) y el inicio de estas y demás obras ejecutadas después con estas mismas intenciones quedó bloqueado, al parecer definitivamente, el propósito de que estos recursos sean reconocidos como bien público, que cumplen una función social de extrema utilidad para las comunidades pobres de sus riberas y alrededores.

Con esta base, mentalidad y obras públicas, la ausencia de autoridad por parte de administraciones municipales y departamentales y de los organismos ambientales, muchos propietarios se consideran dueños absolutos de estos recursos



y por su propia cuenta y riesgo realizan acciones de gran impacto ambiental y socioeconómico como:

- Taponan, cambian y modifican cursos de aguas.
- Ocasionalmente perjudican a vecinos, barrios y veredas durante las inundaciones.
- Cercan, canalizan, contaminan sedimentan y desecan ciénagas.
- Impiden el acceso a la comunidad y el aprovechamiento de los recursos de estas fuentes, muchas veces de manera violenta e intimidatoria.
- Han destruido numerosos hábitats por el cultivo de pastos, algo similar están haciendo con las crías de búfalos, cada vez más numerosas.
- Han hecho desaparecer los playones y las grandes extensiones de junco, nea, bocachica, bijao y otras plantas útiles.
- Han incorporado a sus pertenencias, previa corrida de cercas, tierras y recursos naturales del Estado, sin reconocimiento alguno a las comunidades que las usufructuaron de manera colectiva durante muchos años ni a las entidades territoriales correspondientes.
- Han ayudado a empobrecer a las comunidades con la desaparición o deterioro progresivo de las aguas y bosques, que en nuestro caso es evidente, principió hace rato el proceso de desequilibrio que ha ocasionado una reducción del potencial productivo y económico de las tierras y el abandono acelerado de la población rural. La mayoría de las ciénagas y otras fuentes de agua han sido intervenidas de manera negativa por favorecer la ganadería extensiva, los cultivos de teca, melina, acacia y eucalipto y la bufalería.
- Movidos por la concepción de lo que se necesita es tierra y los jagüeyes necesarios para mantener los hatos ganaderos, muchos propietarios, algunas entidades gubernamentales y ciertos sectores de las comunidades, se dieron a la tarea y aprobaron acciones contra las fuentes de agua. Hoy, la pérdida es cuantiosa y parece ser irremediable.

Tres ejemplos a tener en cuenta

Ciénaga Redonda de Martinica: Situada a 15 kilómetros de Montería. En 1973 el Incora delimitó 4.000 hectáreas, dos años después sin razón conocida pasó a tener 2.816 y así, sucesivamente, la han achicado hasta quedar reducida a menos de mil hectáreas y en poder real de los hacendados.

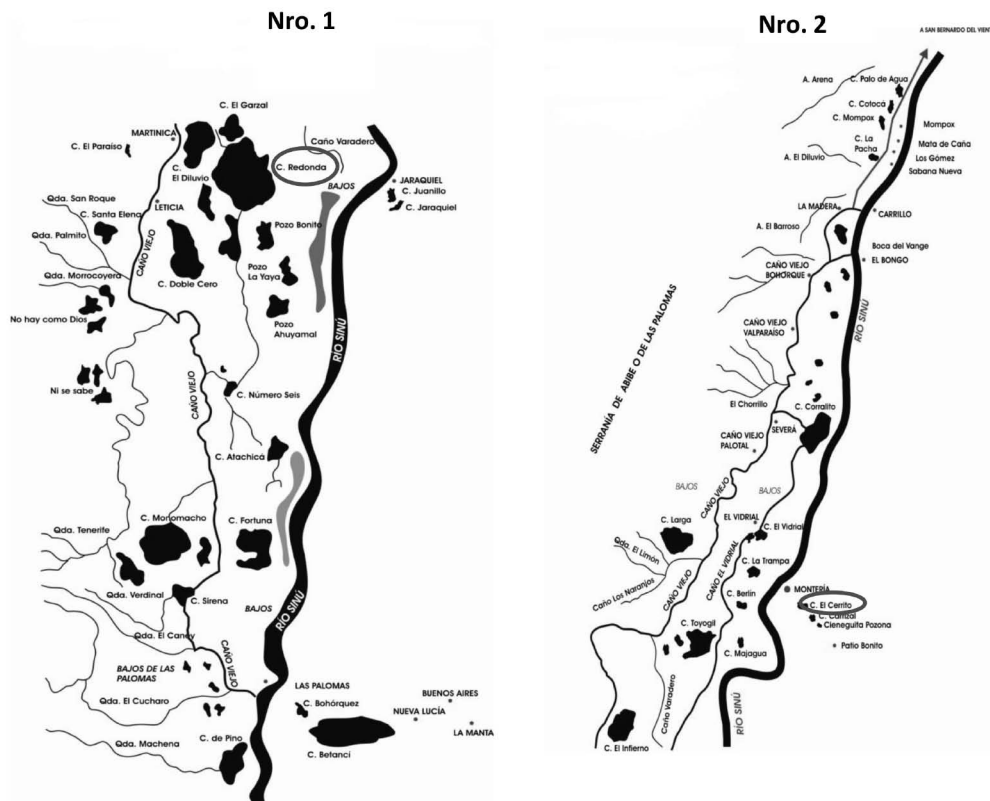
Esta ciénaga era una fuente de sostenibilidad y seguridad alimenticia de mil familias que vivían en sus alrededores. Era un legado cultural llamado cultura anfibia que les permitía vivir de la pesca, caza y agricultura. En los meses que el río no inundaba los playones sembraban maíz, plátano, ñame, frijol, hortalizas, patillas, pepinos; criaban cerdos, gallinas, pavos, patos, morrocayos y durante las crecientes pescaban bocachicos, bagres, doradas, barbules, moncholos. Pero llegaron los hacendados, le abrieron canales para desaguarla y a medida que secaban se apropiaban de los terrenos. La institucionalidad encargada de la protección de los recursos naturales permaneció callada a pesar de denuncias y demandas. Nada los detuvo, incluso se valieron de sicarios y grupos armados ilegales para matar, desplazar y amenazar.

Ciénaga El Cerrito. El pueblo fue fundado en 1800 y su ciénaga de 1.590 hectáreas fue desecada por el Incora el 1968, con la promesa que las tierras que se recuperarían las entregarían en su totalidad a los campesinos sin tierra del pueblo. Como no cumplieron y el pueblo reclamó en 1977, declararon baldíos los terrenos que conformaron la ciénaga y los playones; dos años después los reservaron con destino a una colonización especial y en 1981 empezaron a adjudicar predios a ricos y políticos de Montería. En la actualidad el pueblo vive en precarias condiciones, con dificultad mantiene su población y prácticamente lo sostiene el trabajo informal de hombres y mujeres que salen todos los días a Montería, situada a 18 kilómetros.

La margen izquierda del río Sinú, desde el sur del municipio de Montería hasta la



Fuentes de agua en la margen izquierda del río Sinú hace 50 años



Nota: El mapa número 2 es continuación del número 1 hacia el norte.

desembocadura del río en el mar Caribe, es una zona baja, inundable, hasta hace treinta años era rica en ciénagas, bajos, pantanos, lagos, lagunas. Contaba con más de 40 ecosistemas de estos y en un término relativamente corto de 40 años acabaron con el 85% de ellos. (Ver los mapas).

Los alimentos en riesgo

La mayoría de las familias campesinas del municipio no tienen tierra o cuentan con muy poco y no es lo suficiente para sobrevivir. Un porcentaje mínimo de estas familias, valiéndose de tierras arrendadas, a medias o prestadas, cultivan productos de pancoger como plátano, yuca, ñame, arroz, batata y ahuyama, entre otras; frutas como mango, guayaba, cítricos, níspero, zapote, aguacate, patilla, papaya; condimentos como orégano, limoncillo,

boldo, jengibre; hortalizas como tomate, ají, berenjena, pepino, cebollín, cilantro, calabaza, col, lechuga; así como plantas aromáticas y ornamentales. Los patios también los utilizan para la cría de gallinas, cerdos, patos, pavos y conejos.

A pesar de la poca tierra que tienen corren el riesgo de perderla por despojo o ventas forzadas; el acceso por arriendo, medianería o préstamo es cada vez más difícil por el costo, la siembra de pastos, las enfermedades de plantas y animales. A esto debemos agregarle el viacrucis de sacar la pequeña producción por vías en mal estado, costos del transporte o control de grupos armados ilegales. Y obviamente la ausencia de políticas y programas que favorezcan de verdad a los pequeños productores de la seguridad alimentaria. Lo cierto es que el riesgo crece todos los días. 🐾

El circo del buen vivir

Diálogo campo-ciudad por la diversidad, el territorio y el mercado local de alimentos

Equipo de comunicaciones de Fundaexpresión¹



Foto: Fundaexpresión

Llegó al Barrio La Joya un piquete de policías dispuestos a hacer valer la ley frente a los comerciantes informales, que según ellos, se habían apropiado del espacio público. Sin embargo, los uniformados se llevaron una verdadera sorpresa al enterarse que no eran vendedores cualquiera, sino campesinos y que estaban allí con la venia e invitación de la comunidad misma.

Y se lo hizo saber la propia gente del Barrio, que ante el inminente desalojo se organizaron rápido como el viento para decirles que esas personas que iban a despachar a la fuerza son mujeres y hombres campesinos que cada quince días bajan de sus veredas, montañas y páramos de la Provincia de Soto cargados con productos frescos, sanos y orgánicos. Inmediatamente, hubo ofertas de la misma comunidad anfitriona del barrio para reubicar el mercado en los alrededores de la junta de acción comunal o frente a la iglesia con el aval del padre.

Mientras todos estos acontecimientos, apareció el señor Héctor Mantilla, vecino del sector quien cada vez que vienen las comunidades campesinas les ofrece y sin costo: chocolate caliente con arepa, “la casa invitada”. Su generosidad es recíproca cuando los muchachos del barrio, los hombres

Hace tan solo un par de meses y en el marco de la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de desalojar a los vendedores ambulantes de la ciudad,

¹ Fundaexpresión, municipio de Floridablanca - Santander. correo: fundaexpresion@gmail.com / www.fundaexpresion.org

o grupos de mujeres devuelven la visita a los y las campesinas en sus valles, cumbres y riberas, en sus reservas campesinas y comunitarias.

Esto definitivamente no es usual, entonces, ¿qué ha pasado para que un grupo de ciudadanos y campesinos se fusionen como unidad a la hora de defender los alimentos y mercados locales, percibidos ahora como una actividad valiosa e importante en sus vidas?, ¿qué ha sucedido para que esgriman la razón y la palabra como camino en la resolución de conflictos?; ¿cómo desde el diálogo campo-ciudad logran permear otros comportamientos sociales?... la respuesta tiene nombre propio y sin presunción alguna: el *festival de expresiones rurales y urbanas*.

Así fue el día del conato de desalojo en el barrio La Joya, no en vano y dando buena cuenta de lo expuesto, la comunidad del sector, regó la voz con el viento de que desalojarían a los campesinos que les reportaban beneficio y salud a sus hogares, y salieron a defender lo suyo, no el mercado tan solo sino la visión del buen vivir que vislumbran y que han construido luego del intercambio continuo con los invitados de comunidades campesinas, indígenas, extranjeros, estudiantes, académicos, periodistas, artistas y muchos otros que han llegado a su barrio, y no tan solo en el marco del festival porque es importante resaltar que esta colorida fiesta no se reduce a los tres días del cronograma, al contrario, es una seguidilla de eventos a lo largo del año en donde se siguen propiciando espacios en los que el conocimiento se continúa masificando, reconstruyendo y desplegando.

Todo empezó años atrás con la escuela agroecológica, allí y bajo la dinámica “*de campesino a campesino*” se transmitió conocimiento popular con el que se han promovido capacidades propias de auto-



Foto: FundaeXpresión

alimentación, organización, y de proyección social dentro las comunidades rurales. Cada tanto se reunía un buen número de cultivadores y campesinas provenientes de diversas veredas y municipios de Santander, previamente definían un tema a desarrollar que debía responder a una problemática específica y entonces, la palabra con la acción se sumaba: al unísono cada quien aportaba al asunto desde sus expectativas y conocimientos. El conferencista, tallerista o como quiera llamarse, por lo general, era uno de ellos. Parcelas agroecológicas, manejo del suelo, procesamiento de alimentos, agroforestería, semillas, construcción de pozos de cosecha de aguas lluvias, en fin, un sinnúmero de encuentros al cabo de los cuales se preguntaron por el significado de la palabra “desarrollo”. Así y en boca de unas y otros sin distinción alguna, concluyeron que no era rodearse de objetos ni necesidades sino que debía ser sinónimo del *buen vivir*.

De esta forma, la autonomía económica, social, cultural y alimentaria retornó a sus hogares, el pan caliente volvió a la mesa, la comida sin químicos engalanó las ensaladeras, las semillas criollas retornaron a los silos, sin embargo y al cabo de los años creyeron que si no logran sacar sus iniciativas comunitarias más allá de las parcelas todo será frágil y efímero, y se ponen a la tarea de llevar su experiencia a las ciudades.

Entre ires y venires encuentran correspondencia en un barrio antiguo y emblemático, con un tejido comunitario dinámico: el barrio La Joya de la capital santandereana. De hecho, estos dos grupos de pobladores rurales y urbanos ya se habían cruzado años atrás y en el marco de la recolección de firmas por el Referendo por el Agua; de tal forma que no eran extraños, como tampoco con los demás sectores que se acercaron cuando lanzaron la propuesta de realizar un festival en donde y por algunos días se encontrara una variopinta mezcla de razas, colores, creencias, prácticas y culturas, para continuar con todas esas voces profundizando en la construcción del saber.

Viéndose en diferentes ojos, detrás de múltiples ópticas, podrían cualificar el aporte del campo a la ciudad, o viceversa, así y de a poco fueron construyendo un lenguaje común que expresara su significado en el territorio y la importancia del mismo: en el alimento, en los símbolos, en los mercados locales, en los mitos y leyendas, en la memoria del paisaje, además del hábitat rural y urbano.

Si se quiere, el buen vivir, es un concepto de vida que se refleja en la manera de pensar, de mirar las cosas, de estar con la naturaleza y con las demás personas;

es una filosofía de nuestra existencia que conduce a organizarnos de una forma más armónica y con respeto hacia el patrimonio ambiental y cultural.

En ese sentido, ese primer *festival de expresiones rurales y urbanas* en el año 2010, los dos siguientes y el venidero, se han construido y madurado con la certeza de que es necesario vernos más allá de nuestra especificidad, no somos tan sólo lo que hacemos, sino también lo que podríamos ser y por eso es importante permitirse apertura mental para generar consciencias individuales y colectivas. Así, las actividades del festival son diversas: intercambio de semillas, rutas gastronómicas, circo y teatro, mercados orgánicos, laboratorio de payasos, talleres sobre energías alternativas, conciertos, funambulistas, talleres de plastilina, deportes extremos para jóvenes, baile, cine-foros, demostraciones de agricultura urbana, exposiciones fotográficas, degustaciones de platos típicos, lonchera saludable, reiki, capoeira, en fin, diversas actividades que son miradas a un mismo asunto: el *buen vivir*.

Es por eso que más allá de crear redes de comercio, de potenciar economías solidarias, de instar sinergias, de apoyarnos mutuamente, el espíritu del festival es la



Foto: Fundaeexpresión



construcción de nuevas identidades, de sujetos activos dentro un territorio amplio, diverso y bondadoso con facetas rurales y urbanas. Las sociedades solo serán sostenibles si el campo lo es y de ahí la importancia del certamen.

Así, lo que inició de *campesino a campesino* se ha traslapado y enraizado en la ciudad, ahora es de *campesino a universitario, de periodista a cultivador, de cocinera a universitario, de indígena a afrocolombiano, de mujer a religioso*, tantos vasos comunicantes como variadas relaciones se han tejido.

Los tres días del festival no es otra cosa que una oportunidad maravillosa y feliz para verse y hablar sobre lo que han caminado y pensado desde la última ocasión en que se juntaron, para encontrar al unísono alternativas de autodefinición cultural y soberanía alimentaria. Al segundo festival, llegó el maestro carranguero, Jorge Velosa, dando apertura al encuentro de diálogo campo - ciudad en el barrio La Joya; ilustrada poéticamente en palabras del maestro Velosa, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia:

“Somos también un sendero y un modo de interpretar momentos de lo que pasa en el campo y la ciudad, y que a mirar aprendimos en esta Universidad, en esta mamá, alma máter, que tantos frutos nos da, la que pa’ vivir le toca casito que mendigar, mientras fondos y más fondos se malgastan en guerrear, y los que no, se los roban, o malversan sin cesar; y todo en nombre de un cuento, de esos de nunca acabar, cuando el asunto es sencillo: simplemente es educar. Sin ello, nada de nada, no hay otra oportunidad”.

El Tercer Festival se desarrolló bajo una carpa de circo en donde no solo fluía la risa, también las semillas. *“Circo gratuito del buen vivir, donde los niños tuvieron quizás la única oportunidad de su vida. Circo con animales en madera y tela y con chicas totalmente vestidas. Por la mujer ante todo respeto y amor: no vendemos piel femenina. Un evento sin apología al consumo irracional ni al falso desarrollo: un evento del buen vivir por el arte, por la solidaridad, por el*

diálogo. Una minga de la cultura. Participación de gentes desde Caquetá a Córdoba, en demostración de la amplitud del movimiento por el buen vivir y las autonomías populares. Otro evento que nos hizo crecer cultural, intelectual, espiritualmente, por supuesto sin RCN, Caracol, o Jorge Barón TV” - Mario Mejía Gutiérrez, oct. 2012.

A lo largo de sus hasta ahora tres versiones (todas distintas porque ha madurado de una a otra), el festival ha profundizado también en los derechos por el agua como bien común de la ciudadanía -en la defensa del páramo de Santurbán-, por una vivienda digna, por un alimento nutritivo, por el rescate de los parques barriales y zonas verdes, por el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, entender otras formas de ver la vida y específicamente desde la diversidad.

“Señoras y señores, ¡Bienvenidos al circo del buen vivir!, vengan y disfruten de los espectáculos más coloridos y magníficos: conozca a los acróbatas que van muy bien por la cuerda floja: con soltura y equilibrio sortean propuestas y acciones de sociedades justas y bien alimentadas. Habrá más sorpresas; magos que vuelven las palabras diáfanas; acróbatas jóvenes, académicos, mujeres, campesinos e indígenas que de sus sombreros hacen aparecer los sueños de un futuro posible; artesanos que desaparecen el plástico y lo transforman en canastas de cabuya, fique e iraca; campesinos y ciudadanos que galopan en la misma causa. ¡Venga con sus hijos!, traiga a los mayores, que no se quede nadie en casa, disfrute de platos y platillos elaborados con semillas orgánicas y cultivadas sin químicos”.

Este comunicado manifiesta el alma del encuentro campo-cuidad: un diálogo por la diversidad, el territorio y el mercado local de alimentos, que si bien tiene miles de nombres (campesino, indígena, estudiante, ama de casa, docente, desempleado, ejecutivo, reportero...) poseen todos un mismo apellido: comunidad. *“Señoras y señores... ¡La diversión está asegurada!”.* 🐘

**Festival de Expresiones Rurales y Urbanas²
- Dialogo por la Diversidad y el Buen Vivir -
Bucaramanga - Santander**

El Festival de Expresiones Rurales y Urbanas que se ha realizado sucesivamente desde el año 2010 en el Barrio La Joya de Bucaramanga, así como en las localidades campesinas de la Provincia de Soto (Santander), es ante todo una celebración a la diversidad cultural y a la biodiversidad de nuestro país; como homenaje a nuestras veredas y barrios, desde un espacio vital de encuentro y de diálogo que profundice el rescate de la memoria y de las identidades colectivas, en el cual podamos facilitar la articulación y el reconocimiento mutuo entre poblaciones rurales y urbanas.



Es también un proceso de educación y de sensibilización sobre los temas que constituyen nuestra razón de existir: nuestros paisajes, nuestra comida y agua, los páramos, bosques y ciénagas, la economía campesina y barrial que se encuentran en los mercados locales, las iniciativas del buen vivir que están promoviendo grupos de jóvenes, mujeres, docentes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El festival se organiza alrededor de varios ejes de trabajo: patrimonio cultural y ambiental, arte y expresión cultural, hábitat sostenible, soberanía alimentaria y mercados locales; todo ello, para demostrar por qué estamos protegiendo nuestro patrimonio ambiental y cultural.

Dentro el contexto del Festival, realizamos un trabajo en red con otros procesos y dinámicas internacionales como la Campaña "Semillas de Identidad", Amigos de la Tierra, Mujeres y Justicia Climática y la Semana Verde impulsada por la Sociedad Sueca para la Protección de la Naturaleza - SSNC; campaña de gran alcance para promover la temática del consumo sustentable, que desde el año 1990 ha promovido para que los habitantes reflexionemos sobre nuestros patrones de consumo, y hacer que las personas tomemos decisiones más responsables en términos sociales, ecológicas y culturales.

El Festival pretende revitalizar la relación campo-ciudad en un contexto regional, pero también colombiano y global, donde habitantes urbanos y rurales estamos dispuestos a no ser parte de un desarraigo de masas, y valorar nuestras propuestas y acciones, desde lo más sencillo a nivel cotidiano, hasta iniciativas que deben vincular a todas y todos los colombianos. El Festival le habla y escucha al país y al mundo: a los desempleados que ya son cada vez más, a los mal llamados informales, a las madres comunitarias, a los jóvenes, a los niños y niñas, en fin a todos aquellos, que somos parte "del común y corriente", que somos la mayoría.

² Los video-clips y reportajes del Festival de Expresiones Rurales y Urbanas durante los años 2010 - 2012 están disponibles en: <http://www.youtube.com/user/FUNDAEXPRESION>

Producción y comercialización de alimentos agroecológicos en Medellín

Una mirada desde la RECAB

Tarsicio Aguilar Gómez¹

Las escaleras eléctricas de la comuna 13, el aporte de empresas públicas de Medellín a la educación y al mejoramiento de la innovación, el transporte público, el parque Explora, el jardín botánico, el sistema metro y la inversión social a través de proyectos como los parques biblioteca y el Centro Cultural de Moravia son algunas de las fortalezas por las que Medellín el pasado 28 de febrero de 2013 fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo. Esta ciudad innovadora que hasta hace muy poco reconoció que era campo ciudad, se debate en los puestos más altos de inequidad del país.

La capital del departamento de Antioquia está localizada al noroeste de Colombia y a 1.538 metros sobre el nivel del mar, y concentra el 12% de la población colombiana. Hace parte del Valle de Aburrá que en una extensión de 1.152 kilómetros reúne a los municipios de Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Envigado, Barbosa, Copacabana y Girardota. Todos se asientan a lo largo del río Medellín y bajo la figura administrativa del Área Metropolitana concentran una población cercana a los tres millones de habitantes, de los cuales 2.1 millones viven en Medellín, en un área de 382 kms², 270 km² son rurales, 105 kms² son urbanos y 5,2 kms² en áreas de expansión.



El programa Medellín Cómo Vamos señala que de los dos millones 368 mil habitantes que tiene la ciudad, 213 mil, es decir el 9%, viven en condiciones de pobreza extrema. Otros 468 mil (el 22%) viven en situación de pobreza.

De acuerdo con la misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (Mesep), la capital antioqueña es la que registra la mayor desigualdad del país. El coeficiente Gini, que mide la diferencia de ingresos entre ricos y pobres, es de 0,53, donde uno corresponde a que solo una persona tiene todos los ingresos y el resto ninguno.

Una investigación realizada en 2009 por la Corporación Región y la Escuela Nacional

¹ I.A. Coordinador general RECAB Antioquia. Red Colombiana de Agricultura Biológica. C.e.: info@recab.org

Sindical (ENS) señaló que 368 mil personas de la ciudad estaban en condiciones de indigencia y más de 1,3 millones por debajo de la línea de pobreza

Jessica Martínez Villarreal, en su artículo Las ciudades más desiguales de Latinoamérica, menciona que en conjunto las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín y Cali y Barranquilla, ocupan el segundo lugar de las ciudades más inequitativas de América Latina.

Según el Perfil Alimentario y Nutricional de 2010, en Medellín el 56,9% de las familias se perciben con hambre, principalmente en las zonas rurales, entre sus principales causas están: falta de ingresos económicos, desplazamiento forzado y bajo nivel educativo. Estos datos que se reportan en los periódicos de la ciudad, pueden ser alarmantes para muchos, pero para otros se convierten en la ocupación cotidiana, las organizaciones de la sociedad civil que de tiempo atrás se ocupan del acompañamiento a los campesinos/as del municipio de Medellín, área metropolitana y departamento para producir alimentos de calidad ecológica que sea de acceso a los pobladores rurales y urbanos.

La red colombiana de agricultura biológica es un conjunto de organizaciones y familias que desde hace veintiún años se dedica a promover la producción y comercialización de alimentos ecológicos en el país, en el capítulo de Antioquia viene impulsando conjuntamente con otras organizaciones iniciativas de articulación de las organizaciones en este propósito de la soberanías, fortalecimiento del campesinado y de los consumidores ciudadanos, entre otras cosas más.

Los alimentos de Medellín, no se producen en su ciudad

El origen de los alimentos que llegan a la ciudad son del orden del 3% del área metropolitana, el 26% de Antioquia, el 37% de departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Córdoba y el 34% del resto del país y de impor-

taciones de otros países. Las 27 mil hectáreas con vocación agrícola representan aproximadamente un 10% del área rural de Medellín. Esta misma área representa potencialmente, en oferta de alimentos, alrededor del 2,9% de la demanda para la canasta recomendada para el año 2010 en Medellín.

En el estudio del (GICO, 2011) según datos de la gerencia de corregimientos de Medellín, éstos proveen tan sólo un 0,01% del volumen de alimentos que consume la ciudad de Medellín. Los sistemas productivos existentes son de pequeña escala, tienen limitaciones agroecológicas y socio-técnicas (riego, sanidad, mercado y organización de productores).

López (2010) en el trabajo de evaluación de la comercialización de alimentos ecológicos de subsistencia por organizaciones civiles que abastecen el mercado ecológico de Medellín, caracteriza a los productores de la siguiente manera: El 57% de la población que produce ecológicos esta entre un rango de edad entre 41 y 50 años. El 45 % de los productores cuentan con predios menores de 1 hectárea, mientras que el 39% posee predios entre 1 y 5 hectáreas. Solo 7% devengan el 100% de su sustento con la agricultura ecológica, 14% con el 80%, igualmente 7% devengan el 40% de la agricultura ecológica y el 36% devengan el 10% de su sustento con la agricultura ecológica. Para el caso de los que devengan el 70% de su sustento de la agricultura ecológica 10% buscan completar su sustento jornalando en la semana en otros predios. El 64% no cuenta con un fondo de pensiones o salud. Lo que está relacionado igualmente con el dinero devengado en la producción ecológica, el 77% paga entre 15 mil y 20 mil pesos por día laboral cuando necesita un trabajador, el 15% paga 25 mil pesos, en ninguno de los casos cubre las prestaciones legales en Colombia.

La comercialización de los alimentos ecológicos

Después de avanzar en vencer las dificultades productivas; los pequeños pro-



ductores se enfrentan a los procesos comerciales, con escaso conocimiento, entrenamiento y sin recursos que les permita competir con otros productos de la industria.

Montoya y Mondragón (2010) hablan que el manejo de la comercialización, que incluye el desplazamiento de las economías locales alimentarias; la concentración de la oferta de productos frescos, toda bajo un mismo techo; la quiebra de los pequeños distribuidores de alimentos; contratos directos y leoninos con los productores, negociados uno por uno; la imposición de normas de cumplimiento ventajosas sobre los productores y el monopolio de las cadenas productivas, son algunas de las formas como los supermercados y otros comerciantes interactúan con los productores.



Pero que hay que realizar para que estos se animen a organizarse para afrontar la comercialización de manera conjunta, los mismos autores mencionan que la rentabilidad de las operaciones comerciales.

Es la clave. “No puede haber ninguna operación que no sea considerada rentable por parte de los productores; si ello no es posible, el modelo no funciona. Esta

rentabilidad está determinada por varios aspectos, a saber:

- El valor del flete que guarda relación con el volumen transado.
- El valor final que reciba el productor por sus productos debe ser mayor que el precio que puede obtener en la puerta de la finca.
- El valor final debe tener correspondencia con el trabajo realizado en la clasificación, el empaque y todas las gestiones necesarias para la comercialización.
- Los productores deben sentir que su participación en el proceso es beneficiosa para ellos y sus familias, por la vía de la mejora en el ingreso”.

Los problemas que los y las campesinos de los corregimientos de Medellín identifican que tiene en la comercialización de sus productos los agrupamos en cinco categorías: bajo conocimiento del mercado, falta de infraestructura, escasa y débil organización, escaso apoyo político - institucional y bajos precios de venta de los alimentos. Sumado a lo anterior el relacionamiento comercial es poco, tienen compradores en el corregimiento, los cuales van directamente a la vereda a comprar los productos, disminuyendo las dificultades en relación fletes y sobre costo de transportes, para otros productores, la entrega de productos lo hacen a los comisionistas, que llevan los productos a las plazas de mercado, esto ha hecho que los productores no tengan un mejoramiento de sus economías locales.

Los consumidores ecológicos

Con respecto a los consumidores que adquieren productos en las diferentes tiendas evaluadas por el estudio de López (2010) el 77% son mujeres. El 14% de las encuestadas compra alimentos ecológicos como persona individual, mientras que el 54% pertenece a grupos familiares con entre 3 y 4 miembros; la frecuencia de consumo del 52% es quincenal, el 32% una vez por semana y 2 veces por semana el 21%. Los productos que más buscan son las hortalizas, donde el 27%

de los consumidores compra el 70% de las hortalizas en estas tiendas, mientras que solo el 5% compra el 100%. El 5%, compra solo el 10% de lo que necesita de aseo personal y de hogar. Con respecto al dinero invertido en las compras y la frecuencia de ellas se puede ver que el 27% invierte quincenalmente y el 18% semanalmente entre 10 mil y veinte mil pesos. 14% quincenal y 9% quincenal más de cincuenta mil pesos.

Ante esta situación desfavorable de la producción y la comercialización

¿Qué hacer?:

1. Trabajar en la producción de alimentos desde los campesinos, para que exista oferta para los mercados.
2. Organizarse para exigir la participación del Estado con las compras estatales a los campesinos. Para el caso de Medellín los programas son según el estudio del PADAM, 2011:
 - a. Programa de almuerzos y desayunos.
 - b. Programa de complementación al adulto mayor.
 - c. El programa es el encargado de la población de primera infancia y
 - d. La sopita.
3. La producción campesina abastece cerca del 65% de las demandas de alimento de las ciudades en el país, por esta razón, una propuesta de venta de los alimentos no debe considerarse únicamente como el mejoramiento a las ventas, reconocer el aporte de la producción campesina a la seguridad alimentaria del municipio, implica el desarrollo de políticas que favorezcan el trabajo, la economía, la cultura campesina y la permanencia del campesinado como organismo dinámico del país.

Puntos centrales del Mandato Agrario (8 de abril de 2003):

- a) Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos.
- b) Soberanía y seguridad alimentaria.
- c) Alternativas al ALCA y los acuerdos de libre comercio.
- d) Derecho a la tierra.
- e) Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria.
- f) Protección del medio ambiente.
- g) Política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana.
- h) Derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes.
- i) Reconocimiento político al campesinado.
- j) Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos.
- k) Derecho a la territorialidad.
- l) Fin al desplazamiento forzado.
- m) Solución política del conflicto social y armado.
- n) Unidad.

La comercialización campesina entonces no es un hecho económico aislado, sino por el contrario es una parte de la dinámica de la vida campesina. Pensar en los puntos centrales del mandato agrario como motor de la comercialización nos ayudaría a tener un fortalecimiento campesino y un mejoramiento del campo.

4. Trabajar la propuesta de comercialización de los campesinos de Medellín, área metropolitana y departamento se debe ir encaminado al mejoramiento económico desde el enfoque de la economía solidaria, se deben garantizar a los campesinos y las campesinas el mejoramiento de su economía y su sostenibilidad futura, para lo cual es necesario contar con una política pública para el fomento de la economía campesina sostenible por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales;



5. A nivel de Medellín, Los corregimientos y sus zonas cuentan con una estructura de acción directa reglamentada mediante el Decreto 0819 de 2009 “política pública de desarrollo rural y el distrito rural”, expedido el 26 de junio de 2009, la cual sustenta su accionar principalmente en:

- a) Acuerdo 39 de 1988 para el apoyo de mercados campesinos.
- b) Acuerdo 29 de 1991 para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria.
- c) Acuerdo 31 de 2004 que crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
- d) Acuerdo 37 de 2005 del Programa integral de fomento a la mujer rural de Medellín.
- e) Acuerdo 038 de 2005 Política pública de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
- f) Acuerdo 37 de 2006 de Política sub-sectorial integral para el desarrollo agropecuario y agroindustrial de los corregimientos de Medellín.

g) Acuerdo 16 de 2007 de Política pública de desarrollo rural y creación del Distrito Rural como instrumento de gestión.

6. Para que los productores ecológicos se articulen a las propuestas alimentarias de la ciudad se debe avanzar en el proceso organizativo, productivo y de mejoramiento de las redes de intercambio, y de acceso a la tierra. Pensando en que debe cambiarse de la políticas actuales para que funcione el plan de abastecimiento alimentario de Medellín en donde los campesinos puedan tener una real participación, al respecto los investigadores y proponentes del PADAM mencionan que se debe realizar algunos ajustes institucionales, como soporte estratégico para la puesta en marcha del PADAM y de sus propósitos dentro de la política Seguridad alimentaria y nutricional de la ciudad. A continuación se mencionan algunos:

- a) Los proyectos deben estructurarse en consonancia conceptual y coordinación institucional con los sectores de salud, educación, movilidad, desarrollo económico, desarrollo rural y medio ambiente del municipio y la región. (GICO, 2011).

- b) Desde la dimensión territorial reconocer que el enfoque regional y metropolitano planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial es fundamental para el municipio de Medellín en su tarea de “Planificar” la cadena de suministro de alimentos para la ciudad; y la operación del PADAM debe tener en cuenta el territorio, empezando por el de sus propios corregimientos. (GICO, 2011).
- c) ajustar y redefinir una estructura institucional que realice algunas tareas fundamentales de integración, donde se aproveche el proceso de modificación del Acuerdo 038 de 2005 que se viene llevando a cabo en la ciudad.
- d) Desde lo operativo, el PADAM presenta tres factores principales de vulnerabilidad del sistema alimentario:
- 1) Precario desarrollo de la red vial desde las zonas productoras, que junto con el crecimiento del tráfico automotor urbano hacen necesario fortalecer la escala local del abastecimiento, tanto en los territorios de la oferta como de la demanda y planificar y fortalecer sus modos de transporte, infraestructura y accesibilidad.
 - 2) Debilidad organizativa de los pequeños y medianos productores, transformadores y comerciantes que dependen de otros agentes para movilizar sus mercancías y no muestran capacidad para escalar las operaciones de oferta y demanda, con sus consecuentes reflejos en ineficiencia, baja productividad, altas pérdidas y precios altos para el consumidor. Ello hace necesario trabajar los temas de redes para el comercio y distribución de alimentos y sus estrategias de Asociatividad y conectividad.
 - 3) Aunque existe potencial productivo en la ciudad y la región hay dudas sobre la capacidad misma de las actuales cadenas para responder desde su propio territorio a los incrementos e demanda asociados a la canasta deseable de la ciudad. Todo esto debido a la presión urbanizadora que sustrae zonas fértiles para la producción de alimentos, y zonas de protección propias para la producción de agua y paisaje, para usos de construcción con altos riesgos asociados. (GICO, 2011).

Bibliografía

Grupo I+D+I: Logística Industrial Organizacional “Gico”. 2011. Síntesis del diagnóstico y diseño del plan de abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudad de Medellín –Padam– Convenio Inter-Administrativo Número 4600028862 de 2010 Alcaldía de Medellín. Documento digital. 175 p

ILSA. 2010. Mercados campesinos Y la región Central de Colombia. Hacia una política pública de apoyo a la economía campesina (Memorias seminario: La economía campesina en la región Central de Colombia)

Montoya, Gloria y Mondragón, Héctor. 2010. Los Mercados Campesinos, Comercialización alternativa de alimentos en Bogotá. En Cuadernos Tierra y Justicia Serie 2, N° 13, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, Bogotá. 46p

Montoya, Gloria. 2011. Entrevista a los mercados campesinos en la ciudad de Bogotá, agosto 2011. Notas de la entrevista.

Gil Zapata Patricio y otros. (2011) Presentación del Diagnóstico y diseño del plan de abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudad de Medellín –Padam– Convenio Inter-Administrativo. Número 4600028862 de 2010 Alcaldía de Medellín. Biblioteca Belén septiembre 20 y Auditorio Concejo de Medellín septiembre 23.

La experiencia de agrosolidaria El buen vivir en la relación campo-ciudad

Grupo Semillas

Agrosolidaria surge de una sumatoria de preguntas que se hicieron un grupo de personas asociadas a los movimientos sociales y populares, hace casi treinta años, sobre hacia donde podían enfocarse el ímpetu de liderazgo comunitario que surgía en esos momentos y todas las inquietudes concluían en que las injusticias en Colombia coyunturales e históricas nacieron en la forma como se venía tratando al campesinado, los indígenas y pobladores rurales y que por tanto allí había que hacer un gran esfuerzo.

En su indagación se acercaron a experiencias latinoamericanas, que se habían formulado las mismas preguntas y estaban en el proceso de generar bienestar en las zonas rurales. Experiencias como *Maquita Cusunchic*, Comercializando como hermanos, el Salinerito en el Ecuador; la Central de Servicios Cooperativos del Estado Lara, en Barquisimeto, Venezuela (CECOSESOLA); la Red de Comercialización Comunitaria (COMAL) en Honduras; la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) les proporcionaron las herramientas para conformar una experiencia propia de organización que lograra que los trabajadores del campo pudieran vivir dignamente.

Con estos insumos se logró construir una estructura focalizada en Tibasosa y Sogamoso, que pronto se expandió a otros municipios de Boyacá, como Socotá, Jericó, Tipacoque, Gameza, Tota que lograron integrar una red. Según Mario Bonilla, director de Agrosolidaria, “El nombre nos explica nuestro fin de buscar soluciones solidarias al campo, pero en el imaginario



existen la tendencia a confundir la solidaridad con la caridad o la generosidad. Solidaridad es ser sólido, recíproco. Uno puede ser generoso y caritativo como individuo pero la solidaridad es un concepto social”.

El modelo de Agrosolidaria plantea un circuito basado en cinco eslabones:

1. Finanzas solidarias.
2. Producción asociativa y agroecológica.
3. Transformación asociada.
4. Distribución solidaria.
5. Consumo consciente y responsable.

“En algunas seccionales del país, está más desarrollado más que en otras, en algunas está construido el circuito completo en otras dos o tres eslabones”. Boyacá debido al trabajo y la reiteración, logró por completo construir en muchos municipios el circuito y este modelo pronto se diseminó por todo el país.

La estructura está basada en principios federativos, por lo cual se promueve un modelo descentralizado, con autonomías propias y a la vez interdependencias asociadas, “actuar como uno, siendo muchos”, una unidad de nombre y una diferenciación del apellido, por eso Agrosolidaria-Tibasosa y Agrosolidaria-Riohacha son estructuras autónomas administrativas y financieras comunes, pero con singularidades filosóficas y axiológicas.

En ese orden, el trabajo inicia en la familia, cuando en el modelo instituido se busca romper las relaciones familiares. La idea es juntar a la familia, motivar una herencia en los procesos, con lo cual el trabajo y la unidad familiar puedan sostenerse en el tiempo. Luego vienen los grupos asociativos divididos por productos, procesos y servicios. Por producto se conforman grupos asociativos, es el caso de la quinua, organizados como productores de quinua, pero pueden existir casos asociativos genéricos, como los cultivadores de hortalizas, donde pueden encontrarse veintenas de productos diferentes. Por proceso, son grupos asociativos de transformación que toman un producto y le hacen cualquier tipo de mejoramiento y por servicio, donde a la vez encontramos finanzas solidarias y distribución.

En Agrosolidaria no se habla de intermediarios, sino de distribuidor justo, por eso su lema es “precio justo para el productor, precio justo para el consumidor, margen justo para el distribuidor”. En este sentido se promueve una distribución constante y ágil que permite a los productores llegar sostenidamente a los consumidores. Esta dinámica de trabajo diario conlleva a que los alimentos perecederos, como la mora, que si en tres días no llega al consumidor se pierde, o los huevos que

no pueden durar muchos días almacenados, lleguen a su destino.

Actualmente Agrosolidaria se encuentra distribuida en 17 departamentos, con una red en construcción “donde se teje y se desteje a diario, un proceso de construcción con una perspectiva de permitir caminar a muchas personas”. En su análisis del campo colombiano, Mario Bonilla sostiene que en la zona andina existe una cultura solidaria agroalimentaria, por la densidad de población campesina. Eso explica la expansión de Agrosolidaria en Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Risaralda, parte del Valle, Caldas, Quindío, Boyacá, Santanderes y Cundinamarca. En contraste, la Costa Atlántica, Orinoquia, Caquetá, Amazonas, y el Putumayo debido al desarrollo del conflicto armado se ha afectado el tejido social y las confianzas, mermando las solidaridades. Existe en estas zonas otra motivación, la locomotora minera que viene desestimulando la producción de alimentos, pagando jornales muy altos, que llevan a los jóvenes a desvincularse de las labores del campo y resolviendo en corto plazo, las necesidades de estas personas.

Fortalecimiento local

La idea de cooperativismo que despegó en los años sesenta y que promovía este tipo de asociaciones de consumidores, no prosperó en Colombia por la coyuntura de la guerra. Los intentos de redes se desligaron de la fidelidad de los consumidores y hoy quedan en pie muchos lugares físicos como las plazas, en los que encontramos esporádicos productos y consumidores. Los lazos solidarios estuvieron rotos por mucho tiempo y poco a poco asistimos a una época en que se recomponen, pues la relación campo-ciudad, basada en principios solidarios, da beneficios recíprocos.

Agrosolidaria ha marcado con su trabajo un interés por promover el consumo de productos agroecológicos en las zonas rurales. “Nuestra idea es fortalecer mercados locales, por eso nuestro sistema en Bogotá no es tan fuerte. Creemos que lo producido en las seccionales, no debe re-

correr grandes distancias con el pretexto de mejores precios. Hay una decisión política en vender localmente, tener ese compromiso de kilómetro corto. En la ecología se va más allá del cuidado del cultivo y la cosecha, el enfoque se pregunta si es necesario recorrer 240 kms para entregar un producto, cuando estos los podemos vender a treinta o cuarenta kms a la redonda, por el tema del impacto, el uso de empaques, las cadenas de frío, la gasolina, etc.”.

En esta medida, resulta prioritario el acercamiento a los productores del anillo de Bogotá-Región. Bogotá, una ciudad de nueve millones de habitantes requiere de comer sano. Desde Agrosolidaria se está planteando una agricultura ecológica para Bogotá que debe desarrollarse en su anillo más cercano de municipios vecinos. Contrario a la visión de los mercados campesinos, que sostienen la idea de que los agricultores puedan vender sus productos en Bogotá directamente. Según Mario Bonilla, “esto es imposible, puesto que es un acto intermitente e insostenible en el tiempo”. Para Agrosolidaria, Bogotá requiere grupos asociativos de distribución y consumo, conscientes, justos y solidarios, contruidos por los consumidores en alianza con los productores del campo.

Grupos con una organización y logística para estar recibiendo sostenidamente unos productos y distribuirlos con la continuidad y velocidad requerida para que el capital regrese al campo en esa misma celeridad de tiempo. “El productor debe dedicarse a producir, el distribuidor a distribuir, generando solo un eslabón de distribución pues la injusticia en el modelo no es que existan los intermediarios, sino que hay muchos que encarecen los productos y rebajan las ganancias de los productores”.

Consumo sano

Agrosolidaria trabaja actualmente en el tema del consumo, donde se deben redoblar esfuerzos y se requiere un trabajo especializado. Al revisar históricamente la mayoría de programas planteados tanto por las ONG como el gobierno, se centran

en organizar la producción y los productores y sobre la oferta hay muchas metas superadas. Sobre la demanda en las ciudades, en cambio, falta mucho por hacer y son pocas, e inexistentes casi, las experiencias en organización de los consumidores.

Agrosolidaria ha sido pionera en este aspecto. “Estamos organizando los consumidores para que exista una relación complementaria y armónica con la demanda” y se pregunta Mario Bonilla, “¿De qué sirve la producción solidaria si ingresa a un mercado libre e insolidario?”.

Falta mucho trabajo, pero apuestan a que se establezcan en un futuro cercano organizaciones de consumidores que fomenten las relaciones por medio de una demanda alimentaria con las organizaciones de productores y que estos vínculos generen espacios que conlleven a un comercio popular y justo. Significa asociaciones de consumo responsable y solidario, lazos de acercamiento de los procesos, redes entre productores y consumidores agrupados que generen espacios y que conlleven a administrar puntos de distribución y nuevas alternativas de economía justa y solidaria en las ciudades.

La producción agroalimentaria tiene también unos elementos fundamentales: tierra, agua, semillas y los agricultores, todos a un mismo nivel de importancia. Por eso el consumidor debe estar consciente que invertir en estos procesos es defender el agua, las semillas, la sostenibilidad del trabajo de cientos de generaciones de agricultores. “Tenemos un gran reto como sociedad, pues la diversidad gastronómica se está perdiendo, y hay una tendencia a una pobreza alimentaria en los consumidores. La presión es tan poderosa, como la ejercida por las multinacionales de semillas. Los agricultores que cuidan semillas de tubérculos andinos, como la ruba, los cubios, la soca, dejan de encontrar mercados, las demandas que tenían anteriormente han menguado y de esta forma el cocido boyacense se está reduciendo a dos o tres tipos de papa, frijoles y maíces, cuando antes se tenía una gran variedad”.



Mercados campesinos de Bogotá una utopía en la realidad

Julio Armando Fuentes¹
Julián Corredor²



Esta propuesta se gesta desde las organizaciones campesinas para atender al llamado de sus integrantes. Se piensa en la posibilidad de iniciar un proceso de interlocución con la administración pública que permitiera establecer un canal de comunicación permanente que diera paso a la construcción de propuestas que beneficiaran los intereses de ambas partes. Esto fue la génesis del Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC), que resultó de la integración de las organizaciones sociales agrarias.

Hace nueve años, los mercados campesinos era tan solo una idea que rondaba al interior de las diferentes organizaciones campesinas nacionales de la región central del país ante la necesidad de incidir en la formulación de un Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá y los municipios que la circundan y de construir un mecanismo alternativo al problema que tiene la gran mayoría del campesinado: la comercialización de sus productos, el fortalecimiento de la economía campesina y la generación de procesos organizativos, políticos y culturales. Así surgió esta iniciativa que buscaba reivindicar uno de los sectores más importantes del país, la producción de alimentos y su actor principal, el campesinado.

Con la constitución de este comité, en 2004 surge la idea de realizar un mercado campesino en la plaza de Bolívar como mecanismo para manifestarle a la administración sobre la existencia de propuestas desde el campesinado en la producción de alimentos y el abastecimiento de los productos del campo a la ciudad, al igual que su visibilización.

Es así y desde el marco del primer mercado campesino en la plaza de Bolívar realizado en el mes de noviembre de 2004, los campesinos de la región central del país han tenido la oportunidad de traer sus productos directamente y de primera mano a los consumidores bogotanos, contando desde el principio con la partici-

¹ Miembro de la comisión política de la Mesa Nacional de Unidad Agraria. C.e.: mesadeunidadagraria@gmail.com

² Coordinador mercados campesinos.



pación de las organizaciones campesinas y con el apoyo de ong y posteriormente de las instituciones de las administraciones gubernamentales, entidades que aún hoy acompañan este proceso.

Con anterioridad estas organizaciones campesinas se proponían desarrollar el “Mandato Agrario³”, que en desarrollo del punto dos sobre soberanía y seguridad alimentaria y el punto cinco, sobre la reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria, plantean la defensa de la economía campesina. Junto a otras organizaciones participantes de todo el territorio nacional, establecieron la tarea específica de crear mecanismos que facilitaran la comercialización de productos del campo, generando procesos de construcción de soberanía y autonomía alimentaria que garantizaran el fácil acceso a los alimentos por parte de los habitantes de la ciudad, toda vez que ello permitiría generar puntos de encuentro entre las comunidades para establecer luchas permanentes que visibilizaran problemáticas concretas como: la exigencia del mejoramiento de la vías veredales, la eliminación de la intermediación en la comercialización de los productos del campo, el fortalecimiento y creación de políticas públicas sociales que dieran paso al reconocimiento de la economía campesina y demás luchas que complementan la actividad organizativa.

En el desarrollo del punto seis del Mandato Agrario, que ordena la protección del medio ambiente, debemos anotar que el campesinado ha propendido por mantener el equilibrio en los ecosistemas a través de sus prácticas de cultivo y cosecha de los productos del campo, por ser una producción de pequeña escala. El compromiso del CICC, impulsor de los mercados campesinos en Bogotá y la región, junto a la campaña Semillas de Identidad y los defensores de las semillas, ha sido la defensa de las semillas nativas y su conservación, cuando el campesinado participante se ha comprometido con

el proceso porque encuentra en él una forma para defender los ecosistemas y la naturaleza y su existencia en el campo, al igual que para percibir nuevos ingresos y mejorar así su calidad de vida.

La ardua labor del campesinado y de sus organizaciones, ha permitido la continuidad del proceso en la actualidad, sin embargo como era de esperarse, nada ha sido fácil. La intermitencia de la administración pública ha sido la constante, el cambio de las administraciones locales y el paso a nuevos funcionarios han generado retrasos temporales, mientras se vuelven a aclarar los objetivos y fines del proceso; otro elemento ha sido las dificultades presentadas con algunas alcaldías municipales de la región, ya que en algunas de ellas se ha contado con poco apoyo institucional. Pese a ello, no hay que desconocer el apoyo incondicional de otras, que han facilitado recursos para la movilización de los campesinos de sus municipios a la gran ciudad. Un elemento final lo constituye la concientización del campesino, en cuanto hace falta más educación por parte de las organizaciones.

Aquí vale la pena anotar que muchas de las organizaciones han abierto espacios de incidencia en municipios donde antes no había presencia, por ende, los campesinos permanecían expuestos a la politiquería y al asistencialismo de programas nacionales, que impedían establecer criterios organizativos alternativos. Esto puede denominarse como uno de los grandes avances, pues de algún modo se ha logrado hacer injerencia en las políticas municipales a través de acuerdos de apoyo a la economía campesina aprobados por los concejos municipales y decretados por los alcaldes locales. En estos se reconocen la importancia de la economía campesina y su papel en la producción de alimentos, su distribución y en el consumo de las mismos para la seguridad alimentaria de la población en las grandes ciudades.

³ Documento mandato emanado del Congreso Nacional Agrario realizado en el mes de abril año 2003, de 14 puntos que expresa el resultado de sus discusiones y expresa las decisiones de las comunidades rurales del país.



Pero los mercados campesinos no se queda allí, pues, las organizaciones del Comité de Interlocución Campesino y Comunal - CICC, la Mesa Nacional de Unidad Agraria -MUA- y los procesos y organizaciones de la región central del país, durante el segundo semestre del año 2012, impulsaron una serie de foros en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Meta y Boyacá que contó con la participación de la ruralidad de Bogotá. En ellos se trataron cuatro ejes temáticos: economía campesina, soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, identidad campesina y economía extractiva (minería), esto con el fin de recoger de primera mano las inquietudes de la población campesina, las cuales tuvieron la oportunidad de debatir todas las inquietudes que los embargaban, mediante la interacción y comparación de situaciones similares.

Los mencionados foros y encuentros eligieron sus delegados al Primer Congreso Agrario de la región central del país, finalizar el segundo semestre de 2012, realizado en la ciudad de Bogotá, el cual reunió a delegaciones de cada uno de los departamentos ya mencionados. Podemos decir que contó con la más am-

plia participación, como también con el acompañamiento y compromiso de la administración distrital de Bogotá a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y que las conclusiones trazan un quehacer a partir de las propuestas recogidas.

A partir de los avances logrados con el constante accionar y las iniciativas de los dirigentes del CICC y las organizaciones que lo integran, se logra que el Concejo Distrital apruebe el acuerdo distrital 455 de 2010, que respalda la realización de los mercados campesinos como política pública de la capital de la república y la celebración del día del campesinado, el cual se deberá realizarse en la plaza de Bolívar de Bogotá con aporte de la administración y el gobierno de la ciudad. Este documento oficial toma a mercados campesinos como una plataforma para el fortalecimiento del plan maestro de abastecimiento de la ciudad.

Futuro de los mercados campesinos, apuestas políticas y de organización

Enmarcado en el rescate y visibilización de la soberanía, autonomía y seguridad



alimentaria, necesaria para el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de las zonas rurales, reconociendo sus formas de producción, el rescate de las semillas nativas, la producción agroecológica y la cultura campesina, que se contraponga al uso de las semillas transgénicas, impuestas por el mismo modelo económico neoliberal que exige unos estándares comerciales establecidos entre transnacionales y gobierno nacional, mercados campesinos se propone continuar su desarrollo, realizando sus mercados quincenalmente en los parques donde la presencia permanente es reconocida por sus habitantes, al igual que en la plaza de Bolívar de Bogotá.

La importancia de evaluar, hacer balance y seguimiento al mandato⁴ de la región central, con los participantes de su primer congreso, a fin de establecer si se está dando cumplimiento de los compromisos emanados de este, es cada vez más relevante, más aun cuando, las discusiones sobre el tema agrario están hoy a la orden del día a propósito de las conversaciones que adelanta el gobierno nacional y la insurgencia en la Habana - Cuba.

Las organizaciones campesinas consideramos que los acuerdos, producto de esas conversaciones, puede acelerar la búsqueda a la solución a los grandes problemas que afectan el campo colombiano y de la región, por ejemplo, frenar el acrecentamiento de la concentración y despojo de la tierra, el afianzamiento de las políticas neoliberales de libre comercio que excluyen la producción campesina y las amenazas sociales y ambientales para los territorios campesinos y étnicos a causas de las locomotoras minera-energética, de infraestructura y la del desarrollo agrario, que mediante mecanismo de extranjerización de la tierra⁵ o derecho real de

superficie⁶ como motores del desarrollo hegemónico del actual gobierno, acaban con la economía campesina y expulsan a los productores campesino pequeños del campo.

En el futuro el proceso de mercados campesinos guiado por las organizaciones del campo, deberá continuar con su aporte al fortalecimiento de la economía campesina y la economía familiar, ya no solo en la región central del país, sino en el marco de la formulación de una política nacional agraria y políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria, donde los campesinos organizados puedan acceder a programas y proyectos para el fortalecimiento de procesos de iniciativa de las comunidades que beneficien y garanticen la producción sostenible de alimentos en el tiempo, con acceso a diferentes formas de comercialización y mercados alternativos, para el aporte e implementación de mercados justos, donde se beneficie a las comunidades a través del fortalecimiento de esa economía familiar campesina, se mejoren sus mecanismos de comercialización a través de procesos de producción agroecológica que beneficie también a los consumidores.

La defensa de la economía campesina y familiar a propósito de que la FAO ha declarado el año 2014 como de la economía familiar.

Será otra acción a desarrollar, por parte del proceso que las organizaciones adelantan con mercados campesinos, acción conducente a la declaratoria de la alimentación como derecho, pues, los procesos de producción y comercialización de los alimentos están encaminados a generar ganancias que terminan en pocas manos, mientras en la periferia de la ciudad sus habitantes padecen hambre. 🐼

⁴ Propuesta escrita en el documento publicado por Ilsa, titulado "Memorias del primer Congreso Agrario de la región central de Colombia".

⁵ Proyecto 164 de 2012 aprobado en primer debate en la comisión V del Senado el pasado mes de mayo, quedando listo para segundo debate en la plenaria en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio de 2013.

⁶ Figura en el proyecto de tierras del gobierno nacional, que propone el arrendamiento para la producción de monocultivos para la exportación (Palma aceitera, teca y otros).

Sembrando con Gaia soberanía alimentaria en la ladera de Cali

María Fernanda Gil Claros¹
Gloria Stella Henao²



El equipo comunitario de ladera por la promoción de la vida y la salud-Ecolprovys es una organización de base social, expresión de procesos de autogobiernos dignos, autónomos, que caminan la resistencia para la vida, frente a modelos de sobrevivencia que atañen a la ciudad, al país y a la ladera de Cali. En este proceso, la familia es el actor social y político con un ejercicio ético y coherente de la palabra, puesto que nos atrevemos a construir voluntades de vivir que dignifican la vida en momentos de hambruna y recrude-

cimiento de la pobreza acentuada por la corrupción y la acumulación desmedida del capital.

Ecolprovys lo constituyen cien familias que han sufrido el rigor del desplazamiento y la violencia. Estamos organizados en seis grupos, distribuidos en la zona de Ladera de la ciudad de Cali: comuna uno (Alto Aguacatal), comuna dos (Alto Menga), comuna dieciocho (Alto Jordán, Alto Meléndez, Alto Los Chorros, Alto Nápoles), zona rural (corregimiento de la Buitrera, sectores Altos del Rosario).

¹ Directora Corporación Ecolprovys. Candidata a Doctorado en Filosofía Integral. C.e.: mafedarte@gmail.com

² Representante legal Corporación Ecolprovys. C.e.: glorihen@gmail.com



Nuestras apuestas sociales y políticas son “Constituirnos como sujeto familia-comunidad, constituyendo ejercicios de autogobierno, que al reconocer la diferencia y la exclusión, propendemos por la dignificación de todas las formas de vida, restituyendo al sujeto familia-comunidad como el tejedor principal de territorios afectivos donde la palabra - acto despierte pensamientos vivos y propuestas libertarias para la transformación de nuestras condiciones humanas de vida”³. Desde 2004 hasta hoy, se tejen cinco líneas de acción: 1. Escuela de autoformación para la vida, 2. Sembrar para la vida, 3. Nutrición, 4. Amor animal, y 5. Fondo de solidaridad.

Este proceso es autónomo y autogestionario de actos clientelistas; se fundamenta en su organización para la acción colectiva de los grupos familiares, en la diferencia de los saberes, talentos, deseos, en las solidaridades y las mingas; por lo cual no reivindica estructuras verticales, ni de liderazgo.

La familia como actor fundamental del proceso moviliza el pensamiento y la acción con la palabra como expresión del pensamiento vivo acompañante pedagógico de la fuerza de la voluntad de vivir, sin miedo a exponerse hacia la fecundidad de lo posible, la potencia creativa y afectiva. Cuando rescatamos la familia como territorio afectivo lo hacemos reconociendo la vida como expresión de formas humanas y no humanas, donde está la planta, el animal, la bacteria, lo humano que desde la coexistencia construyen propuestas desde el hogar, el conversatorio, el huerto, la esquina, la calle.

Escuela de autoformación para la vida: La escuela es expresión del proceso emprendido por las voluntades familiares-comunitarias en el reto de generar pensamientos vivos y críticos en los que se realicen acciones que rompan con el conformismo y trasciendan la necesidad del sobrevivir, por la idea de fortalecer las voluntades de poder, la autonomía y mejorar unas condiciones de vida, en el que

es fundamental la autoformación en el camino de construir saberes colectivos desde la palabra afectiva y las lecturas críticas de la realidad, nutridas por la experiencia de la cotidianidad de los grupos familiares, posibilitando así generar propuestas de vida incluyentes “en el cual se construyan otros mundos donde el amor prime sobre el capital, donde no hayan líderes más que tu y donde la única razón de lucha sea la vida”.

La escuela actúa como el alma del proceso, aparece para fortalecer el pensamiento de Ecolprovys, desde el conversatorio, la escucha y la pregunta, que permitan ir aclarando las situaciones de vida, en la intención de recuperar la palabra viva de las familias-comunidades; nuestra escuela no tiene muros, ni profesores sino que es itinerante circulando en las situaciones vitales de los mundos de las familias de ladera en los hogares, los grupos y con otras organizaciones amigas acompañándonos a aclararnos el sentido ético de la vida.

Sembrar para la vida: Retornamos a sentir la tierra como un ser vivo, siendo nuestras prácticas orgánicas y biológicas dinámicas la forma de no agredir la tierra y su vida. En el momento contamos con cinco huertos colectivos en lo urbano complementados con las fincas que sostiene el grupo de familias que está en lo rural y 100 huertas familiares, tenemos biofábricas donde se elaboran abonos sólidos y líquidos, recuperamos semillas de resistencia propias de la alimentación de nuestros pueblos y trabajamos en minga. El proceso de siembra se ha consolidado desde el compartir solidario de lo producido y de realizar trueques de canastos verdes complementados con productos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca “ACIN”; esta iniciativa ha permitido tejer y avizorar la siembra como un generador de alimentos primarios de hortalizas, verduras y leguminosas, complementarios a la dieta y a la canasta familiar, siendo esto uno de los elementos que posibilitan generar propuestas

Tejemos un mundo posible donde el amor-pasión prime sobre el capital, donde no hayan líderes más que tú.

Ecolprovys

³ Acta de constitución, como corporación colectiva Ecolprovys (2010).



alternativas frente a problemáticas como la malnutrición, el desempleo y la salud, identificadas en los sectores en los que se encuentra Ecolprovys.

En este encuentro con la madre tierra retomamos criterios éticos y políticos de la resistencia para la siembra desde el pensamiento para la vida como son:

- Retornar a la madre tierra como un ser vivo en el que se empieza a conversar con lo no humano.
- Sembrar para el autoconsumo y en forma colectiva a través de mingas.
- Distribución de lo cosechado a través del trueque.
- Recuperación de semillas nativas.
- Recuperación de los saberes ancestrales y colectivos.
- Gusto por la siembra y disposición de construir con los otros.
- Fortalecimiento del proceso de siembra en los huertos familiares y comunitarios.
- En los huertos y huertas, hemos encontrado en las familias gusto por acariciar y fertilizar la tierra, generándose el reto constante por alimentarla...

Los frutos que estamos cosechando:

Rescatamos y recuperamos semillas de: habichuela común, habichuela costeña, 12 especies de frijoles, maíz, lechuga, cimarrón, cilantro. Reconocimos las especies que mejor se han dado en huertos y huertas. Siembra y consumos de diversas aromáticas. Recuperación de la tierra con abonos orgánicos. Montaje de biofábricas: abonos sólidos y líquido. Montaje y funcionamiento de 5 huertos y 50 huertas familiares. Alianzas con los compañeros indígenas de la ACIN. Trueque de canastos verdes en los cuales se le entregan a las familias del proceso alimentos orgánicos producidos desde el trabajo solidario, lo que potencia actitudes éticas de las familias en la consolidación de una propuesta de vida.

El fondo de solidaridad: “Nuestro capital son las voluntades y los afectos, construimos desde el amor pasión que le da sostenibilidad a nuestra propuesta, actuamos

desde criterios que construimos y asumimos.” Asumimos el reto de manejar y distribuir sus propios recursos materiales y repensarnos los recursos inmateriales para lo cual se fortaleció el trueque, las mingas, los saberes individuales y colectivos rescatando para ello lo creativo y la innovación de la propuesta de la organización de base y mirar una economía para consolidar y fortalecer propuestas de vida y no para producciones acumulativas, confrontando a través de dicho ejercicio, el tipo de economía actual en el que se prima el capital antes que el bienestar de la población.



Amor animal: “Pensamos que las plantas, y los animales son nuestros hermanos menores, por ello coexistimos con ellos sin sentirnos superiores, consideramos que no son mascotas sino un miembro más de nuestra familia que debemos amarlos y protegerlos”.

Al compartir la mirada del proceso de resistencia de Ecolprovys y de tejer la soberanía alimentaria en el contexto urbano-rural de la zona de ladera de la ciudad de Cali, hemos requerido aclararnos el concepto de resistencia: ¿A qué se hace resistencia? y ¿Cómo se comprende la resistencia?

En el contexto organizativo, resistencia es defender en nuestro presente, la vida, fundamento filosófico, metodológico y de la acción política, en un presente donde

el capitalismo instala sobre la vida el poder del miedo, se hace indispensable repensar y preguntarse: ¿Qué es la vida? Y sobre el sentido de la vida.

Para acciones comunitarias que se piensan de cara a condiciones humanas y no humanas, *la vida es resistir*; no desde el *aguante*, ni donde el ser humano renuncia a sí mismo para entregarse a una promesa de vida postergada en un más allá; tampoco es la resistencia del *asalto*, que reivindica la sobrevivencia diaria y el modo de ser individualizantes.

La vida es tejer acciones éticas y políticas permanentes, desde el *coraje* de saber tejer y/o luchar desde lo impredecible de los acontecimientos, bajo la claridad de construir el presente desde un pensamiento vivo, generado desde el saber propio, fortaleciendo la voluntad de vivir y la transformación de los mundos. En este entramado abordamos tres trazos:

Primer trazo: Cuando se habla de sembrar para la vida, aparece la relación: **tierra - vida**, que nos lleva a repensarnos ¿Cuál es la relación entre los humanos y la naturaleza?, ¿Qué es el humano? ¿Qué es la tierra?, ¿Son distintos?, Estas respuestas nos llevan a mirar y tratar la tierra como un ser vivo. En el que la coexistencia de seres menores –microorganismos, microbios– y seres mayores, se da en una relación de holarquía⁴, y por ende la tierra-ser humano, antes que establecer una relación jerárquica, requiere de una relación de combinación, recombinación, de acoplamientos.

Se hace por ello necesario reconocer a Gaia, Pachamama, o madre tierra, como lo vivo, hablar de la tierra como un ser vivo, es aclararse, desde el coraje y la no pereza; lo terrígeno, lo vital, lo fluido, lo blando, que se expresa en materia energizada, y articula lo cósmico y la naturaleza.

Lo terrígeno implica emprender el camino ético de cuidar la madre tierra, de



comprender la sabiduría que existe en ella y desmitificar la lógica instrumental, del uso rentable y productivista de la tierra, que nos impide una relación armónica con ella. Entonces, se hace necesario repensar una propuestas de soberanía alimentaria de-construyendo la ética y la política basada en el uso rentable de la tierra y solo para el uso exclusivo de las grandes transnacionales de agroquímicos, la industria de alimentos y, así mismo se debe repensar hacia el rescate y distribución de la tierra para quien la pueda cultivar, enfatizando en las formas como se cultiva, porque vivir en coexistencia es hacer de la siembra para la vida, un modo de vida.

El otro aspecto que aparece en este primer trazo, es el territorio, el cual –como lo plantea Deleuze– es creado por lo humano y no humano, construido más allá de lo geográfico administrativo, para posarse en lo afectivo, en los lazos solidarios y en el tejer comunidad. En el proceso de Ecolprovys la construcción del territorio no ponen como centro o punto de discusión las gobernabilidades duras, y ausentes de vida, ni tampoco la edificación de li-

⁴ Holarquía, relación horizontal.

derazgos, sino la constitución de familias, grupos, círculos de amistad, que no miran la tierra desde lo productivo de la propiedad sino que la viven desde el caminar la palabra como acto, que al decir se hace y al hacerse se teje con los actos libertarios de los espacios de goce –los rituales, los festivales de trueque, los cantos– y el caminar del pensamiento vivo de la escuela de autoformación para la vida.

Para Ecolprovys esto ha implicado la adecuación de espacios en nuestros barrios y hogares, que se tejen como territorios afectivos: 5 huertos colectivos, 50 huertas familiares, permitiéndonos rescatar, cosechar y compartir frijol, sidra, papa, zapallo, variedades de tomate, cebolla larga y habichuela, alimentos que hacen parte del trueque de canastos verdes, siendo este un festival/fiesta en la que la ladera se viste de colores, olores y sabores, donde nuestras familias ofrecen y comparten las mejores cosechas de los territorios afectivos, en el que la semilla es expresión de resistencia, de autonomía, de vitalidad, siendo el rescate un compromiso para proteger nuestros alimentos de agro tóxicos y de la manipulación genética.

Este es un territorio nacido de la paradoja: *¿Cómo en un lugar donde no hay suelo para sembrar se construye el pensamiento vivo? ¿Cómo un territorio poblador de acciones de rescate de lo andino, del custodio de semillas, una autoalimentación sana, repiensa el territorio en encuentros afectivos de amistad?*

El segundo trazo parte de la pregunta: ¿Es adecuado, en el marco del rescate de la tierra como ser vivo, hacerlo exclusivamente desde la disputa jurídica, que no permite salir de la propiedad, del uso rentable propuesto por la macro economía.

Resulta llamativo mirar como en gobernabilidades neoliberales se mira la política pública, centrada en una disputa de presupuesto, donde lo que menos importa éticamente es el trato con la madre tierra, como bien lo planteo Evo Morales, en la carta a los pueblos indígenas: “La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas

no estamos en venta”, y la necesidad de reconocer los derechos de la madre tierra.

Para restablecer la armonía con la madre tierra, el camino no es ponerle precio a la naturaleza sino reconocer que no sólo los seres humanos tenemos derecho a la vida y a reproducirnos, sino que también la naturaleza tiene derecho a la vida y a regenerarse, y que sin la madre tierra los seres humanos no podemos vivir.

El Tercer trazo mira la construcción de gobiernos locales, que trabajan lo singular: el hogar, las esquinas, los barrios y se oriente en las prácticas de trato a la madre tierra como ser vivo, donde el pensamiento y la palabra estén comprometidas con lo ético y el rescate de la autonomía de las familias-comunidades, cobrando fuerza el desarrollar una filosofía práctica, de acompañar a ese otro a cuidar de sí a través de la palabra como acto y de esta manera potenciar el cuidado de la madre tierra.

Por ello, Ecolprovys al sembrar para la vida en el ejercicio de la soberanía y la autonomía alimentaria, no pretende volver agricultores a las familias y comunidades de ladera, pero sí le apuesta a des-pertar actitudes de vida que al mirar a la madre tierra como un ser vivo, tomen el riesgo de construir colectivos tejedores de la palabra acto y de una tierra para todos donde las dualidades urbano-rural no existan. 🌱

Bibliografía

- Deleuze, Guilles y Guattari, Félix. Mil Mesetas, 1994. Valencia: Pre-Textos, 522 p.
- Focault, Michel, 2009. El Gobierno De Sí y De Los Otros. México: Fondo de Cultura Económica, 429 p.
- Ecolprovys, Audios, 2005-2006-2009-2010.
- _____. Videos 2009-2010.
- _____. Memorias de la escuela de autoformación para la vida, 2006-2012.
- _____. 2007. Diplomado pedagogía vivencial y salud familiar, Universidad Santiago de Cali.
- Kirshnamurti, Jiddu, 2007. La educación y el significado de la vida. Madrid: Edaf, 145 p.
- Lovelock, James, 2000, Las edades de Gaia. Barcelona. Matemáticas 29, 266 p.
- Margulis, Lynn y Sagan Dorion, 1995. ¿Qué es la vida? Barcelona. Matemáticas 45, 207 p.

GRUPO TERRAZA: Cultivando biodiversidad en los techos de la Universidad

Francisco Restrepo¹

El Grupo Terraza son estudiantes de la Universidad Javeriana que poseen un interés particular en la agricultura urbana y que tienen ese nombre porque han convertido la terraza del Edificio Pedro Arrupe S.J. en un gran techo verde.

La idea surgió de un grupo de estudiantes que entre clases se reunían a conversar sobre la soberanía alimentaria, pero una cosa era hablar sobre ello y otra muy diferente cultivar. Algunos ya venían en un proceso de agricultura urbana en sus hogares y por ello propusieron al padre Alfonso Castellanos trasladar sus experiencias a la terraza.



Este espacio apropiado por La Terraza comienza a causar interés en el resto de los alumnos, pues allí se va forjando este grupo que se ha convertido en un espacio de apropiación de los estudiantes a la universidad.

Un grupo de estudiantes de antropología de la Javeriana, en un encuentro campesino realizado en la Universidad Nacional conocieron algunas experiencias de campesinos y un tiempo después, en una visita a la finca de Miguel Ángel en La Calera, consiguieron las primeras semillas, plántulas de lechuga y semillas que darían luz al proyecto, pero Miguel, como Valeria, Katherine, Daniel, María Victoria, Maicol, Leonardo, Angela, Juan, Jaime, Kael, Ca-

rolina, Hernán y los otros miembros del grupo, no tenían muy claro la cosa del trabajo en el campo, pero se metieron de lleno en la siembra.

Resultaba en esos días hasta simpático ver al grupo de estudiantes de biología, ecología, antropología debatiendo sobre la cantidad de tierra, la forma de colocar las semillas, la dosis de agua. De forma empírica se fue gestando la idea y en ese método de prueba, ensayo, error aprendieron en el camino a cultivar.

Son muchas las lecciones aprendidas, manejos de las tierras, sustratos, abonos con cascarillas de huevos, el uso de ortigas contra las plagas. También la forma de sembrar, pues se utilizan botellas desechables, bolsas de leches, hasta guacales

¹ Comunicaciones. Grupo Semillas. C.e.: info@semillas.org.co

y pedazos de bambú. “La Terraza permite crear un techo verde que evita el calentamiento global y produce más CO₂ y además podemos enfriar los edificios y con eso generamos cambios, promoviendo el ahorro de energía”.

Ha sido tanto el impacto generado por esta iniciativa que la Facultad de Estudios Rurales, carrera de Ecología, apoyan el proceso. Recientemente los estudiantes de la facultad de arquitectura propusieron intervenir los espacios de la universidad con objetos reciclables de uso diario diseñados aptos para la agricultura urbana, lo cual motivó a un buen número de propuestas que contemplan botellas y cajas, entre otras. A cambio La Terraza recibió semillas. Estos intercambios interuniversitarios son excelentes oportunidades de visibilización del proceso.

Comida sana

En La Terraza por el momento se producen algunos alimentos, flores, aromáticas para los miembros del grupo y algunos profesores, pero se contempla en un mediano plazo asegurar modelos de producción sostenible y viables en el tiempo.

Para los procesos económicos de la universidad se experimentó con las lechugas orgánicas que por un tiempo llegaron a algunas cafeterías. Según Daniel Escobar “Esto trae muchos beneficios, al evitar gastos asociados de traslado, se benefician los comerciantes, bajan los precios, y se genera menos contaminación. Se benefician a los alumnos, porque también ellos van a tener acceso a comida sana, libre de químicos”.

Profundizar en este ciclo conlleva a solventar una producción sostenible y en estos momentos se trabaja en este aspecto. Por el momento el proceso camina a su debido tiempo, sin afanes. Actualmente se trabaja promoviendo la diversificación de cultivos e involucrando

a más alumnos que cada vez se interesan en acercarse a la tierra. “Aquí todos pueden aprender haciendo” comenta Hernán Parada, “y en esta idea se experimenta con semillas y otras variedades como el proyecto que llevamos con lombrices”.

Además el Grupo La Terraza promueve otras actividades relacionadas con el tema ciudad-campo. Se planea realizar eventos, visitar otras experiencias y crear mecanismos de participación en la que se logren invitar a diversos personajes provenientes del campo y a la vez de la academia, el espacio está abierto para que juntos se intercambien experiencias y se lleguen a conclusiones que puedan aportar al proceso, lo cual además de reflexiones y buenas prácticas genere la solidaridad y el intercambio.



Uno de los problemas que afronta este proceso es la continuidad en el tiempo, ya que los estudiantes que iniciaron este trabajo están graduados o por graduarse y se deben articular más personas para sostener La Terraza. Por eso también se desarrollan algunas iniciativas que permiten

en un permanente diálogo de saberes, asesorar y capacitar a las nuevas manos que quieran unirse a este proceso.

La idea es seguir sembrando: en bambús, trastos, zapatos viejos, herramientas en desuso, con la sapiencia que les otorga el camino andado. Hay mucho interés en trabajar las semillas nativas de la zona y consolidar la producción de los frutos que han logrado cultivar, entre los que se destacan: lechugas, acelgas, rábanos, brócoli, tomate cherry, maíz; las curubas, uchucas, duraznos, lulos, y las plantas medicinales como ortiga, manzanilla, caléndula, y hasta ornamentales como las semillas de los árboles de páramo (campanos y balizos), los ornamentales como los girasoles, sietecueros, amargueros, orquídeas y amapolas. 🌱

La finca Utopía: Gesta de un nuevo mundo

Grupo Semillas



Detrás del cerro de Monserrate, se localiza la vereda El Verjón, zona de páramo a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Según el Plan de Ordenamiento Territorial hace parte de la ruralidad de la localidad de Santa Fe, y se accede desviándose por el kilómetro 11 de la vía que conduce a Choachí.

Es un lugar escarpado semidesértico y agreste, con grandes rocas que parecen tallas de rostros humanos. En este sitio al final de la carretera sin pavimentar Jaime Aguirre, un hombre de negocios que se cansó del consumo y las leyes del mercado, dio un vuelco total a su vida y decidió formar una granja agroecológica, convirtiéndose con el tiempo en lo que el mismo denomina: neo-campesino.

Corría el año 2000 cuando Jaime y su compañera Ari Cabrera, antropóloga con estudios en ciencias políticas, se establecieron en el filo de la montaña y comenzaron a recuperar la tierra. Ninguno tenía en un inicio muchos conocimientos. “todo lo que habíamos aprendidos en la ciudad debíamos desaprenderlo”, comentan.

Comenzaron a trabajar con la ayuda esporádica de algunos vecinos y amigos. Pocos auguraban éxito en esta empresa loca, pues significaba una tarea colosal recuperar este terreno quieto y quizás de ahí nació el nombre de Utopía que concibe una significación singular de coraje y emprendimiento. Como diría Ari, “la gesta de un nuevo mundo”.

Así se construyó una casa, en medio de una zona de reserva forestal y la primera tarea fue el rescate de las semillas nativas. La siembra de quinua, maca, yacón y amaranto le dio a Utopía un referente en la agricultura de la región y una oportunidad al campesinado de El Verjón acostumbrado a la ganadería y otras prácticas poco amigables con el medio ambiente.

En estos trece años que enmarca la aventura de Utopía, se han podido recuperar importantes variedades de semillas nativas de los Andes y gracias a este trabajo se han preservado diferentes especies de hortalizas, treinta variedades de papa nativas, doce variedades de maíces de altura y dieciséis variedades de habas.

De los frutos se genera la alimentación de la familia, que además de Jaime y Ari los conforman los tres herederos: Neva (10 años) nombre referente a los escritos proféticos de una nueva Eva; Niyalá (3 años) que en el idioma de los kogui significa aguacero, pues el día de su nacimiento cayó un impresionante chubasco y el bebé Shatiri que apenas tiene cuatro meses. Enseñados en el campo, la familia unida trabaja a diario en la huerta, produciendo su propia comida, alimento sano libre de químicos.

“Para nosotros esto ha sido una nueva forma de nacer. El alimento es salud, cultura, y a diario reinventamos el mundo”. Con su trabajo en familia, en Utopía se promueve una resistencia a los modelos

hegemónicos y se promueve la permacultura. Por eso llama la atención a los visitantes encontrar las formas de espiral en que se siembran los alimentos, pues a la distancia producen unas figuras coloridas que se asemejan a los petroglifos de nuestras culturas aborígenes.

Además, *Utopía* consta de un componente formativo. Para la educación de sus hijos, Jaime y Ari han creado su propio sistema que mezcla la labranza con la enseñanza de los libros, ya que la casa posee una gran biblioteca con lecturas de muchos temas. De estas experiencias familiares en educación alternativa surgieron diferentes talleres como “en la tierra y para la tierra” que promueven actividades de recuperación, conservación y distribución de semillas nativas ancestrales, así como de la transformación de los alimentos.

En la tarea de conservar la diversidad, garantizar la soberanía y autonomía alimentaria, se ha constituido bancos comunitarios de semillas y un programa de custodios de semillas en donde se asigna un guardián que asegure la existencia de determinada semilla.

Al convertirse en un espacio abierto, a Utopía constantemente llegan infinidad de personas de todo el mundo, lo cual se perfila como un destino en el turismo agroecológico de Bogotá Región. Allí se puede caminar por los cultivos, compartir los conocimientos y participar de actividades como témazcal. Para mediados de este año esperan instalar un Tipi, vivienda nómada ancestral de los indígenas norteamericanos, para ofrecer a sus visitantes la opción de hospedaje, en su propia bioconstrucción que contara con energía solar.

“Por el momento nuestro objetivo es llegar a convertirnos en auto-sostenibles liderando los procesos del ciclo natu-



ral: semillas - alimentos - comercialización”. Es un proceso arduo, pues en un inicio, comenzaron dejando los excedentes de sus alimentos en tiendas orgánicas y especializadas de Bogotá, que se quedaban con un alto porcentaje.

El acercamiento con otros agricultores, de otras partes del país y del mundo, conllevó a recoger en los diferentes intercambios una inmensa variedad de semillas que con el tiempo llevó a Jaime a conformar un banco semillero.

En el 2009, Utopía se convirtió en la columna vertebral de una iniciativa que cobija a treinta familias de la zona y que se denomina La Red de los Verjones. En esta red de trabajo asociado se articulan los procesos de los campesinos del lugar en torno a la soberanía alimentaria, la economía campesina, la recuperación y banco de semillas. Unidos por el territorio, la red ha logrado construir espacios de diálogo, producción y comercialización.

Los agricultores de la región se comprometieron con las prácticas orgánicas para cultivar sus alimentos y gracias a los lazos de solidaridad y cooperación se promueven actividades más productivas. Este importante avance a nivel local permitió llevar a debatir sobre el aporte del campesinado a Bogotá y en esta búsqueda nacería una red cooperativa más amplia y que cobija a organizaciones de otras partes del país. Fue así como surgió la asociación Familia de la Tierra, conformada por la alianza entre sectores populares, campesinos y neocampesinos.

Familia de la Tierra es una organización no jerárquica y abierta a promover la participación activa de todos los miembros y cuenta como aliada al Movimien-



to Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA). Por medio de esta iniciativa la producción no está sujeta a las condiciones de un distribuidor que condiciona el valor de los productos y el acercamiento con el consumidor.

Esto genera que al evitar de la cadena productiva a estos eslabones perversos, los productos tengan un valor competitivo. Este ha sido uno de los importantes avances de Familia de la Tierra, ofrecer productos orgánicos en algunos casos más económicos que los alimentos producidos con agroquímicos.

Familia de la Tierra en la actualidad es una importante distribuidora de alimentos orgánicos del país. En su canasto se encuentra una variedad de 178 productos orgánicos y variedad de semillas nativas también.

Vale agregar que los productos son más atractivos por la transformación que les han dado. Frutos de Utopía promueve el Choco Andino, una bebida natural energética en polvo a base de cacao, quinua y maca, y el Andígeno compuesto de amaranto, quinua y maca. La Utopía dejó de ser una utopía y hoy es un ejemplo para otras experiencias alrededor del país y el mundo.

**Jornadas transgénicos,
nuevas tecnologías y soberanía alimentaria
Bogotá, mayo 23 a 27 de 2013**

América Latina es el área donde más crecen los cultivos transgénicos a nivel mundial. A los grandes campos de soya del Cono Sur se suma la expansión de maíz y algodón transgénicos que se están sembrando en varios países de la región. Por otro lado están surgiendo nuevas y más peligrosas tecnologías, como la biología sintética, la nanotecnología y América Latina será uno de los campos de experimentación.

Del 23 al 27 de mayo de 2013 se realizaron en Bogotá, las *Jornadas transgénicos, nuevas tecnologías y soberanía alimentaria en América Latina* que convocaron la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, el Grupo Semillas, la Fundación Swissaid y la Universidad Nacional de Colombia, Las *Jornadas* tuvieron como objetivo analizar la situación de los cultivos transgénicos, en el marco de la expansión del modelo de agricultura corporativa y la biotecnología, y las diversas propuestas para construir sistemas agrícolas alternativos en la región.

Inicialmente en la Universidad Nacional, se llevó a cabo el *Encuentro de organizaciones locales y sociales para la defensa de los maíces criollos en Colombia*, donde se analizaron las distintas amenazas que enfrenta el maíz en nuestro país y en Latinoamérica, especialmente por los cultivos de maíz transgénicos. Igualmente se presentó el *Inventario nacional de los maíces criollos en Colombia* que constató a nuestro país como centro de diversidad y se evidencia la potencialidad de esta biodiversidad local, y también la crítica situación de pérdida de las variedades criollas en el país. Adicionalmente se realizó un trueque de semillas de maíz, permitió un intercambio de experiencias de saberes tradicionales y de semillas y reafirmar la importancia de la cultura de maíz en las comunidades locales.

Luego se realizó el lanzamiento del libro *Ecología política de la bioseguridad en América Latina*, donde se discutieron las serias limitaciones de las normas y evaluaciones de bioseguridad en América Latina y los impactos ambientales y sociales de la liberación de organismos transgénicos. Además se realizó el foro público *La problemática de los cultivos transgénicos en América Latina* donde se discutieron los efectos negativos de la biotecnología y la agricultura corporativa sobre la biodiversidad, la salud humana y las economías rurales tradicionales. En el foro se abordó: La situación de los transgénicos en América Latina; los nuevos transgénicos y otras nuevas tecnologías; impactos del glifosato en la salud humana; mosquitos transgénicos; el maíz transgénico en México; el fracaso de los cultivos transgénicos en Colombia; el caso de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Argentina; zonas libres de transgénicos en Costa Rica y diez años de transgénicos en Brasil.

Posteriormente se llevó a cabo la reunión de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), con la participación de miembros de doce países, en donde se presentaron los impactos y situación críticas de los transgénicos y las estrategias y acciones de resistencia en cada país y se definieron acciones conjuntas de la red para enfrentar los Transgénicos en nuestros países. Finalizando estas jornadas, el Grupo ETC, realizó un taller sobre nuevas tecnologías como la biología sintética, la nanotecnología y la geoingeniería.

Presentamos la declaración de la RALLT, frente a la introducción de cultivos transgénicos en América Latina:

Declaración de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos

A casi dos décadas de la primera introducción de transgénicos en el ambiente, América Latina se ha convertido en maquila de las transnacionales que producen granos para animales de otras transnacionales, contaminando el ambiente y la biodiversidad.

Pero sigue siendo un espacio de biodiversidad, donde florece la vida y las comunidades campesinas

A 17 años de haberse liberado los cultivos transgénicos en el ambiente, 30 organizaciones de América Latina pertenecientes a 12 países de la región, convocadas por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos en la ciudad de Bogotá - Colombia, del 23 al 27 de mayo del 2013, analizamos el panorama de nuestro continente, y hacemos pública nuestra preocupación por los graves impactos que estos cultivos tienen en la región. A lo largo de este período, los cultivos transgénicos han sembrado desolación y muerte en América Latina, donde estos cultivos han alcanzado altos niveles de expansión, ocupando el segundo lugar en área cultivada con transgénicos en el mundo. Las empresas productoras de semillas, agrotóxicos y comercializadoras de alimentos transgénicos junto con las élites locales y en complicidad con los gobiernos del turno, han convertido a América Latina en maquila de los cultivos transgénicos del mundo.

No existen cultivos transgénicos sin plaguicidas

A pesar de que los promotores de los cultivos transgénicos dijeron que éstos iban a disminuir el uso de plaguicidas, la realidad es opuesta. Ha habido un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos en los países que han adoptado esta tecnología y su aplicación está relacionada especialmente con los cultivos resistentes a herbicidas, lo que ha significado el some-

timiento de la población a una condición sanitaria cercana al genocidio. En el Cono Sur, la soja resistente a glifosato cubre un área de 475.700 km²; toda esta área es fumigada con un cóctel de agrotóxicos que incluye el glifosato, afectando a cerca 10 millones de personas que viven en la zona de influencia de las fumigaciones asociadas a los cultivos transgénicos.

Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de agrotóxicos desde 2010, siendo el principal productor de soja resistente a glifosato en la región. Esta avalancha tóxica ha provocado un aumento exponencial de enfermedades relacionadas con plaguicidas, como malformaciones genéticas, incremento de leucemia, linfomas, enfermedades autoinmunes, y daños irreparables en los ecosistemas. Estos problemas se agudizarían con la adopción de *nuevos eventos transgénicos resistentes a herbicidas más fuertes* como son el 2,4D y Dicamba, el glufosinato de amonio, que ya han sido aprobados o están en proceso de aprobación en nuestros países, por lo que repudiamos cualquier intento de liberarlos al ambiente. A esto se suma la contaminación genética de la agrobiodiversidad y la destrucción de ecosistemas naturales, que son la base de sustento de las comunidades locales.



Los problemas generados por los transgénicos, han generado violaciones a los derechos humanos

Los impactos descritos son tan graves, que ha dejado de ser un problema que puede resolverse a través de técnicas como la evaluación y manejo del riesgo, para convertirse en un causal de violación de los derechos humanos de poblaciones enteras, por lo que su discusión debe salir de convenios internacionales como el Protocolo de Cartagena que se limita a ver los impactos de la modificación genética en la biodiversidad, para ser tratado por los organismos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Los cultivos transgénicos no nos alimentan

Las vastas zonas dedicadas a la siembra de cultivos transgénicos en América Latina, antes dedicadas a satisfacer el derecho humano a la alimentación, hoy son territorios donde se produce soja y maíz transgénico para forraje, destinados a la cría intensiva y confinada de animales, que en la mayoría de casos son criados en otros continentes, privando a la población nativa del acceso a alimentos sanos y culturalmente adecuados. En los países donde se cultivan soja y maíz transgénico los animales son criados en condiciones sanitarias muy pobres y de gran violencia, lo que repercute en la calidad de la carne, lo que conlleva enormes impactos en los patrones de alimentación y en la salud humana y de los animales. Los transgénicos son un negocio de transnacionales para transnacionales, no para consumidores ni para agricultores. Los transgénicos son *comida para comederos, no de comederos*; e incluso han desplazado la cría tradicional de animales en países donde esto era costumbre, empeorando la salud, el ambiente y las economías de pequeños criadores.

Las nuevas leyes de semillas son un impulso a la expansión de los transgénicos y una amenaza a las semillas nativas.

En la región se están impulsando nuevas leyes de semillas, donde se plantea la penalización de la circulación de las semillas nativas que son la base de la agricultura

campesina y familiar. Esto es una clara violación a los *derechos de los agricultores*, claramente reconocidos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estas leyes además buscan reforzar el control de mercado por parte de las empresas de semillas transnacionales, y la adopción de las semillas transgénicas en nuestros campos, poniendo en peligro los recursos fitogenéticos de la región.

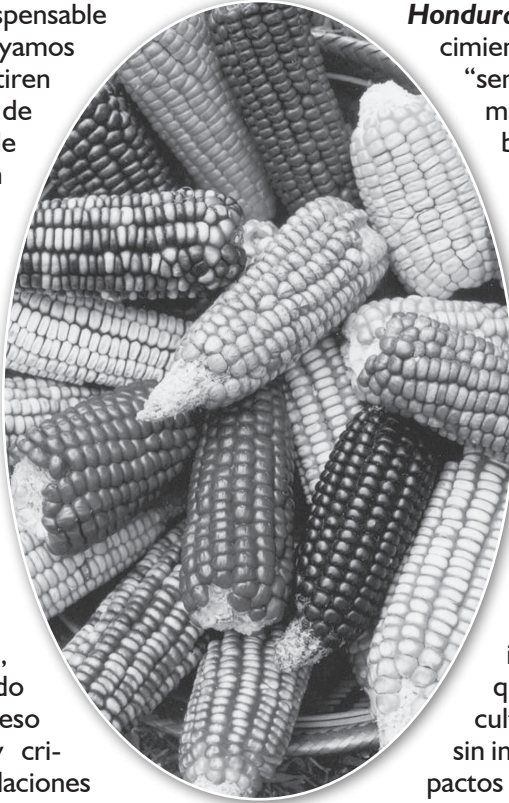
Las organizaciones reunidas en Bogotá queremos llamar la atención sobre las siguientes problemáticas específicas en América Latina:

Paraguay: Repudiamos el golpe de estado parlamentario dado al presidente Fernando Lugo, pues estuvo muy relacionado con la expansión del agronegocio y la liberación ilegal de nuevos cultivos transgénicos en ese país. Nos preocupa además el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y la expulsión de comunidades indígenas y campesinas Guaraní para dar paso a la expansión de los cultivos de soja transgénica, que desde la década de los noventa viene causando graves conflictos socioambientales y la persecución a líderes defensores de la naturaleza. Por lo tanto hacemos un llamado a la *Alta Comisión de las Naciones Unidas* para que inicie una investigación sobre los atropellos a los derechos humanos suscitados en Paraguay relacionados con la expansión de los cultivos de soja; y a la sociedad internacional que esté vigilante de los acontecimientos en este país.

México: Apoyamos y nos solidarizamos con el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, y estaremos especialmente atentos a las sesiones de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los Pueblos”, donde se está presentado una gran cantidad de casos y testimonios de pueblos, científicos y activistas sobre la contaminación transgénica y otras violaciones ejercidas por las transnacionales, con apoyo oficial, contra el maíz y los pueblos del maíz. Nos adherimos a la demanda de las y los ciu-

dadanos mexicanos de evitar la siembra comercial y experimental de organismos genéticamente modificados en especial del maíz transgénico, siendo México uno de los países centros de origen del maíz. Respalamos los argumentos y elementos de peso científico, socioeconómico, cultural y daño irreversible de los transgénicos, que expone en la red, la *Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)* y otras organizaciones científicas y sociales, sumándonos a la petición para que no se autorice la siembra comercial de maíz transgénico y se declare una moratoria indispensable en este cultivo. Apoyamos también que se retiren las autorizaciones de siembra comercial de soya transgénica en Yucatán, ante el impacto negativo para los miles de apicultores que sufren afectación por la limitación de venta de miel a la Comunidad Europea, por contaminación transgénica.

Argentina: Rechazamos el avance de la frontera agrícola en el norte del país, lo que ha conllevado a un agresivo proceso de desplazamiento y criminalización de poblaciones originarias que debe parar. Rechazamos además la aprobación y liberación de nuevos eventos transgénicos que incorporan genes de resistencia a nuevos herbicidas apilados, así como nuevas toxinas Bt. Apoyamos la petición de las organizaciones ambientalistas, grupos auto-convocados de vecinos afectados por los agrotóxicos y movimientos sociales argentinos para que con urgencia se implementen zonas de resguardo libres de fumigaciones de mil metros como mínimo, alrededor de pueblos, escuelas rurales y humedales; se prohíban las fumigaciones aéreas, y que se implementen



de estudios epidemiológicos y biológicos para determinar el impacto en la salud humana y ambiental respectivamente por el uso masivo de agroquímicos y que con base a los resultados encontrados, se inicie un proceso de restauración integral de las víctimas. Repudiamos además el acuerdo hecho por la Presidenta argentina con Monsanto para instaurar nueva infraestructura en el país, como la planta de acondicionamiento de semillas planificada en la Localidad Malvinas Argentinas-Córdoba, y otras.

Honduras: Tenemos conocimiento de la campaña “sembramos país con más maíz”, para sembrar cien mil hectáreas de maíz transgénico el año 2020, impulsada por Monsanto Agrícola de Honduras, Bayer, Fenorza y el gobierno central, con la que se pretende afianzar el posicionamiento de la semilla transgénica en territorio hondureño y extender un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos, que impulsa una agricultura sin agricultores, sin importar los graves impactos que este tipo de agricultura ocasiona a la salud y el ambiente y que aumentará la inseguridad alimentaria del pueblo hondureño, por lo que pedimos al gobierno de Honduras parar tan nefasta iniciativa y que se ponga un alto definitivo a los transgénicos en Honduras. Queremos cuestionar además el rol que juega el *La Escuela Agrícola Panamericana*, más conocida como *El Zamorano*, que sirve de punta de lanza para la promoción de los transgénicos en las regiones tropicales de América Latina. En su sede se forman técnicos y se desarrollan las tecnologías que están al servicio del agronegocio.

Costa Rica: Apoyamos a las organizaciones sociales de Costa Rica quienes han optado por un modelo de desarrollo agrícola libre de transgénicos y propiedad intelectual; basado en la agroecología y las semillas ancestrales y criollas; y a todos los 57 cantones que se han declarado libres de transgénicos. Por lo mismo, rechazamos el intento de empresas transnacionales que pretenden sembrar maíz transgénico en ese país, y apoyamos la llamada a moratoria de 30 años a la liberación de cultivos transgénicos y demás cultivos manipulados mediante técnicas de la ingeniería genética en el territorio nacional, pedida por las organizaciones sociales.

Panamá: Nos preocupa que Panamá se está convirtiendo en el campo de experimentación de nuevos transgénico, lo que se está haciendo a espaldas de la sociedad. En Panamá se encuentra la planta para producir mosquitos transgénicos de la empresa Oxitec y que opera en las instalaciones del Instituto Georgas. En este país también se planea criar el salmón transgénico desarrollado por la Aqua Bounty Technologie, y sería el primer animal transgénico que entraría en nuestra alimentación. El salmón GM sería producido en la Isla Prince Edward -Canadá, y los huevos serían enviados a tierras altas de Panamá, donde se haría también el procesamiento del animal. Este pez transgénico tiene genes que expresan una hormona de crecimiento que sólo se activa solo en clima cálido, por eso se escogió a Panamá para su cría.

Colombia: Luego de diez años de ser liberado comercialmente el algodón transgénico de Monsanto, los algodoneiros han fracasado con el uso de esta tecnología y han tenido millonarias pérdidas y aunque la mayoría de los agricultores ya no quieren saber de esta tecnología, Monsanto ha retirado del mercado las semillas de algodón no transgénicas. Desde el año 2007 se han liberado comercialmente diez eventos de maíz transgénico, lo que es muy crítico, puesto que por ser Colombia un centro de diversidad de maíz, los maíces transgénicos generan un enor-

me impacto sobre la diversidad de maíces criollos, los sistemas productivos locales y la soberanía alimentaria en el país. Apoyamos las iniciativas de la sociedad civil colombiana que busca que se prohíban los cultivos y alimentos aprobados y que se declare el país libre de transgénicos.

Ecuador: Saludamos al pueblo ecuatoriano por haber incorporado en su Constitución una prohibición expresa a los cultivos y semillas transgénicas, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en buen vivir como el camino que debe relacionar a la sociedad con su medio. Nos preocupa sin embargo que en un futuro próximo se intente de cambiar la Constitución del país, para que deje de ser libre de cultivos y semillas transgénicas. Los estudios hechos en ese país dan cuenta de la rica agrobiodiversidad existente, la misma que no está contaminada genéticamente, por lo que el Ecuador mantiene su condición de país libre de transgénicos. Por lo tanto exhortamos a la Asamblea Nacional que mantenga al Ecuador libre de Transgénicos.

Perú: Recibimos con beneplácito la moratoria decretada en Perú a los transgénicos en ese país, y hacemos votos porque esa moratoria se convierta en una prohibición definitiva, que permita potenciar la rica agrobiodiversidad peruana. Destacamos que la moratoria es el resultado del trabajo desplegado por una amplia alianza que incluye al campesinado, a consumidores y al sector de la gastronomía consciente de la necesidad de proteger su patrimonio genético y su biodiversidad.

La situación en **Bolivia** no deja de ser preocupante. Si bien la Constitución establece el principio prohibitorio de transgénicos, y la Ley Marco de la Madre Tierra la eliminación paulatina de la soya transgénica, así como la prohibición tajante a los transgénicos de cultivos de los cuales el país sea centro de origen y centro de diversidad,

como es el caso del maíz, de la papa, ajíes, maní, etc., las corporaciones del agronegocio se jactan del crecimiento sostenido (que llegaría al 99% de la soya cultivada) desde que el 2005 se aprobó el primer evento resistente al glifosato. El control de la cadena productiva de la soya está en manos de empresas extranjeras -66 % principalmente menonitas, brasileños y japoneses- que amplían la frontera agrícola a un ritmo de desmonte y deforestación de 60 mil hectáreas anuales.

Uruguay: Hacemos un llamado para que se frene el acaparamiento, extranjerización y especulación de la tierra en Uruguay, proceso que viene acompañado con la expansión del monocultivo de árboles y soja transgénica, y que se haga un estudio para revertir este fenómeno. Queremos además rechazar las investigaciones hechas con animales transgénicos como ovejas en Uruguay.

Brasil: Los brasileños analizan los diez años de la legalización de los cultivos transgénicos en Brasil, con 36 eventos transgénicos aprobados, millones de hectáreas cubiertas con soja, maíz y algodón transgénico, con varios otros cultivos en la lista de aprobación y ostentando el dudoso honor de ser primer consumidor de plaguicidas en el mundo. Nos preocupa la aprobación del fréjol modificado genéticamente, desarrollado por Embrapa usando una técnica que modifica el ARN, para que sea resistente a un virus, porque este tipo de modificación genética nunca ha sido liberada de manera masiva al ambiente, y mucho menos para el consumo humano directo. Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas que demandan acceso a toda la información científica relacionada con la modificación genética de este fréjol, incluyendo sus impactos potenciales en la salud y el ambiente. Creemos que el hambre tiene causas estructurales, y que por otro lado, Embrapa podría destinar sus esfuerzos de investigar en potenciar la agroecología y la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, y que sea respetuosa con el medio ambiente y tener en cuenta el sector social.

Apoyamos la petición hecha por las organizaciones brasileñas que demandan que se implemente un proceso de monitoreo y vigilancia post-liberación de los cultivos transgénicos, cuyos resultados sean disponibles para la sociedad civil organizada. Nos oponemos rotundamente al uso de tecnologías "Terminator", que vuelven estériles a las semillas, para lograr que los agricultores se vuelvan esclavos de las empresas. Denunciamos los intentos de romper la moratoria internacional sobre "Terminator", iniciados a partir de propuestas para legalizar dicha tecnología en el Congreso de Brasil.

Chile: En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se ha demostrado en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile, así como de la miel.

Venezuela. Saludamos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional de Venezuela que busca garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país.

A pesar de todos estos problemas, en nuestro continente pervive una rica cultura campesina que es la que alimenta al 70% de la población. En sus territorios se conserva la más rica agrobiodiversidad del planeta que está en continuo proceso de renovación. Aquí se extienden los más grandes territorios cubiertos con bosques tropicales, así como de otros importantes ecosistemas.

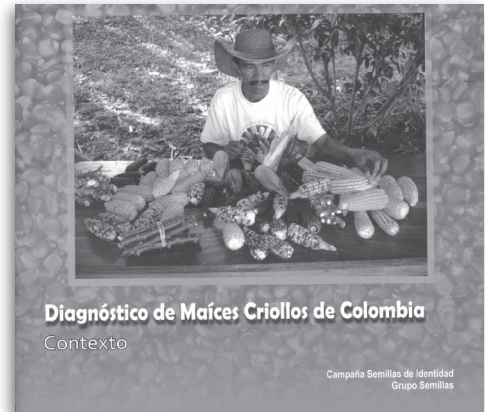
**Por una América Latina
Libre de Transgénicos y
la revitalización de la agricultura
campesina y familiar**



Publicaciones

Diagnóstico de Maíces Criollos de Colombia *Campaña Semillas de Identidad / Grupo Semillas - 2013*

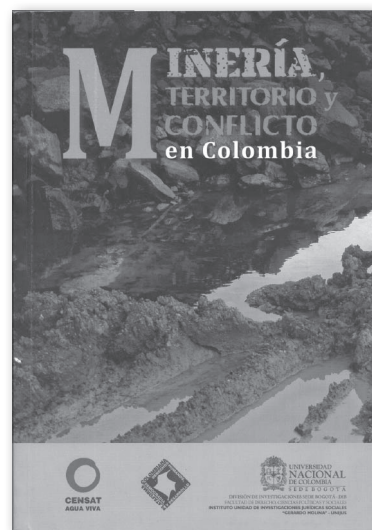
Esta publicación realizada por la Fundación Swissaid y el Grupo Semillas es una colección que cuenta con un folleto introductorio y cinco cartillas divididas por las regiones del país. Encontramos prácticas agrícolas, maíces de importancia económica y gastronómica, rituales y formas de cultivo. Mientras Colombia se considera un país megadiverso en maíz, paradójicamente, la siembra de maíz transgénico ha aumentado de forma alarmante y sólo en el año 2011 fue de 59.239 hectáreas. Este trabajo, hecho de forma participativa con comunidades y con agricultores que por años han sido custodios de semillas, resulta un primer paso para la apropiación del territorio y la agrobiodiversidad por parte de las comunidades y que permitirá implementar estrategias locales y nacionales para recuperar y conservar las variedades nativas y criollas de maíces, muchas de ellas en vías de extinción.



Informes: biodiversidad@swissaid.org.co; semillas@semillas.org.co

Minería, Territorio y Conflicto en Colombia

Censat-Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Universidad Nacional de Colombia - 2012



En este estudio realizado por varios especialistas en el tema y donde se observa el gran mapa de la minería en el país, se cuestiona las prácticas generadas por la minería, las cuales ocasionan además de agresivos impactos ambientales, violencia contra las comunidades. La concepción progresista que hace énfasis en el extractivismo como eje fundamental de un desarrollo económico latinoamericano avanza en los territorios, en la medida que surge también una geopolítica de la autonomía que cuestiona estas prácticas de apropiación y explotación de la naturaleza existentes en el país y en la región desde la época de la Colonia.

Las alternativas a este modelo se construyen cotidianamente y precisa conocimientos y reflexiones que ayuden a comprender la diversidad ecológica y cultural del país, así como las necesidades de sostenibilidad, profundización democrática y de justicia y paz de su población. Es un libro recomendado para entender





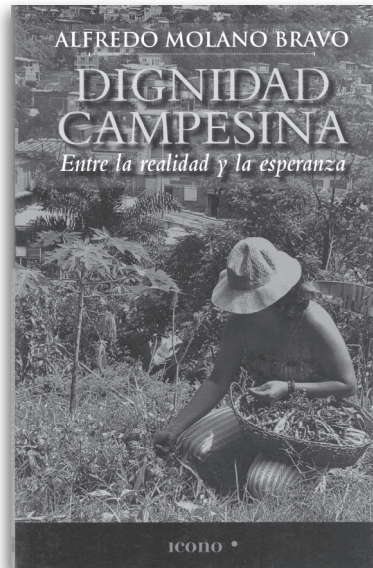
lo que ha significado la minería en nuestro país y el continente, y las propuestas de resistencia que surgen desde las comunidades en muchas regiones del país.

Informes: mineria@censat.org - insisjpg_bog@unal.edu.co

Dignidad Campesina – Entre la realidad y la esperanza

Alfredo Molano Bravo - 2012

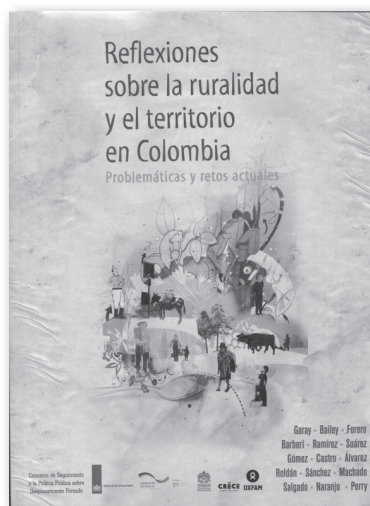
Este libro como una especie de bitácora de viaje por el país, nos lleva a conocer las amenazas del campesinado colombiano. Molano construye en este texto una mirada del paisaje colombiano, donde prevalece la gente, las voces de los sin voz. Así de su pluma, recorreremos la ancha y vasta geografía. En las crónicas nos encontramos con el macizo colombiano, “donde se respira un ambiente caldeado” por la explotación del carbón; la fiebre de oro en Marmato que pretende trasladar el pueblo a otro lugar para hacer una mina a cielo abierto; la situación de Caramanta luego de una era paramilitar y de desplazamiento se construye como una nuevo foco de “desarrollo” aurífero; las complejas luchas por las reivindicaciones campesinas en Simití y la situación de los campesinos frente a las explotaciones petroleras en Rubiales (Meta). Alfredo Molano evidencia un panorama del modelo de desarrollo rural que va en contravía de los intereses de los campesinos y nos muestra una apuesta por encontrar la dignidad a nuestro campesinado.



Informes: gmgarcia@iconoeditorial.com

Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia – Problemáticas y retos actuales

Oxfam - Campaña Crece - 2013



Con el fin de nutrir los debates y poner de relieve las voces de diversos actores en una coyuntura retadora y sin precedentes para el mundo rural colombiano, enmarcada por la inclusión del Desarrollo Rural como uno de los cinco puntos de las actuales negociaciones de paz de Colombia, surge esta tercera publicación que ya reunió anteriormente reconocidos analistas del tema agrario y que en este volumen se abordan aspectos estructurales de las problemáticas del campo colombiano, haciendo énfasis en la situación de las mujeres rurales y la formulación de propuestas concretas alrededor del tema rural.

Informes: www.oxfam.org

Paremos la Locomotora Minera

Un grupo de ciudadanos y organizaciones comprometidas con las luchas y los procesos sociales en defensa de lo público y los bienes comunes de la nación hemos decidido aliarnos para promover una campaña para recoger firmas en respaldo a los puntos siguientes a fin de evitar la catástrofe social y ambiental que está causando la denominada locomotora minera. Invitamos a organizaciones sociales, gremiales, ambientales y estudiantiles a sumarse a esta iniciativa con su respaldo a la convocatoria y al proceso de recolección de firmas para suscribir la moratoria minera.

De no expedir títulos mineros ni licencias ambientales para exploración o explotación minera hasta que:

1. Se revisen, por una comisión independiente y no gubernamental, los títulos mineros y licencias ambientales expedidas hasta hoy, y se revoquen o anulen los que violen la Constitución, la Ley o causen grave daño al agua, al ambiente o a la salud humana.
2. Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana.
3. Se prohíba el uso del cianuro y cualquier otro agente altamente tóxico utilizado en la actividad minera.
4. Se garantice que el transporte terrestre, marítimo y fluvial de los minerales extraídos sea seguro para los seres humanos y el ambiente.
5. Se reforme el Código de Minas, eliminando el carácter de actividad de utilidad pública y de interés social que actualmente tiene la minería para que prevalezcan sobre la normativa minera los principios constitucionales y legales ambientales, los de autonomía territorial étnica, así como los derechos de los propietarios o poseedores de la tierra sobre las concesiones del subsuelo.
6. La expedición de títulos mineros y licencias ambientales quede sometida a la revisión y decisión de una comisión independiente, con participación de la sociedad civil.
7. Se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera en el territorio del municipio que así lo decida.
8. Se garanticen y respeten los derechos laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores de la minería.
9. Se den garantías para que la pequeña minería se realice con respeto al ambiente y la salud de los mineros y las comunidades y, cuando esto no sea posible, se apoye la reconversión del pequeño minero y el minero artesanal a otra actividad tanto o más productiva.
10. Se modifiquen la política y los porcentajes de regalías desventajosas que recibe el Estado por las concesiones mineras y se eliminen los incentivos tributarios y prerrogativas que tienen las actividades mineras por encima de las demás actividades económicas.
11. Se garanticen los procesos adecuados de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en sus territorios y conforme a sus sistemas de derecho y gobierno propios.
12. Se declare la emergencia ecológica para adoptar con prontitud las medidas que correspondan a los puntos anteriores.

Promueven:

Asamblea Sur
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC
Asociación para el Desarrollo campesinos - ADC (Pasto, Nariño)
Amigos del Páramo de Miraflores
Censat- Agua Viva
Corporación Compromiso
Corporación Jurídica Libertad
Corporación para la Gestión Humana y Ambiental - Corpofrailejon
Defensa y salvación del lago de Tota
Defensoras y defensores del agua
Desde Abajo
Fundación al Verde Vivo
Grupo Semillas
Indepaz
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
Reserva Sumapaz
Sindicato de trabajadores de empresas de servicios públicos - Sintraemsdes
Unión Libre Ambiental

Informes: www.moratoriaminera.org



PAREMOS LA LOCOMOTORA